

1136



DIVISIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL
MJC/AMR/PTG/MC/CCN/MPF

APRUEBA NORMAS TÉCNICAS DE LA
LIBERTAD CONDICIONAL

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 364

SANTIAGO, 19 MAR 2021

Hoy se resolvió lo que sigue:

VISTOS: Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; en el Decreto Supremo Nº 1.597, de 1981, del Ministerio de Justicia, que Aprueba el Reglamento Orgánico del Ministerio de Justicia; en el artículo 11 del Decreto Ley Nº 321, de 1925; en los artículos 12, 14 y 27, del Decreto Nº 338, de 2019, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; en la Resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón; y en la demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1. Que, de conformidad con lo dispuesto en el literal i), del artículo 2, del DFL Nº3, de 2016, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a esta Cartera Ministerial le corresponde entre otras funciones *"Dictar normas e impartir instrucciones a que deben sujetarse sus servicios dependientes y fiscalizar su cumplimiento"*.
2. Que, por otra parte, la Libertad Condicional es un beneficio que no modifica la duración de una pena privativa de libertad, sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad, en quienes hayan demostrado avances en su proceso de reinserción social.
3. Que, en el ámbito de la justicia penal y respecto de las leyes referidas a la ejecución de las penas, hay consenso en cuanto a la importancia de contar con mecanismos que adelanten la excarcelación y que ofrezcan una respuesta diferenciada a las personas que delinquen, donde la pena privativa de libertad no sea la única modalidad de cumplimiento de condena.
4. En este sentido, se releva la importancia del retorno progresivo al medio libre de las personas que cumplen una pena privativa de libertad, a través de una adecuada estrategia de supervisión, apoyo y control orientada a disminuir su reincidencia y favorecer su integración social.
5. Que, la supervisión de la Libertad Condicional, a través de un plan de intervención individual, promueve la reinserción social de las personas que cumplen condena entregando intervenciones especializadas para disminuir los factores de riesgo de reincidencia, y generando derivaciones oportunas a la red intersectorial en las materias que sean pertinentes.
6. Que, el artículo 11 del Decreto Ley Nº 321, y el artículo 27 del Decreto Nº 338, de 2019, establecen que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impartirá las normas técnicas relativas al sistema de supervisión de la Libertad Condicional, y evaluará periódicamente el cumplimiento y los resultados de este sistema. A su vez, los artículos 12 y 14, del Decreto Nº 338, de 2019, regulan el contenido y



los requisitos que deben observarse para la elaboración del informe de postulación psicosocial, siendo éste un insumo esencial y necesario para la evaluación de las necesidades y recursos de las personas beneficiadas, consistiendo ello en la primera gestión del caso que realiza el delegado de libertad condicional.

7. Que, las normas técnicas constituyen un complemento al D.L. N° 321, de 1925 sobre la Libertad Condicional y su respectivo Reglamento, integrando el marco normativo mediante el cual se garantiza la efectividad de esta modalidad de cumplimiento de la pena ante las Comisiones de Libertad Condicional, las instancias judiciales, la comunidad y las personas afectas a este beneficio legal.

8. Que, las normas técnicas que por este acto se aprueban, contienen aspectos técnicos de la elaboración de los informes de postulación psicosocial y los procedimientos a seguir por los Delegados de Libertad Condicional, así como por todos aquellos profesionales que participan en la ejecución de esta modalidad de cumplimiento de la pena.

9. Que, los lineamientos establecidos en estas normas técnicas son el resultado de un trabajo realizado en conjunto con Gendarmería de Chile, cuyo contenido refleja la revisión de la experiencia comparada y los estudios nacionales vinculados a la reinserción social de la población penitenciaria.

RESUELVO

1°.- **APRUEBÁNSE** las siguientes Normas Técnicas para la Libertad Condicional, cuyo texto íntegro es el siguiente:

NORMAS TÉCNICAS DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

Introducción

La libertad condicional es un beneficio al que pueden acceder las personas condenadas a una pena privativa de libertad que reúnan los requisitos de postulación establecidos en el Decreto Ley N°321, promulgado el 10 de marzo de 1925 y modificado el 18 de enero del 2019, por la Ley N°21.124.

Esta reforma ha incorporado cambios sustantivos al sistema de libertad condicional orientando la concesión y cumplimiento del beneficio en torno a los avances en el proceso de reinserción social de las personas condenadas. Dentro de las principales modificaciones introducidas se encuentra la obligatoriedad de contar con un informe de postulación psicosocial que oriente sobre los factores de riesgo de reincidencia de las personas postulantes; y la creación de un sistema de supervisión a través de la figura un(a) delegado(a) de libertad condicional.

El informe de postulación psicosocial constituye un requisito legal que permitirá que las Comisiones de Libertad Condicional puedan conceder o denegar el beneficio luego de haber tomado conocimiento de los avances reportados durante el cumplimiento de condena de quien postula al beneficio. De esta manera, se convierte en una herramienta de apoyo a la Comisión, para que la decisión tomada esté fundamentada en criterios técnicos objetivables en relación a los avances en el proceso de reinserción.

Por otra parte, la supervisión de la libertad condicional supone un gran desafío técnico y operativo para Gendarmería de Chile, al pasar de un control de tipo administrativo al deber de implementar un plan de intervención individual que le otorga un rol central al acompañamiento, a la intervención especializada y a la vinculación con las redes intersectoriales para apoyar una de las etapas más críticas del proceso de reinserción, que

es el tránsito hacia la comunidad después de haber pasado por un periodo de encarcelamiento. En este proceso es fundamental el rol del delegado(a), quien no sólo asume la función de conducir y promover cambios prosociales en las personas que cumplen condena, sino también de un funcionario de Estado que vela por el buen cumplimiento de una norma.

Las presentes normas técnicas guían las acciones que los y las profesionales deben seguir para elaborar el informe de postulación psicosocial y efectuar la supervisión de quienes obtengan la libertad condicional. Los lineamientos establecidos son el resultado de un trabajo conjunto entre Gendarmería de Chile y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 27 del Decreto N° 338 que aprueba el reglamento del DL. 321 a esta Cartera de Estado, y tienen, por tanto, carácter obligatorio al constituirse en el marco regulatorio de los procesos técnicos vinculados a la libertad condicional.

Estas normas, sus procedimientos y lineamientos deben complementarse continuamente con los insumos que se vayan levantando desde la práctica. Es por ello que es importante que su implementación vaya siendo evaluada, para poder identificar los aspectos que deben ser ajustados y mejorar la calidad técnica de las acciones y procesos aquí normados.

El documento se organiza en cinco capítulos; el primero, describe el marco normativo, que establece los requisitos legales para la postulación a la libertad condicional y la supervisión del beneficio; el segundo, sobre el marco conceptual, desarrolla brevemente los principales elementos teóricos que fundamentan los procesos técnicos de la libertad condicional; el tercero, explica los procedimientos para la elaboración del informe de postulación psicosocial; el cuarto, describe los procedimientos para realizar la supervisión de la libertad condicional; y el quinto, describe las funciones y responsabilidades de los actores involucrados en los diferentes niveles de implementación de la libertad condicional.

Capítulo I

Marco normativo

La libertad condicional es un beneficio legal que le permite a la persona condenada cumplir su pena en libertad, sujeta a la supervisión de un delegado de libertad condicional de Gendarmería de Chile. En lo que sigue se presentan los requisitos legales que las personas que están cumpliendo una condena privativa de libertad deben reunir para postular a la libertad condicional, y posteriormente, se describen los requisitos que la ley establece para efectuar la supervisión de las personas que han accedido a este beneficio.

1. Requisitos legales de la postulación a la libertad condicional

Los requisitos legales de postulación a la libertad condicional se encuentran señalados en el art. 2° del DL N° 321 de 1925, donde se establecen los tiempos mínimos de cumplimiento y la evaluación de la conducta requerida, siendo de relevancia para efectos de las presentes normas técnicas, el número 3) correspondiente al informe de postulación psicosocial.

Informe de Gendarmería de Chile

Tal como se establece en el Decreto Ley N° 321, será la Comisión de Libertad Condicional quién conocerá de la postulación a este beneficio, previo informe de Gendarmería de Chile, puesto que será mediante este informe que la institución deberá dar cuenta del cumplimiento de los requisitos legales.

Gendarmería de Chile realizará esta acreditación del cumplimiento de los requisitos para postular a la libertad condicional a través del informe del respectivo Tribunal de Conducta y los demás antecedentes, según sea el caso, que deba adjuntar. Por lo tanto, el informe de Gendarmería de Chile estará conformado por la nómina de las personas condenadas, que reúnan los requisitos para postular a la libertad condicional, con indicación del lugar que éstas fijen como residencia para efectos de la supervisión del beneficio, si este es concedido, y los demás antecedentes que sean requeridos para aquello, incluyendo el informe de postulación psicosocial.

Tiempos mínimos para la postulación

En lo referente al requisito señalado en el numeral 1) del art.2 del D.L. 321, la regla general establece como tiempo mínimo de postulación a la libertad condicional (en adelante TM), haber cumplido la mitad de la condena, con las excepciones señaladas en los art. 3º, 3º bis y 3º ter:

- Art. 3º: Las personas condenadas a presidio perpetuo calificado sólo podrán postular a la libertad condicional una vez que hubieren cumplido cuarenta años de privación de libertad efectiva. Si la solicitud del beneficio fuere rechazada, no podrá deducirse nuevamente sino después de transcurridos dos años desde su última presentación. Por otra parte, las personas condenadas a presidio perpetuo sólo podrán postular al beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos veinte años de privación de libertad.

Las personas condenadas por los delitos de parricidio, femicidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación, infanticidio, y por los delitos contemplados en el número 2º del artículo 365 bis y en los artículos 366 bis, 366 quinquies, 367, 411 quáter, 436 y 440, todos del Código Penal, homicidio de miembros de las policías, de integrantes del Cuerpo de Bomberos de Chile y de Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones, y el de elaboración o tráfico de estupefacientes, sólo podrán postular a este beneficio cuando hubieren cumplido dos tercios de la pena.

Las personas condenadas a dos o más penas, cuya suma alcance o supere los cuarenta años de privación de libertad, sólo podrán postular al beneficio de libertad condicional una vez que hayan cumplido veinte años de reclusión.

Las personas condenadas por los incisos tercero y cuarto del artículo 196 de la ley N° 18.290, de tránsito, podrán postular a este beneficio sólo una vez que hayan cumplido dos tercios de la condena.

Las personas condenadas a presidio perpetuo por delitos contemplados en la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad y, además condenadas por delitos sancionados en otros cuerpos legales, podrán postular al beneficio de la libertad condicional una vez que hayan cumplido diez años de pena, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 1 de enero de 1989 y el 1 de enero de 1998 y suscriban, en forma previa, una declaración que contenga una renuncia inequívoca al uso de la violencia.

- Art. 3º bis: Las personas condenadas por delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro, secuestro calificado, sustracción de menores, detención ilegal, inhumación o exhumación ilegal, tormentos o rigor innecesario, y asociación ilícita, que la sentencia, en conformidad al derecho internacional, hubiere considerado como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena; o por alguno de los delitos tipificados en la ley N° 20.357; podrán postular a este beneficio cuando, además de los requisitos del artículo 2º, hubieren cumplido dos tercios de la pena o, en caso de presidio perpetuo, los años de privación de libertad efectiva establecidos en los incisos primero y segundo del artículo 3º, según corresponda.

Además de lo anterior, al momento de postular, la persona condenada deberá acreditar la circunstancia de haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento del delito o confesado su participación en el mismo; o aportado antecedentes serios y efectivos de los que tenga conocimiento en otras causas criminales de similar naturaleza. Lo anterior se acreditará con la sentencia, en el caso que se hubiere considerado alguna de las atenuantes de los números 8º y 9º del artículo 11 del Código Penal, o con un certificado que así lo reconozca expedido por el tribunal competente.

- Art. 3º ter: En caso de los delitos señalados en los incisos tercero y quinto del artículo 3º, se podrá conceder la libertad condicional una vez cumplida la mitad de la pena privativa de libertad de forma efectiva a las mujeres condenadas en estado de embarazo o maternidad de hijo menor de 3 años.

Por otro lado, la actual norma fija el TM a los 20 años de reclusión, cuando las condenas superen los 40 años.

Las personas que estuvieren condenadas a presidio perpetuo y además a otra u otras penas privativas de libertad, sólo podrán postular a la libertad condicional una vez que hubieren cumplido con la totalidad de los tiempos establecidos por presidio perpetuo y los tiempos establecidos por la otra u otras penas privativas de libertad que correspondan.

Para la acreditación del cumplimiento de los requisitos de tiempos mínimos, se establece que éste se realizará mediante informe del Tribunal de Conducta y demás antecedentes requeridos.

Respecto al art. 3° bis, relativo a las personas cuyas sentencias, en conformidad al derecho internacional, hubieran sido condenadas por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, que deberán, al momento de postular, acreditar haber colaborado o confesado su participación en el delito, aportando antecedentes serios y efectivos de los que tenga conocimiento en otras causas criminales de similar naturaleza, deberán hacerlo personalmente o a través de su representante legal, ante el secretario del Tribunal de Conducta o quien ejerza esta labor en el establecimiento penal al momento de iniciarse el proceso de postulación. Lo anterior, podría acreditarse a través de la sentencia condenatoria en caso de que ésta registre alguna de las atenuantes establecidas en los numerales 8 y 9 del art. 11 del Código Penal o a través de un certificado que así lo reconozca y que sea emanado por los tribunales competentes en la materia.

Evaluación de la conducta

En lo referente al requisito de conducta, la ley hace referencia al concepto de "conducta intachable", lo que, en conformidad con el reglamento de la ley, da cuenta de que quien postula a la libertad condicional debe haber sido evaluado/a con una nota "muy buena", durante los cuatro bimestres anteriores a su postulación en caso de condenas superiores a 541 días, y durante tres bimestres en personas con condenas que no excedan los 541 días.

Informe psicosocial de postulación

La norma legal incorpora como requisito adjuntar dentro de los antecedentes a remitir a la Comisión de Libertad Condicional, un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de cada establecimiento penal de Gendarmería de Chile o de los destinados al Servicio de Reinserción Social, en el caso de la administración concesionada. El informe psicosocial orientará sobre los factores de riesgo de reincidencia delictual y permitirá conocer sus posibilidades de reinserción adecuadamente en la sociedad.

En su reglamento se establecen los mínimos que éste informe debe contener:

- a) Una descripción de la metodología empleada para elaborar el informe que haga referencia a las técnicas utilizadas para recabar la información, especialmente, las entrevistas realizadas, los documentos consultados, los instrumentos aplicados y sus resultados.
- b) Una descripción de la persona postulante, que haga referencia a sus antecedentes individuales, laborales y familiares, al delito cometido, a su riesgo de reincidencia, necesidades de intervención, recursos y fortalezas.
- c) Una descripción de las actividades de reinserción social realizadas por la persona postulante durante el cumplimiento de su condena, que incluya los objetivos perseguidos y los logros alcanzados por su participación en estas actividades.
- d) Un análisis global del proceso de reinserción social que explique la manera en que se vinculan las necesidades de intervención, los recursos y fortalezas de la persona postulante. Este análisis deberá incluir una fundamentación técnica de las áreas visualizadas como facilitadoras del proceso de reinserción social y de las áreas que requieren un mayor desarrollo para evitar reincidencias.
- e) Según la evaluación de las necesidades de intervención, sugerir actividades y programas que podrían apoyar el proceso de reinserción social de la persona postulante una vez que se encuentre en el medio libre.

- f) Incorporar las expectativas que la persona postulante tiene respecto a su proceso de reinserción social en el medio libre.

Se establece también que las afirmaciones contenidas en este informe deben apoyarse en datos contrastables, evitando incluir juicios de valor u opiniones personales sin fundamento técnico.

2. Requisitos legales del proceso de supervisión de la libertad condicional

Los requisitos legales del proceso de supervisión de la libertad condicional se encuentran contenidos en el artículo 6° del Decreto Ley N° 321, en que se indica que las personas beneficiadas con la libertad condicional quedarán sujetas a la supervisión de un delegado de libertad condicional, el que deberá, dentro de los siguientes 45 días, elaborar un plan de intervención individual que deberá contemplar reuniones periódicas, las que en el primer año de supervisión se fijan como a lo menos mensuales. La persona condenada deberá firmar el plan como compromiso de dar cumplimiento a las condiciones establecidas.

El incumplimiento del mismo, sin justificación suficiente, será motivo para que Gendarmería de Chile, a través de los Consejos Técnicos, informe de ello a la respectiva Comisión de Libertad Condicional, para que ésta se pronuncie sobre la continuidad o revocación de la libertad condicional.

Así también, las personas que se encuentren con libertad condicional y que hubieren cumplido la mitad del periodo de ésta, mientras hayan cumplido las condiciones de su plan de intervención individual, podrán ser beneficiadas con su libertad completa, excepto aquellos que gozaren de la libertad condicional conforme a lo dispuesto en el artículo 3° bis.

Es importante destacar, que el reglamento de la ley, establece que el delegado deberá considerar los factores de riesgo de reincidencia y los factores protectores, así como todas las circunstancias que pueden incidir en su proceso de reinserción social durante el proceso de evaluación orientado a elaborar el plan de intervención individual. Adicionalmente, el art. 22 del reglamento, indica claramente que durante el proceso de evaluación habrá que considerar los antecedentes del proceso de reinserción durante el cumplimiento de la condena privativa de libertad, los que deberán consignarse en el informe de postulación psicosocial.

Finalmente, el mismo artículo establece que el plan de intervención individual deberá priorizar la vinculación con la red social y comunitaria, sin perjuicio de las necesidades de intervención especializada u otras que presente la persona, las que podrán ser atendidas por medio de la derivación a programas de intervención.

Respecto a la operatividad del sistema, la reglamentación indica que esta se realizará por Gendarmería a través de los Centros de Apoyo para la Integración Social (CAIS) y, si estos no tuvieran cobertura, excepcionalmente en otras unidades dependientes de Gendarmería de Chile.

Capítulo II Marco conceptual

Las acciones de reinserción con personas en libertad condicional se vinculan al ámbito criminológico, toda vez que se desarrollan en la fase de cumplimiento de condena, en un contexto obligado, en donde la intervención debe apuntar no sólo a apoyar la integración social de la persona, sino que a disminuir sus probabilidades de reincidencia.

En ese contexto, es importante que los y las profesionales cuenten con un marco comprensivo que fundamente las acciones a la base de los diferentes procesos vinculados con la libertad condicional. De esta manera, a continuación, se realiza un breve desarrollo de los principales enfoques teóricos y conceptuales que insuman los lineamientos presentados en estas normas técnicas, con sus aportes y limitaciones.

Modelo de Riesgo, Necesidad y Responsividad

El Modelo de Riesgo, Necesidad y Responsividad (RNR) ha sido formalizado en el año 1990 por Andrews, Bonta y Hoge y es actualmente el principal modelo para la evaluación e intervención de personas infractoras de ley. Se ha elaborado tomando como base la teoría general de la personalidad y la teoría cognitiva del aprendizaje social de la conducta delictiva, a partir del cual desarrollan una serie de principios para el diseño e implementación de intervenciones efectivas orientadas a disminuir el riesgo de reincidencia (Andrews y Bonta, 2010).

Si bien, el modelo ha desarrollado una serie de principios organizados en diversos niveles (principios generales, principios centrales de RNR y principios institucionales), solo se describirán aquellos principios que tienen mayor vinculación con la implementación de la libertad condicional.

Tabla 1.
Principales principios del Modelo RNR

Riesgo	Parear la intensidad de la intervención (supervisión) al nivel de riesgo de reincidencia y evitar interacciones entre personas de alto riesgo con personas de bajo riesgo de reincidencia.
Necesidad	Privilegiar el abordaje de las necesidades criminógenas (factores de riesgo dinámicos que presentan una alta y moderada asociación con la conducta delictiva) y movilizarlas para que se conviertan en fortalezas o factores protectores.
Responsividad general	Para maximizar la efectividad de los procesos de intervención hay que privilegiar el uso de estrategias cognitivo-conductuales y del aprendizaje social para influir en el comportamiento: modelado prosocial, uso apropiado del refuerzo y desaprobación y resolución de problemas, entre otras.
Responsividad específica	La efectividad de los procesos de intervención también se beneficia cuando se ajustan a las características particulares de las personas: recursos, estilo de aprendizaje, motivación, personalidad, madurez, cultura, etc.
Intervención multimodal	Es importante abordar la mayor cantidad de necesidades criminógenas cuando se trabaja con población de alto riesgo de reincidencia.
Fortalezas	Considerar los factores protectores o puntos fuertes de las personas es importante para mejorar la evaluación de los casos y para aumentar la responsividad específica a la intervención/supervisión.
Evaluaciones estructuradas	Las evaluaciones que utilizan el juicio clínico estructurado para la toma de decisiones, demuestran mayores niveles de precisión que las evaluaciones que privilegian el juicio clínico no estructurado.
Discrecionalidad profesional	En algunos casos será necesario utilizar otras técnicas o seguir otros lineamientos diferentes a los expuestos, cuando el profesional a partir de su experiencia y juicio profesional considere que beneficiarán el abordaje del caso. Este principio establece también que el uso de la discrecionalidad profesional debe estar fundamentada en criterios técnicos para modificar el curso de acción sugerido a partir de los resultados a las evaluaciones estructuradas.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Andrews y Bonta (2010).

El Modelo RNR es un modelo centrado principalmente en la evaluación de los riesgos y necesidades, y en la efectividad en la entrega de servicios e intervenciones orientadas a disminuir reincidencia. Sus lineamientos forman parte de las prácticas efectivas en materia de reinserción y rehabilitación de personas infractoras de ley, pero es importante tener claridad que el RNR no ofrece una explicación teórica para entender cómo que se generan los cambios a nivel individual (Serin y Lloyd, 2017). Aun cuando el principio de responsividad específica destaca la importancia del ajuste de la intervención a las características individuales, incorporando para eso las motivaciones y recursos, durante los últimos años se

ha reforzado la importancia de considerar con mayor fuerza los aspectos que pueden facilitar la capacidad de respuesta. Para ello, junto con identificar el riesgo de reincidencia, las necesidades criminógenas y no criminógenas y las características de responsividad, es fundamental incorporar la perspectiva que las propias personas tienen respecto al cumplimiento de la condena, respecto a su futuro y respecto a sus metas personales. En otras palabras, fortalecer la capacidad de agencia para que se vean como personas capaces de cambiar sus vidas y alcanzar los objetivos propuestos (McNeill y Weaver, 2010).

En virtud de lo anterior, el Modelo RNR constituye el marco conceptual a partir del cual se estructuran y desarrollan las principales acciones vinculadas con la libertad condicional (evaluación de caso, supervisión y planificación de la intervención, diferenciación de la intervención o supervisión según riesgo de reincidencia, etc.). Sin embargo, también se incorporan lineamientos provenientes de otros marcos teóricos, cuyo aporte a los procesos de intervención ha sido destacado durante el último tiempo. Algunos ejemplos son los siguientes aspectos desarrollados por el enfoque del desistimiento delictivo.

El desistimiento delictivo estudia el proceso por el cual una persona cesa y/o se abstiene por un periodo prolongado de tiempo de delinquir. Un elemento central de este proceso es la creencia de que las personas pueden tener éxito en las metas de vida que se proponen (Maruna, 2001; McNeill y Weaver, 2010). Este es un aspecto poco abordado desde el modelo RNR y su inclusión ha demostrado que puede apoyar los procesos de reinserción al poner en el centro del proceso a la persona, contrarrestando el excesivo foco en la derivación a intervenciones o programas que muchas veces son considerados como impuestos por la persona (Serin y Lloyd, 2017). Por lo demás, al focalizarse en los elementos promotores del cambio (fortalezas y recursos) y no en los déficits (factores de riesgo de reincidencia) es posible ayudar a que la persona cumpla sus propósitos y alcance objetivos de vida y de bienestar psicosocial, que van más allá de la disminución del riesgo de reincidencia.

Hoy en día hay consenso sobre la importancia de entender los mecanismos que subyacen a la conducta delictiva (y no solo identificar los factores asociados a ella) y por sobre todo las motivaciones asociadas con la persistencia y el abandono de un estilo de vida delictivo, para orientar las intervenciones. De este modo, junto con comprender el significado de los factores de riesgo y las necesidades criminógenas y no criminógenas, es importante identificar y contextualizar el rol que ejercen los factores protectores en este proceso, identificando de qué manera pueden mitigar el impacto de los factores de riesgo y contribuir a la obtención de resultados positivos (Andrews y Bonta, 2010).

En esta línea, los postulados del paradigma del desistimiento han identificado que el cambio hacia lo prosocial puede facilitarse cuando se incorporan prácticas que otorgan una mayor individualización a los procesos estructurados de reinserción (evaluación, diseño de un plan y derivación a programas), implementados en los sistemas penitenciarios articulados en torno a los principios del RNR. Algunas de estas prácticas incluyen: extender el foco de los procesos de reinserción desde una orientación centrada únicamente en levantar información a nivel personal con información obtenida del ámbito familiar y social, que contextualice los recursos de la persona en diversos ámbitos de su vida. Por otra parte, y aunque los factores de riesgo y necesidades criminógenas no pueden ignorarse, también es importante que no constituyan el único foco de trabajo. La investigación reciente apoya la incorporación de los recursos, fortalezas y oportunidades como parte de un proceso de intervención integral que prevenga el desarrollo de resultados negativos e impulse procesos de cambio que se mantienen en el tiempo (Baker, 2017; McNeill y Weaver, 2010).

La evaluación de caso en contexto penitenciario

La evaluación de caso puede definirse como un proceso de resolución de problemas en el que se reúne información confiable y relevante acerca de una persona para tomar una decisión informada (Suhr, 2015). Es importante destacar que la evaluación de un caso no es equivalente a la administración de instrumentos, toda vez que una evaluación es un proceso más amplio, que requiere de un(a) profesional que haga uso de su juicio profesional para la integración de diferentes métodos y fuentes de recolección de información (CESC, 2016).

En el caso de la libertad condicional la evaluación de caso cumple con una doble finalidad. Por un lado, se orienta a levantar información para elaborar un juicio respecto a los avances en el proceso de reinserción social de una persona que cumple una pena privativa de libertad, integrando múltiples fuentes para fundamentar la información que deberá enviarse a la Comisión de Libertad Condicional, y así orientar la concesión o rechazo del beneficio. Por otro lado, se orienta a reunir información para definir las necesidades de intervención y el abordaje más apropiado de éstas en función de las características individuales, el tiempo de condena y riesgo de reincidencia de la persona que ha obtenido el beneficio de la libertad condicional. En el primer caso, el resultado de la evaluación quedará plasmado en un Informe de Postulación, mientras que, en el segundo, en un Plan de Intervención Individual que formará parte de la supervisión de las personas con este beneficio.

En cualquiera de estas situaciones, la evaluación de caso debe entenderse como un proceso dinámico y multidimensional de recopilación de información que conduce a una comprensión en profundidad del comportamiento delictivo (Baker, Kelly y Wilkinson, 2011). Siguiendo con lo establecido por el Modelo RNR, uno de los aspectos centrales del proceso de evaluación será la evaluación del riesgo de reincidencia, las necesidades de intervención (criminógenas y no criminógenas) y la capacidad de respuesta. Adicionalmente, es importante identificar los factores protectores, explicando de qué manera pueden mitigar el impacto de los factores de riesgo (Andrews y Bonta, 2010), y ayudar a conseguir resultados positivos que se mantengan en el tiempo, incorporando los recursos y expectativas individuales, para complementar la ejecución de plan de intervención desde la perspectiva y motivaciones de la persona en libertad condicional.

En las últimas décadas, las prácticas de evaluación de caso han evolucionado desde el uso del juicio clínico no estructurado hacia a la incorporación de herramientas mixtas que se apoyan en el juicio profesional estructurado con métodos actuariales. En el caso de la libertad condicional, los procesos de evaluación podrán hacer uso del juicio profesional estructurado, pero mayoritariamente se articulan en torno al uso de herramientas mixtas para evaluar el riesgo de reincidencia. Las herramientas mixtas se caracterizan por adherir a una perspectiva integral y comprensiva de la persona, para lo cual hacen uso de métodos actuariales y de juicio profesional estructurado para fundamentar la toma de decisiones a lo largo del proceso de evaluación.

Tabla 2.

Evolución de la evaluación de riesgo de reincidencia en contexto penitenciario

Primera generación	Uso del juicio clínico no estructurado sustentado en la formación y experiencia profesional de quien efectúa la evaluación.
Segunda generación	Uso de herramientas actuariales para evaluar el riesgo de reincidencia, focalizadas en los factores de riesgo estáticos (antecedentes de carácter histórico) para prescindir del juicio clínico.
Tercera generación	Uso de herramientas actuariales que hacen uso del juicio profesional estructurado e incorporan factores dinámicos, y son, por tanto, sensibles a los cambios en las necesidades de intervención (criminógenas).
Cuarta generación	Uso de herramientas con una perspectiva integral y comprensiva de la evaluación, ya que integran los factores de riesgo estáticos, las necesidades criminógenas y una amplia gama de otros factores que pueden constituirse en áreas de intervención y/o que pueden influir en la capacidad de respuesta a la intervención. Dada la naturaleza de las áreas de evaluación, permite monitorear la intervención y apoyar la gestión de caso.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Bonta y Andrews (2006).

En resumen, la principal herramienta al servicio de una evaluación es la adecuada utilización del juicio profesional estructurado, junto con la experticia del (la) evaluador(a) para integrar la diversidad de información levantada a través de entrevistas, revisión de expedientes o la observación directa. De este modo, el uso de instrumentos para evaluar el riesgo de reincidencia y las necesidades de intervención deben considerarse como un complemento necesario que no reemplaza el uso del juicio profesional, el que debe estar presente en la

valoración, articulación y ponderación de todos los antecedentes recolectados para realizar la evaluación de un caso.

Cómo comunicar los resultados de una evaluación de riesgo de reincidencia

La comunicación de las evaluaciones -y en particular de las evaluaciones de riesgo de reincidencia- ha sido un tema controversial desde los comienzos de su uso en población penal. Pese a que no hay consenso respecto a la mejor manera de presentar la información para orientar la toma de decisiones, hay acuerdo en que una forma inapropiada de comunicar los resultados puede generar que una evaluación de riesgo de reincidencia que fue adecuadamente realizada no tenga la utilidad esperada, o peor aún, que presente una imagen errada de la persona evaluada (Heilbrun, Dvoskin, Hart y McNeil, 1999).

En general, hay una preferencia por utilizar las categorías de riesgo y no los valores numéricos de un instrumento al momento de comunicar los resultados debido a que no hay argumentos que validen la relación entre el riesgo de reincidencia y un determinado puntaje; y porque las estimaciones numéricas suelen mal interpretarse, tanto en relación con las posibilidades de intervención como respecto al riesgo de reincidencia que se atribuye a la persona evaluada a partir de esos resultados (Heilbrun et al., 1999; Viljoen, McLachlan y Vincent, 2010).

Por este motivo, es importante que además de indicar la categoría o nivel de riesgo de reincidencia de la persona evaluada, se describan los factores de riesgo y/o de protección que fundamentan la valoración otorgada, la relación entre estos factores, la manera en que contribuyen a explicar el comportamiento delictivo y la forma en que pueden abordarse o gestionarse para disminuir este riesgo y/o evitar que aumente. Finalmente, tampoco debe asumirse a priori que quienes leerán el informe o la evaluación orientada a elaborar un plan de intervención, entenderán lo mismo cuando se concluya que la persona ha sido evaluada con un nivel riesgo de reincidencia bajo, medio o alto (Hilton, Carter, Harris y Sharpe, 2008). Por todo lo anterior, es fundamental que los resultados de la evaluación se presenten de la manera más clara posible, teniendo en consideración las limitaciones que se han identificado respecto a la comunicación de los resultados de las evaluaciones de riesgo utilizando categorías predefinidas. Pese a ser el formato privilegiado de acuerdo a lo reportado por los estudios, esta manera de comunicar la información ha sido criticada por los siguientes motivos (Krauss, Cook y Klapatch, 2018):

- La falta de consistencia en la definición y número de categorías entre diferentes instrumentos. Por ejemplo, el IGI establece cinco categorías, mientras que la SARA ofrece solo tres alternativas de clasificación, lo que dificulta ponderar la información y comparar los resultados.
- La falta de consistencia y acuerdo entre profesionales sobre lo que significa y cómo interpretar y comunicar el riesgo de reincidencia en contextos penales.
- La posibilidad de que los principales responsables de la toma de decisiones sobreestimen el nivel de riesgo de reincidencia al no proporcionar información sobre la tasa basal de reincidencia que se observa en ciertos delitos (la que muchas veces es menor a la creencia de los tomadores de decisión).

Finalmente, además de tener en consideración estas observaciones al momento de plasmar los resultados de las evaluaciones de riesgo de reincidencia y formular juicios al respecto, es importante recordar que es imposible predecir el riesgo de reincidencia de una persona con total certeza, y que los mejores modelos estadísticos logran predecir la reincidencia entre un 66% y un 74% de las veces (Fazel, Singh, Doll y Grann, 2012). Por lo tanto, cualquier afirmación que se realice sobre el riesgo de reincidencia de una persona debe presentarse como una estimación y no una certeza de su comportamiento futuro; teniendo en cuenta que su principal utilidad radica en el uso de esta información para orientar el manejo de caso y el abordaje de las necesidades de intervención, a través de lo cual se espera disminuir el nivel de riesgo de reincidencia evaluado.

Para concluir, y en atención a las problemáticas recién mencionadas, a continuación, se presentan las recomendaciones realizadas por Serin y Lowenkamp (2015) para efectuar

evaluaciones de riesgo de reincidencia, en atención a que su utilización forma parte central de la evaluación de caso en el contexto de la libertad condicional:

1. No asumir que puntuar un instrumento o una escala de evaluación de riesgo es equivalente a tomar una decisión. La toma de decisiones requiere hacer un análisis global del caso más allá de estimar el riesgo de reincidencia.
2. Utilizar escalas de riesgo que sean específicas al tipo de comportamiento que está siendo evaluado.
3. Tener claridad que las escalas que evalúan factores estáticos dan cuenta de un determinado nivel riesgo que presenta la persona, mientras que las escalas con factores de riesgo dinámicos dan cuenta de los motivos (por qué) y circunstancias (cuándo) una persona se encuentra en riesgo de reincidir.
4. Tener cuidado al modificar el nivel de riesgo de los instrumentos haciendo uso del juicio clínico no estructurado. Las escalas de riesgo validadas entregan estimaciones que por lo general son más precisas que el juicio clínico.
5. Evitar el uso de múltiples escalas de evaluación de riesgo pensando que aquello aumentará la precisión de las estimaciones. Más no necesariamente es mejor.
6. Cautelar una adecuada capacitación en la aplicación de los instrumentos de evaluación de riesgo de reincidencia que se vayan a implementar. Un entrenamiento adecuado es más importante que la edad, el trabajo o la experiencia del evaluador(a).
7. Tratar de abordar la mayor cantidad de necesidades criminógenas, ya que la disminución en la reincidencia se logra cuando se incorporan varias necesidades a la intervención.
8. Ajustar el tipo de intervención/supervisión al nivel de riesgo y a las necesidades de la persona.
9. No focalizar la intervención en los casos de bajo riesgo de reincidencia o incorporarlos en intervenciones prolongadas con personas de alto riesgo.
10. Entregar la intervención en una manera que esté acorde con la motivación y el estilo de funcionamiento de la persona, con una adecuada dosificación de la intervención en función del nivel de riesgo y las necesidades de intervención.

El proceso de gestión de caso en la supervisión de la libertad condicional

La literatura especializada sugiere que la intervención en contexto penitenciario debe ser estructurada, entendiéndose por tal a una intervención que es planificada para ser implementada a lo largo del cumplimiento de condena, en que las necesidades se ordenan en jerarquía de importancia y en algunos casos pudiendo ser abordadas en forma simultánea (CESC, 2016).

Un aspecto fundamental para aquello es la implementación de un proceso de gestión o manejo de caso; concepto que surge en la esfera del trabajo social y la salud mental, para agrupar aquellas actividades cuyo objetivo es garantizar la entrega coordinada y eficiente de los servicios requeridos. Day, Hardcastle y Birgden (2012) lo definen como "un proceso en colaboración de evaluación, planificación, facilitación y abogacía de opciones y servicios para responder a las necesidades integrales de la persona, por medio de la comunicación y los recursos disponibles para promover resultados costo-efectivos de calidad" (p. 485, citado en CESC, 2016).

En la libertad condicional, la gestión de caso será entendida como un proceso colaborativo que permitirá articular todas las acciones necesarias para cumplir con el plan de intervención individual, vinculando a las personas con los programas de intervención y servicios de la red intersectorial para cumplir con la supervisión del beneficio.

El plan de intervención individual en contexto penal es fundamental para establecer una adecuada planificación de las actividades, lo que es aún más importante en el caso de las personas con mayor riesgo de reincidencia, ya que la evidencia sostiene que esta población es la que más se beneficiaría de actividades estructuradas orientadas a facilitar su integración social (Andrews y Bonta, 2010; CESC, 2016). Por otra parte, un plan de intervención que no se ajuste a las necesidades de la persona, constituye un factor de riesgo en sí mismo, motivo por el cual se ha establecido que el plan de intervención es el eje articulador del proceso de supervisión (y de la gestión de caso), al indicar la manera en que el (la) profesional asumirá las necesidades que deben ser resueltas (Willis y Grace, 2009; Taxman et al., 2004).

Uno de los aspectos claves del proceso de gestión de caso es la coordinación y participación de todos los actores, quienes se relacionarán en distintos niveles con la población atendida. Estos actores tienen como objetivo común el facilitar la atención oportuna de los requerimientos de la población, al otorgar una respuesta integral e individualizada a las necesidades por medio de intervenciones de corto y mediano plazo. Así, existirá continuidad de servicios y atenciones, los que se inician cuando la persona en libertad condicional se presenta por primera vez en el establecimiento, y se prolongan hasta el término de su periodo de condena. Para cautelar la efectividad de las coordinaciones efectuadas y servicios entregados, es fundamental establecer canales de información ágiles y mecanismos de retroalimentación permanentes entre todos los actores que participan de la gestión de caso.

En la gestión de caso la figura del delegado(a) de libertad condicional (DLC), cumple un rol clave pues es responsable de la planificación y ejecución de las actividades que formarán parte de la supervisión y del plan de intervención. El(la) DLC actuará como un agente de cambio para la persona en libertad condicional, acompañándola a lo largo de su supervisión en la comunidad, pero también se relacionará con ella como un referente técnico y administrativo, al responder a sus requerimientos y potenciar un adecuado cumplimiento de su condena.

Considerando que, además de supervisar el cumplimiento de las condiciones impuestas, al DLC le corresponde implementar acciones que permitan manejar las resistencias, promover conductas prosociales y facilitar el proceso de cambio, es importante cautelar lo siguiente:

- Establecer una comunicación abierta, clara, entusiasta y respetuosa con las personas condenadas ha demostrado un valor positivo en las relaciones de trabajo. Igualmente, se ha evaluado favorablemente la capacidad del profesional para mostrar alternativas "anti-delictuales" frente a las maneras de pensar, sentir y actuar que favorecen el comportamiento antisocial (Andrews y Bonta, 2010).
- No confundir la aceptación y empatía hacia la persona en libertad condicional con la aceptación de percepciones erróneas sobre sí mismo, los otros y el delito.
- Es importante recordar que el(la) DLC tiene un doble rol en las intervenciones en contexto obligado, ya que por un lado debe ejercer las funciones de control normativo, y por otro, favorecer procesos de cambio y/o establecer una relación de ayuda. El equilibrio en estas dos facetas es fundamental para el logro de los objetivos de la supervisión (Trotter, 2013).
- Hacer uso de las estrategias de Entrevista Motivacional (Miller y Rollnick, 2013), para desarrollar la motivación y responsabilización de la persona en libertad condicional.

Mantener expectativas positivas respecto al desenvolvimiento de la persona durante la supervisión de la condena y, en particular, en las actividades de intervención también ha demostrado ser importante. La capacidad de concentrarse en eventos positivos, y no sólo en los problemas, permite enfrentar de mejor manera los momentos difíciles. Ayudar a los libertos/as a desarrollar esta capacidad, aumenta la probabilidad de que una vez finalizada la supervisión de la libertad condicional, los esfuerzos realizados por mantener un estilo de vida prosocial y alejado de lo delictual se mantengan. Esto puede fortalecerse aún más cuando se fomenta la identificación de los objetivos personales, integrándolos al proceso de intervención (Ward y Maruna 2007).

Por otra parte, se ha documentado que la falta de adherencia es una característica recurrente en esta población, hecho principalmente asociado a intervenciones muchas veces no adecuadas a sus características y necesidades, pero también, por no asumir los cambios propuestos con una motivación genuina. Esto puede entenderse por resistencias individuales, generalmente asociadas a dificultades para visualizar los beneficios que la intervención generaría en su bienestar general, como al establecimiento de una débil alianza de trabajo. Considerando que el cambio es un proceso no lineal, que se ve afectado por resistencias y recaídas en viejos patrones de conducta, es fundamental que el(la) DLC fortalezca las habilidades adquiridas mediante refuerzos. El desarrollo de competencias tiene como fin último fomentar el capital social y la generación de oportunidades para relacionarse eficientemente con su entorno (Ward y Maruna, 2007).

Desde esta perspectiva, un proceso de intervención eficaz se establecerá cuando el liberto/a esté dispuesto a trabajar en alcanzar metas que tengan algún significado para él o ella. Asimismo, la adherencia no se logra por el simple acceso al beneficio, sino que requerirá de las destrezas del profesional para movilizar la motivación de la persona antes, durante y después de cada intervención.

Algunos aspectos a considerar para fomentar la adherencia durante la gestión de caso son las siguientes:

- Emplear estrategias motivacionales durante todo el proceso de cumplimiento, en el entendido que todo contacto entre profesional y liberto/a es una intervención en sí misma, toda vez que el (la) profesional debe procurar establecer una relación basada en la co-construcción de las necesidades y posibles soluciones (Miller y Rollnick, 2013; Andrews y Bonta, 2010).
- El contexto obligado en el cual se desarrolla la intervención, hace necesario movilizar a la persona en libertad condicional para que se desempeñe como protagonista de su proceso. Esto se logrará en la medida que ésta signifique las actividades como provechosas para su desenvolvimiento social y personal. El establecimiento de consensos y procesos de retroalimentación donde revisar los acuerdos son espacios que ayudan a legitimar la intervención.
- Reforzar periódicamente los logros alcanzados durante el proceso de intervención debe ser una tarea propia de los y las profesionales. Muchas veces, los libertos/as no valoran sus avances y tienden a focalizarse en sus dificultades. En este contexto, es importante generar instancias para que las personas puedan visualizar sus progresos, favorecer la toma de consciencia y comprensión de las ganancias alcanzadas como acciones centrales de la gestión de caso.

Capítulo III

Elaboración del Informe de Postulación Psicosocial

1. Procedimientos administrativos para la elaboración del informe de postulación

El presente apartado describe las acciones administrativas asociadas a la elaboración de los informes de postulación psicosocial y la organización del recurso profesional para su elaboración.

La calendarización del proceso de libertad condicional es realizada por la institución en cada semestre, e inicia cuando el secretario del Tribunal de Conducta de cada establecimiento penitenciario extrae del Sistema Interno la nómina preliminar de las personas postulantes, la que es entregada al Área Técnica y a la Oficina de Registro, Movimiento y Control de la Población Penal (ORMCPP) para que se realicen los respectivos informes y acreditación del cumplimiento de requisitos por las instancias que correspondan. En los establecimientos de Administración Concesionada, el equipo técnico de Gendarmería de Chile debe velar por que las nóminas preliminares se dispongan a la brevedad, a objeto de facilitar la programación de los equipos de las empresas a cargo del Servicio de Reinserción Social.

Una vez recepcionada la nómina preliminar por parte de la Jefatura Técnica Local, ésta deberá distribuir los casos de manera equitativa entre los profesionales del equipo técnico, teniendo en consideración los siguientes aspectos:

- a) La carga laboral del profesional a quien asignará el caso.
- b) La existencia de evaluaciones previas; si se trata de personas postulantes que no posean evaluaciones anteriores, para éste u otro beneficio, o informes profesionales, se entenderá que la carga laboral para el profesional a quien se le asigne el caso será mayor.
- c) Si se trata de personas postulantes que requieran evaluaciones específicas y/o complementarias adicionales, como evaluaciones de riesgo de reincidencia en violencia sexual (a través de instrumentos como el RSVP) o evaluación de psicopatía (a través de instrumentos como el PCL-R).

En el caso de la postulación de mujeres, y para efectos de determinar si, encontrándose condenada por los delitos señalados en los incisos tercero y quinto del artículo 3° del Decreto Ley N° 321, se le podrá conceder la libertad condicional una vez cumplida la mitad de la pena privativa de libertad, corresponderá que el profesional al que se le asigne el caso verifique si concurre la situación señalada en el art. N° 3° ter, esto es, condenadas en estado de embarazo o maternidad de hijo menor de 3 años. Esta verificación deberá realizarla en un plazo que no exceda los 5 días desde la fecha en que le fuera designado, debiendo solicitar a la postulante el certificado de nacimiento de hijo menor de 3 años, solo en aquellos casos en que desde el establecimiento penitenciario no se pueda acceder a tal certificado en línea. En el caso de las mujeres embarazadas, se informará al área de salud del establecimiento, para que lo confirme y emita el correspondiente certificado de embarazo, dentro del plazo establecido.

Una vez acreditada la situación de embarazo y/o maternidad por parte de los profesionales designados, la jefatura técnica local informará la nómina resultante de mujeres condenadas que se vean favorecidas con este artículo a la Oficina de Registro, Movimiento y Control de la Población Penal y al Secretario del Tribunal de Conducta, de tal modo de que se acredite el haber cumplido un tiempo determinado de la condena, según lo establecido en el art. 10 del reglamento de la ley.

La certificación correspondiente del estado de embarazo y/o de maternidad, quedará en poder del profesional evaluador para ser adjuntado al informe de postulación psicosocial una vez finalizado.

Si bien, el cronograma para el desarrollo de los informes y del proceso en general se remite a través de Oficio Circular para cada periodo desde el nivel central, las jefaturas técnicas locales o los coordinadores de reinserción social en los establecimientos concesionados, deberán velar para que la totalidad de los informes se encuentren elaborados e ingresados a los sistemas dispuestos para tal fin, con la debida antelación a la fecha de remisión de los antecedentes a las comisiones de libertad condicional.

2. Procedimientos técnicos para la elaboración del informe de postulación

El presente apartado hace referencia a los aspectos técnicos que componen la elaboración de los informes de postulación. Para ello, en primer lugar, se define en qué consiste un informe psicosocial, la información que contiene y el equipo técnico que participa en su elaboración. Luego, se describe el proceso de evaluación propiamente tal y la información que debe recabarse para su elaboración. Finalmente, se desarrollan orientaciones para cumplir con los requisitos técnicos que debe contener el informe de postulación de acuerdo con lo establecido en el art. 14 del reglamento de la ley.

2.1. Aspectos generales del informe

El informe de postulación psicosocial es un requisito legal, que constituye un instrumento de soporte al proceso de postulación a la libertad condicional y que busca facilitar la toma de decisiones de la Comisión de Libertad Condicional, al orientar respecto a los factores de riesgo de reincidencia de la persona postulante con el fin de conocer sus posibilidades para reinserirse adecuadamente en la sociedad.

El contenido "psicosocial" del informe está dado porque el tipo de información que contiene, por una parte, se vincula con el desenvolvimiento general de la persona evaluada en el ámbito personal o individual (que por lo general, incluye las actitudes hacia el cumplimiento de la norma y un estilo de vida prosocial, presencia de consumo de drogas o alcohol, la presencia de un patrón de comportamiento en que predomina la irreflexibilidad e impulsividad en la toma de decisiones, etc.); familiar (da cuenta de la calidad de las relaciones, la existencia de conflictos entre sus integrantes, la presencia de familiares vinculados al delito o que pueden apoyar el proceso de reinserción); de sus relaciones sociales (identifica si las personas significativas en su entorno están vinculados al delito o no, la vinculación con instituciones comunitarias o sociales, etc.); y finalmente en el ámbito laboral y educacional (especialmente respecto al mantenimiento o la estabilidad, tanto como el desempeño o rendimiento en estas áreas).

Por otra parte, el contenido del informe será "psicosocial" porque deberá dar cuenta de la integración de estas áreas y de la manera en que pueden constituirse en elementos que contribuyen a una eventual reincidencia, o en su defecto, en aspectos que pueden apoyar el desarrollo de un estilo de vida alejado de delito.

El informe de postulación psicosocial es elaborado luego de un proceso de evaluación orientado a identificar y analizar la información en torno a las diversas áreas de desenvolvimiento general de la persona, haciendo uso del juicio profesional estructurado y de instrumentos estandarizados, principalmente de evaluación del riesgo de reincidencia, como apoyo a la práctica del profesional evaluador/a. De este modo, dará cuenta en qué medida estas áreas pueden constituirse en factores de riesgo de reincidencia, plasmando, además, la información requerida en otros ámbitos, según lo establecido en el art. 14 del reglamento de la ley, que establece los requisitos para su elaboración.

Además, este informe de postulación psicosocial es elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería, debido a que en su elaboración participa un equipo profesional, que le da la validación técnica al proceso, el que consta de las siguientes etapas: evaluación, propuesta de informe, aprobación y elaboración.

Equipo técnico responsable de la elaboración del informe

- Profesional evaluador/a: Corresponde al profesional del área técnica de Gendarmería de Chile o del Servicio de Reinserción Social en el caso de los establecimientos concesionados, de formación psicólogo/a, asistente social o terapeuta ocupacional, que ha sido designado para efectuar el proceso de evaluación y confeccionar el informe de postulación, conforme a las directrices que se describen más adelante.
- Jefatura técnica local o coordinador/a de reinserción social de Gendarmería de Chile en establecimientos penitenciarios concesionados: Le corresponderá revisar la propuesta de informe realizada por el/la profesional, pudiendo aprobarlo o rechazarlo con observaciones. Una vez que el informe propuesto por el profesional asignado/a sea aprobado por la jefatura correspondiente, se entenderá elaborado, debiendo quedar constancia de aquello a través de la firma y timbre, tanto de quien realizó la propuesta de informe, como de la jefatura o coordinador/a de reinserción social. El informe de postulación psicosocial firmado deberá ser respaldado de forma digital de acuerdo con las instrucciones vigentes en la materia.

Para resguardar la calidad de los informes presentados, tanto los profesionales que proponen el informe, como las jefaturas o contrapartes de Gendarmería, en el caso de los establecimientos concesionados, que los aprueban, deberán contar con formación al menos en las siguientes áreas: teorías criminológicas que explican el comportamiento delictivo, conocimiento de los aspectos que debe guiar una entrevista en contexto forense, aplicación práctica de los principios del Modelo de Riesgo, Necesidad y Responsividad, fortalezas y limitaciones de las evaluaciones de riesgo de reincidencia y entrenamiento en la aplicación del Inventario para la Gestión de Caso/Intervención (IGI) y en los otros instrumentos de evaluación especializada que se mencionan más adelante.

Solo podrán ser asignados para elaborar informes de postulación profesionales psicólogos, asistentes o trabajadores sociales o terapeutas ocupacionales del área técnica o del Servicio de Reinserción Social, indistinta la calidad contractual o si éstos se desempeñan en programas específicos del establecimiento.

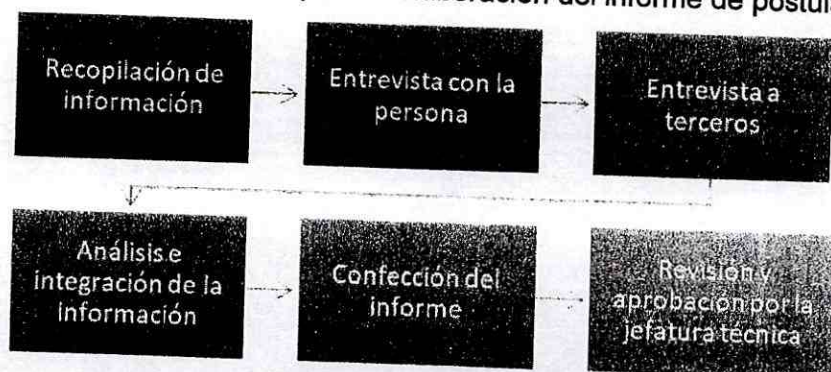
En aquellos casos en que el postulante cumple condena por delitos sexuales, femicidio, infanticidio y parricidio, ya sea como único delito o con otros, se deberá designar un profesional psicólogo, atendiendo que, además de la evaluación de los factores de riesgo de reincidencia general, será necesario realizar evaluaciones especializadas con el apoyo de instrumentos que requieren de una formación especializada. Lo mismo sucederá en los casos en que la institución establezca que, por el tipo de delito o por las características propias y singulares de la comisión de éste, se requiere una evaluación de psicopatía.

2.2. Proceso de evaluación

El proceso de evaluación tiene por objetivo producir la mayor cantidad de información sobre la persona postulante, considerando para ello la totalidad de los antecedentes disponibles. El profesional evaluador/a hará uso de la entrevista como técnica fundamental de este proceso, la cual permitirá acceder a información sobre diversas circunstancias relacionadas con aspectos personales, familiares, sociales y delictuales de la persona, sobre sus avances en el proceso de reinserción social; y a la vez, triangular o corroborar los antecedentes revisados en las fuentes consultadas.

Este proceso contempla el desarrollo de cinco principales acciones que culminan con la confección del informe de postulación psicosocial, tal como se presenta en el siguiente flujo:

Figura 1: Flujo de acciones para la elaboración del informe de postulación



Fuente: Elaboración propia.

El proceso de evaluación debe entenderse como un proceso estructurado e integral. La estructuración es porque define áreas predeterminadas para evaluar los factores de riesgo de reincidencia y los factores protectores para dar cuenta de los avances en el proceso de reinserción; mientras que la integralidad refiere al levantamiento de información proveniente de diversas fuentes, para obtener una panorámica global de todos los antecedentes considerados para la elaboración del informe.

2.2.1. Recolección de información

El primer paso en el proceso de evaluación es la recolección de información disponible que permita contar con la mayor cantidad de información sobre los antecedentes de la persona, previo a la entrevista con ella.

• Revisión de la copia de sentencia

El/la profesional que propondrá el informe para aprobación debe realizar la revisión de la copia de sentencia del delito por el que la persona postulante cumple la actual condena. Esta revisión permitirá obtener una primera aproximación a la dinámica delictiva de la persona, permitiendo contrastar lo señalado por distintas fuentes en relación con los hechos cometidos por los cuales cumple condena. Conocer estos antecedentes facilita la pesquisa y contrastación de la información, respecto a la actitud de la persona frente los hechos delictuales cometidos, así como la conciencia de la gravedad y del mal que éstos causan y de su rechazo explícito a tales conductas infractoras.

De igual forma, la revisión de la copia de sentencia constituye una de las principales fuentes de información que deben consultarse para completar una evaluación de riesgo de reincidencia, al orientar sobre la pertinencia de utilizar instrumentos especializados para la evaluación de determinados perfiles, como las personas condenadas por delitos sexuales y/o por ejercer una conducta violenta contra terceros.

- **Revisión de la carpeta individual**

Se debe realizar la revisión de la documentación disponible sobre el proceso de reinserción de la persona, lo que se obtiene al consultar su carpeta individual en el área técnica local, informes de postulación a procesos previos de libertad condicional, a permisos de salida, solicitud a traslado a CET, indultos, entre otros. También deben revisarse los antecedentes en los que se consigne la participación y los logros de la persona en actividades de intervención especializada, orientada a disminuir reincidencia, o en prestaciones para la integración social, como capacitaciones, actividad laboral, situación escolar, entre otros. Esta acción es obligatoria ante toda postulación, aun cuando la persona cuente con postulaciones a procesos de libertad condicional anteriores.

2.2.2. Entrevista individual y áreas de evaluación

Para cada proceso de postulación a la libertad condicional, el/la profesional evaluador/a deberá realizar al menos una entrevista en profundidad en forma presencial con la persona postulante.

La entrevista en profundidad es una de las fuentes primordiales para la recolección de información en el proceso de evaluación, por cuanto, a través de ella se obtienen antecedentes específicos y de primera fuente para el análisis, contrastación y ponderación de los antecedentes que serán plasmados en el correspondiente informe de postulación psicósocial.

El objetivo de la entrevista en profundidad es la identificación de los factores de riesgo de reincidencia y/o necesidades de intervención, así como los recursos y fortalezas que pueden apoyar el proceso de reinserción. En general, se recomienda que las entrevistas se realicen siguiendo los principios de la entrevista motivacional (Miller y Rollnick, 2013) para fomentar una alianza de trabajo que, desde un enfoque colaborativo, permita obtener la información necesaria en cada una de estas áreas.

Un elemento central para el desarrollo de una buena entrevista también radica en la importancia que el/la profesional evaluador/a, identifique y comprenda las diferencias individuales y culturales de las personas postulantes. Por lo tanto, se espera que el análisis de toda la información que se recabe considere esta variabilidad, que puede reflejarse en el tipo de factores de riesgo, fortalezas y recursos; y/o en la manifestación de estos elementos en determinadas poblaciones. Esto cobra especial relevancia en el caso de las mujeres condenadas, población extranjera y perteneciente a pueblos originarios, en cuyo caso, el proceso de entrevista debe tomar en consideración los elementos sociodemográficos y culturales distintivos de esta población, que pueden incidir en el análisis de la conducta delictiva, como en el acceso y efectividad que puede haber tenido el proceso de reinserción.

La entrevista individual abarcará el levantamiento de información en las siguientes áreas:

- **Factores de riesgo de reincidencia generales**

Los factores de riesgo de reincidencia pueden ser estáticos o dinámicos. Los factores estáticos hacen referencia a las características o circunstancias no modificables de la historia personal, y en caso de modificarse solo lo pueden hacer en un solo sentido. Los factores dinámicos de riesgo de reincidencia o necesidades criminógenas corresponden a características que pueden ser modificables con el paso del tiempo o a través de intervenciones específicas, por tanto, se transforman en necesidades u objetivos de intervención (Andrews y Bonta, 2010). Durante la entrevista individual será necesario ahondar en las siguientes áreas:

- **Historial delictual:** se requiere indagar sobre el número y tipo de condenas previas, además es fundamental identificar si se ha generado un cambio en la frecuencia o gravedad de la conducta delictiva. Considerando que el/la evaluador/a habrá revisado la copia de

sentencia relativa a la condena actual, es importante que durante la entrevista pueda ahondar en la trayectoria delictiva y en las condiciones de cumplimiento de las condenas previas.

- **Patrón antisocial:** consiste en indagar sobre un estilo de funcionamiento en que predomina la impulsividad, la búsqueda de adrenalina en situaciones de riesgo, bajo autocontrol o irreflexividad en la toma de decisiones, comportamiento agresivo e irritable, que expone a la persona a situaciones que pueden representar un potencial riesgo de reincidir.
- **Actitudes procriminales:** consiste en indagar en torno a las creencias, actitudes, valores y racionalizaciones que apoyan un estilo de vida delictual y que expresan actitudes negativas hacia las leyes y normas sociales.
- **Soportes sociales para el delito:** refiere a la presencia de amistades infractoras de ley y al aislamiento de pares prosociales, a la valoración que les otorga a estas vinculaciones para mantenerse fuera o dentro de un estilo de vida delictivo.
- **Relaciones con la pareja/familia:** indagar en torno a la calidad de las relaciones familiares, la existencia de conflictos, violencias, conductas vinculadas con el delito. En su polo opuesto, también es importante identificar en qué manera la pareja o familia pueden apoyar el proceso de reinserción y alejamiento del delito.
- **Consumo de drogas y alcohol:** corresponde la indagación sobre un historial de consumo de drogas o alcohol que haya sido problemático para la persona, o bien, sobre la existencia de un consumo actual que también lo sea. Es importante que, en caso de pesquisar que este factor representa un área problemática, su identificación sea complementada con una evaluación especializada, orientada a establecer el grado de consumo y la necesidad de un tratamiento, que pueda entregar mayores antecedentes sobre la influencia que ejerce este factor en el desenvolvimiento general de la persona.
- **Educación:** en general, se centra en indagar el nivel educacional alcanzado, su desempeño académico y posible dificultades de aprendizaje, relación con sus pares y profesores y los niveles de satisfacción. También es importante pesquisar sobre el interés de proseguir con sus estudios y los ámbitos de interés.
- **Empleo:** consiste en indagar sobre la trayectoria laboral, el desempeño, la estabilidad, niveles de satisfacción laboral, áreas de interés para fomentar sus habilidades de empleabilidad y tipo de capacitaciones recibidas. Una evaluación más detallada de las habilidades y competencias para desempeñar un determinado empleo o capacitación escapa de la evaluación de esta área como un factor de riesgo y se incorporan generalmente como parte de los programas.
- **Uso del tiempo libre:** como factor de riesgo debe identificarse la falta de participación en actividades recreativas prosociales, pero también es importante indagar el tipo de actividades que son de su interés o en las que ocupa su tiempo libre y la valoración que les otorga.

En el contexto de la elaboración de los informes de postulación psicosocial, la evaluación de los factores de riesgo de reincidencia cumple dos propósitos. Por una parte, se orienta a identificar los cambios que se han generado en alguna de estas áreas a lo largo del cumplimiento de condena, especialmente, respecto a las condiciones que fueron evaluadas previo a participar en una actividad, programa o intervención especializada y al término de ésta, con el fin de describir y analizar los avances en el proceso de reinserción.

Por otro lado, esta evaluación se orienta a la identificación de las áreas o situaciones que pueden dificultar el proceso de reinserción o el tránsito a la comunidad y que hagan que este proceso sea de alto riesgo, lo que debe quedar claramente explicitado y fundamentado, sin perjuicio que luego se puedan definir acciones de supervisión para mitigar el impacto que los factores de riesgo puedan tener en el desenvolvimiento de la persona en libertad. Este análisis se orienta a proveer de la información necesaria para establecer medidas de supervisión que se ajusten a las necesidades de intervención y riesgo de reincidencia de la persona en caso de que igualmente obtenga la libertad condicional.

- **Evaluaciones especializadas en el caso de delitos de sexuales, violentos y de lesa humanidad**

La modificación al D.L. N° 321 establece mayores exigencias para los equipos de Gendarmería de Chile y del Servicio de Reinserción Social de los establecimientos penitenciarios para la evaluación de las personas postulantes. Los requisitos señalados a nivel legal y reglamentario suponen un mejoramiento de los procesos evaluativos tendientes a la elaboración de los informes de las personas postulantes, y cuanto más, respecto de quienes cumplan condenas por la comisión de delitos de mayor connotación social; entendiéndose por esto, a los delitos sexuales, delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar; y respecto de quienes cumplan condenas por delitos que, en conformidad al derecho internacional, son considerados como crímenes de lesa humanidad.

La relevancia de complementar las evaluaciones de los factores de riesgo de reincidencia general con evaluaciones especializadas, responde a la importancia de identificar y analizar las áreas críticas que son más relevantes para esta categoría de delitos, los que muchas veces se ubican en áreas específicas del desenvolvimiento psicosocial.

En términos generales, los ámbitos fundamentales de evaluar se encuentran en el área individual (características biográficas, actitudes y racionalizaciones), familiar (relaciones disfuncionales y conflictivas entre sus integrantes) y social (aislamiento social o un entorno que valida las actitudes de la persona), cuyas dinámicas y preponderancia de un área por sobre otra, pueden variar en cada tipo de delito. Considerando la heterogeneidad de esta población y perfiles delictivos, resulta fundamental establecer en qué medida el retorno anticipado a la comunidad podría constituir un riesgo para la seguridad pública, considerando las características personales y el posible contexto en que se desenvuelva al salir de la cárcel.

En la mayoría de estos casos será necesario complementar la evaluación de los factores de riesgo de reincidencia general con evaluaciones especializadas, que tendrán por finalidad complementar y/o profundizar el levantamiento de información sobre un factor de riesgo de reincidencia en particular, o bien, evaluar aspectos puntuales que requieren de una mayor fundamentación y que no han sido pesquisados en una evaluación general.

A continuación, se especifican las consideraciones esenciales a tener a la vista al momento de realizar este tipo de evaluaciones, las cuales otorgan mayor solidez al proceso de evaluación a un grupo específico de postulantes a libertad condicional:

- **Evaluación de la conducta de violencia sexual:** considera la identificación y análisis de los factores de riesgo estáticos y dinámicos que se asocian específicamente con la comisión de delitos de naturaleza sexual, especialmente abuso sexual y violación. Las áreas que deben evaluarse para pesquisar con mayor precisión los factores de riesgo en las personas que cumplen condena por este tipo de delito, son las siguientes:

- **Historial delictivo de violencia sexual:** al igual que en los delitos generales, consiste en indagar sobre el tipo de delito, cambios en la frecuencia o diversidad de la violencia sexual cometida, etc.
- **Actitudes:** se indaga respecto a la existencia de distorsiones cognitivas vinculadas con la minimización o negación de la conducta y aquellas que apoyan o justifican su comportamiento.
- **Adaptación psicosocial:** identificar la presencia de estresores al momento de la comisión del delito y/o que pudieran estar presentes en su entorno actualmente, antecedentes de victimización y/o experiencias de abuso.
- **Relaciones interpersonales:** considera relaciones problemáticas con la pareja, familia, dificultades para establecer relaciones cercanas, retraimiento, aislamiento social.
- **Intereses sexuales:** indagar sobre las preferencias sexuales, desviaciones, etc.
- **Salud mental:** considera la necesidad de evaluar la presencia de un trastorno de la personalidad o mental, ideaciones suicidas, etc.

- **Evaluación de la conducta violenta:** una evaluación especializada en esta área busca identificar y describir los factores de riesgo que se vinculan con la manifestación de

una conducta violenta, en personas que cuentan con antecedentes en esta área. La conducta violenta o violencia interpersonal es entendida como el acto, intento o amenaza de infligir daño físico y/o psicológico grave a otra persona y se recomienda su aplicación en las personas postulantes cuyo delito índice involucre violencia grave, tales como homicidios, lesiones de consideración.

- **Antecedentes de violencia previa:** consiste en identificar el patrón de conducta violenta, inicio y motivaciones.
- **Funcionamiento psicosocial y familiar:** evaluar el desenvolvimiento y la presencia de situaciones conflictivas en diversos aspectos: relaciones de pareja, problemas laborales y apoyo social. También se incluye una indagación sobre la existencia de desajustes conductuales en la infancia y la presencia de altos niveles de estrés.
- **Consumo de drogas y alcohol.**
- **Actitudes:** en este punto es importante indagar sobre la presencia de pensamientos negativos hacia terceros, racionalizaciones que justifiquen la violencia.
- **Impulsividad y baja capacidad reflexiva.**
- **Salud mental:** considera la necesidad de evaluar la presencia de un trastorno de la personalidad o mental, ideaciones suicidas, etc.

- **Evaluación de la violencia en contra de la pareja:** la violencia ejercida en este contexto se entiende como cualquier intento, amenaza o violencia real perpetrada por un hombre o una mujer contra alguien con quien tiene, o ha tenido, una relación sentimental íntima.

- **Antecedentes de conductas violentas hacia la pareja:** consiste en identificar el tipo de conducta violencia ejercida, inicio y motivaciones, así como el uso de mecanismo de coerción o amenazas.
- **Cualidad de la relación de pareja actual:** indagar sobre la existencia de problemas recientes con la pareja y los motivos.
- **Consumo de alcohol y drogas.**
- **Actitudes hacia la conducta violenta:** indagar sobre racionalizaciones para justificar su comportamiento, atribuciones de responsabilidad a terceros, validación de la agresión. También considera la identificación de ideas descalificadoras hacia la pareja, sentimientos de ira, rabia.
- **Adaptación psicosocial:** incluye la indagación en torno a problemas en el ámbito laboral y la presencia de estresores en la esfera social. También es importante evaluar si ha sido víctima o testigo de violencia en la familia a lo largo de su vida.
- **Salud mental:** considera la necesidad de evaluar la presencia de un trastorno de la personalidad o mental, ideaciones suicidas, etc.

- **Diagnóstico de psicopatía:** La evaluación de psicopatía es altamente especializada, por lo cual requiere ser realizada por profesionales psicólogos formados en la materia. Como constructo, hace referencia a la presencia de determinadas características que necesitan ser evaluadas para establecer el diagnóstico, según lo propuesto por Hare (2000):

- **En el ámbito interpersonal:** identificar si hay superficialidad en las relaciones, insensibilidad, arrogancia, necesidad de poder y control, para lo cual hacen uso de la manipulación para lograr sus objetivos.
- **Área afectiva:** irritabilidad, falta de sentimientos de culpa y de empatía.
- **Estilo de vida antisocial:** evaluar la presencia de comportamientos impulsivos, inhibición de la conducta violenta y una tendencia a ignorar o violar las convenciones y normas sociales.

La presencia de un diagnóstico de psicopatía es un criterio que considerar para evaluar el factor de riesgo "patrón antisocial", sin embargo, no es un requisito tener que efectuar una evaluación especializada en esta área para valorar este factor. Por lo tanto, será a partir de la entrevista global, o bien, cuando la persona postulante ha sido condenada por delitos violentos (sexuales, por violación de los derechos humanos) que el profesional evaluador/a decidirá efectuar una evaluación de psicopatía, aunque su aplicación no se limita a estos delitos (por ejemplo, en los delitos de cuello blanco también podrán requerir una evaluación en esta área).

- **Recursos y factores protectores para la reinserción social**

El proceso de evaluación se caracteriza por ser estructurado e integral, por lo que la identificación de los factores de riesgo de reincidencia debe complementarse con la evaluación de los recursos y factores protectores para la reinserción social.

Los factores protectores suelen considerarse como el reverso de los factores de riesgo, y en este sentido, en cada una de las áreas mencionadas para evaluar el riesgo general debe analizarse si el funcionamiento en dichas áreas puede constituirse en un factor protector. En términos generales, un factor es protector cuando contribuye a disminuir la probabilidad de obtener resultados negativos en el funcionamiento general de la persona y/o cuando puede mitigar el efecto de los factores de riesgo de reincidencia.

Para ello, se podrán considerar las actividades que haya realizado la persona y que, por su naturaleza, constituyan aspectos favorables para su reinserción, como puede ser la nivelación de estudios, participación satisfactoria en actividades de capacitación laboral con adquisición de conocimientos en algún oficio calificado, el desarrollo de competencias laborales, u otras.

No obstante, las personas también cuentan con capacidades y fortalezas cuya contribución no se relaciona necesariamente con mitigar los efectos de los factores de riesgo, sino que en gatillar procesos de cambios. Estas capacidades y fortalezas pueden estar presentes a nivel individual, familiar o social y se entienden como recursos que movilizan y sostienen los logros a lo largo del tiempo. A diferencia de los factores protectores que desempeñan un rol central en la evaluación del riesgo de reincidencia, los recursos son fundamentales como palancas que puede ayudar a remover las barreras, apoyar el cambio deseado y fomentar la mantención de los logros.

La evaluación de los recursos personales consiste en identificar las motivaciones e intereses que las personas postulantes manifiestan para su futuro desde su propia perspectiva y no desde los profesionales evaluadores. Las motivaciones e intereses son un importante movilizador cuando se vinculan con las metas que las personas se proponen alcanzar, al activar su disposición por realizar acciones para el logro de éstas, lo que, a su vez, refuerza su sentido de autoeficacia.

Por lo tanto, será necesario indagar sobre las metas, proyecciones y planes que tienen las personas y la manera en que pueden convertirse en soportes para el proceso de reinserción, en este caso, durante la supervisión en el medio libre. También considera identificar las expectativas que pueda tener la persona respecto al cumplimiento en libertad condicional y al apoyo que espera recibir.

Finalmente, la evaluación de los recursos familiares y sociales consiste en identificar la presencia de una red de apoyo familiar y/o comunitaria que puede activarse para apoyar el tránsito a la comunidad. A nivel familiar, es importante identificar algún referente significativo que esté dispuesto a ser parte de este proceso, mientras que, a nivel social, es importante identificar la presencia de programas o iniciativas de apoyo postpenitenciario u otros que pueden activarse a nivel local o central.

2.2.3. Entrevista a terceros

Para brindar una mayor integralidad al proceso evaluativo, es necesario triangular la información con terceros, siendo en todo caso recomendable entrevistar a uno o más representantes del núcleo familiar o terceros significativos. Estas entrevistas podrán ser desarrolladas a través de visitas a terreno o por citación al establecimiento penitenciario.

Igualmente se recomienda recurrir a otras fuentes de información, como funcionarios de trato directo, particularmente personal uniformado a cargo de las dependencias donde habita la persona postulante, profesionales con los que participa o ha participado en la intervención, entre otros, a objeto de identificar, corroborar o descartar información en el proceso evaluativo. Recurrir a estas fuentes para triangular la información es fundamental, en atención a que no siempre se podrá tener acceso a entrevistar a la familia.

2.2.4. Análisis e integración de la información

Una vez recabada toda la información en las diversas áreas de desenvolvimiento mencionadas previamente, esto es: factores de riesgo de reincidencia general y específicos, recursos y factores protectores para la reinserción social, haber consultado diversas fuentes y entrevistados terceras personas, será necesario analizar e integrar todos estos datos y completar los instrumentos de evaluación que sea necesarios.

En todos los casos será necesario realizar un proceso de entrevista que culmine con la integración de toda la información recabada, sin embargo, en algunos casos, la aplicación de instrumentos no será necesaria, ya que podrán contar con una evaluación anterior que aún se encuentre vigente. En estos casos, se podrá utilizar la información incorporada en los respectivos instrumentos para triangular lo obtenido a través de las entrevistas y revisión de otras fuentes, para elaborar el informe de postulación psicosocial.

2.2.5. Vigencia de las evaluaciones de riesgo de reincidencia

En el caso de la población que cuenta con evaluaciones de riesgo de reincidencia, previo a la postulación a la libertad condicional, la vigencia de dichas evaluaciones será de un año desde la fecha de su elaboración, a excepción del PCL-R, cuya vigencia será de cinco años. Pasado ese plazo, será necesario realizar un proceso de evaluación orientado a completar y/o actualizar los instrumentos de evaluación que sean necesarios.

En caso de caducar la vigencia de las evaluaciones de riesgo de reincidencia, será necesario realizar una actualización de uno o más de los siguientes instrumentos (lista referencial, pero pueden adicionarse otros, en la medida que sea necesario disponer de un instrumento estandarizado para la evaluación de una determinada área):

- Inventario para la Gestión de Caso/Intervención (IGI): instrumento que establece el nivel de riesgo de reincidencia y las necesidades de intervención, además de identificar los elementos de responsividad.
- Protocolo para la Valoración del Riesgo de Violencia Sexual (RSVP): cuyo objetivo es determinar el nivel de riesgo de reincidencia en todas aquellas personas condenadas cuyo delito índice sea de índole sexual.
- Guía para la Valoración de Conducta Violenta (HCR-20 V3): tiene por objetivo evaluar y gestionar el riesgo de violencia interpersonal.
- Guía para la Valoración del Riesgo de Agresión hacia la Pareja (SARA V3): que se aplica para la evaluación y gestión del riesgo de violencia en la pareja.
- Psychopathic Checklist Revised (PCL-R): Se utiliza de manera obligatoria en delitos de mayor connotación social para evaluar un posible diagnóstico de psicopatía. Su vigencia es de 5 años desde la fecha de aplicación. En caso de modificaciones significativas en los factores 3 y 4 del instrumento, el/la profesional deberá modificar el diagnóstico, fundamentando el cambio en los ítems correspondientes.

Adicionalmente, y considerando que la mayoría de las personas que cuentan con una evaluación de riesgo de reincidencia, ha sido orientada a la elaboración de un plan de intervención individual o la postulación a algún otro beneficio penitenciario, será importante evaluar en qué medida las necesidades de intervención han sufrido modificaciones significativas como resultado de su participación en intervenciones, acciones y/o programas de reinserción social, lo cual podrá requerir que los instrumentos sean actualizados, aun cuando se encuentren dentro del periodo de vigencia establecido de un año.

Teniendo en cuenta esta información, se realizará la correspondiente actualización tanto de los factores de riesgo de reincidencia general y específicos, como de los factores protectores y recursos para la reinserción social.

2.3. Confección del Informe de Postulación Psicosocial

La elaboración del informe psicosocial de postulación deberá redactarse a partir del análisis e integración de las diferentes fuentes de información consultadas durante el proceso de evaluación, cuyos principales resultados deberán plasmarse en los diferentes apartados del informe.

Para ello, el/la evaluador/a deberá utilizar su juicio profesional para emitir un pronunciamiento sobre los avances en el proceso de reinserción de la persona que ha sido evaluada; y a la vez, emitir una opinión fundamentada respecto a los factores de riesgo de reincidencia, recursos y factores protectores, con el fin de orientar sobre sus posibilidades para reinserirse adecuadamente en la sociedad.

El contenido del informe debe plasmar lo que fue pesquisado durante el proceso de evaluación desde una perspectiva integral, es decir, ponderando la influencia de los diversos aspectos que fueron evaluados, con afirmaciones que se apoyen en datos o fuentes contrastables, evitando incluir juicios de valor u opiniones personales sin fundamento técnico.

A continuación, se presentan los lineamientos para que el/la profesional pueda dar cuenta de los requisitos técnicos del informe de postulación psicosocial, según lo consignado en el art. N° 14 del reglamento de la ley. Si bien en este punto no se adjunta el formato del informe de postulación, se incorporan todas las áreas que debe contener.

1. Individualización de la persona postulante y del equipo evaluador

Este es el primer punto a desarrollar del informe de postulación y se compone de la siguiente información:

- Datos personales del/la postulante
 - Nombre completo
 - Fecha de nacimiento
 - Edad al momento de la postulación
 - Establecimiento penal de cumplimiento
- Equipo evaluador
 - Nombre del profesional evaluador/a
 - Nombre de la jefatura técnica
 - Fecha de elaboración

2. Descripción de la metodología empleada

El informe debe describir la metodología empleada en su elaboración, indicando todas las técnicas que fueron utilizadas para recabar la información y efectuar el proceso de evaluación, lo cual considera lo siguiente:

- Las fuentes de información secundaria revisadas para el análisis de antecedentes incorporados en el informe y fecha de la consulta;
- Número de entrevistas realizadas a la persona postulante y fecha(s);
- Número de entrevistas a terceros, indicando el vínculo o relación con la persona y fecha(s);
- Los instrumentos que fueron aplicados o consultados, en el caso de utilizar los resultados de una evaluación de riesgo vigente, indicando la fecha en que fueron completados.

3. Descripción de la persona postulante

En este punto, el informe de postulación debe hacer referencia a los antecedentes individuales, laborales y familiares de la persona postulante, al delito cometido, a su riesgo de reincidencia, necesidades de intervención, recursos y factores protectores. También corresponde describir los principales resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos aplicados o consultados, presentando la información recabada desde una perspectiva integrada.

En relación con los resultados de los instrumentos de evaluación de riesgo de reincidencia es importante tener en cuenta que la comunicación de esta información debe hacerse con cautela, ya que, entre otros aspectos, un mismo resultado (en este caso, un mismo nivel de riesgo) no siempre es interpretado de la misma manera. Esto puede ocurrir por la falta de consenso sobre el significado o las categorías de riesgo que se observa entre quienes hacen uso de estas herramientas, como por la amplia variabilidad en el nivel de riesgo que presentan las personas que se agrupan en una misma categoría (Krauss, Cook y Klapatch, 2018). Por lo tanto, y para evitar o al menos minimizar interpretaciones erróneas sobre los resultados que entregan las evaluaciones de riesgo de reincidencia, la información debe presentarse tomando en consideración los siguientes lineamientos:

- Respecto al nivel de riesgo de reincidencia total: En el informe no debe indicarse el puntaje obtenido por la persona a la evaluación de riesgo de reincidencia. Por el contrario, la comunicación de los resultados debe hacerse utilizando las categorías o niveles establecidos por el instrumento (por ejemplo: bajo, medio o alto riesgo de reincidencia) y no limitarse a mencionarlo, sino que a describir y analizar qué significa o cómo el(la) evaluador (a) está interpretando esta valoración a la luz de todos los antecedentes recabados.

- Respecto a la interpretación de la categoría de riesgo de reincidencia: no debe darse a entender que la categoría de riesgo bajo (muy bajo), medio o alto (muy alto) representa una predicción sobre el comportamiento futuro de la persona. Esta valoración o clasificación en categorías de riesgo debe orientarse a dar cuenta de la complejidad del caso y de los desafíos que enfrenta la persona en su proceso de reinserción social, en atención a su trayectoria delictiva, cantidad y relevancia de los factores de riesgo identificados al momento de la evaluación. Por lo tanto, el nivel de riesgo solo debe utilizarse como categoría de referencia que oriente respecto a los factores de riesgo (y factores protectores) que se vinculan con la actividad delictiva de la persona que está siendo evaluada. Deben evitarse las referencias deterministas, ya que los resultados de la evaluación de riesgo de reincidencia pueden cambiar con el tiempo y/o con estrategias de supervisión e intervención adecuadas a los requerimientos del caso.

- Respecto a los factores de riesgo de reincidencia: junto con mencionar el nivel de riesgo de reincidencia general, se debe describir la valoración otorgada a cada una de las áreas que fueron evaluadas, que sustentan la valoración final y que constituyen potenciales áreas de intervención. Además, y considerando que el IGI levanta información sobre los factores protectores, también debe mencionarse si algún factor ha sido evaluado como protector, así como todos los aspectos positivos o favorables que han sido identificados durante la evaluación.

Cabe recordar que, en este punto, el foco debe estar puesto en describir a la persona y no en dar cuenta sobre sus avances en el proceso de reinserción, cuestión que será desarrollada en el siguiente punto del informe.

Para ello, el/la profesional evaluador/a deberá:

- Describir la trayectoria delictiva o patrón de conducta delictiva de la persona evaluada, incluyendo referencias al tipo de delitos cometidos y a eventuales cambios en la gravedad y versatilidad de los mismos a lo largo del tiempo.

- Describir los factores de riesgo de reincidencia presentes al momento de la evaluación y analizar de qué manera se vinculan con el comportamiento infractor, se incluirán los factores generales y específicos a partir de los diversos instrumentos aplicados. Este análisis debe integrarse con la manera en que los factores protectores (en caso de identificarse), mitigan los factores de riesgo y adicionalmente, indicar la manera en que los recursos personales, familiares y/o sociales pueden ayudar al abordaje de las necesidades de intervención identificadas. Es importante que se apoye la argumentación con ejemplos concretos que puedan dar cuenta de la relevancia en relación con el riesgo de reincidencia y el desenvolvimiento general de la persona evaluada.

- De igual forma, se debe incorporar una descripción de los recursos personales, familiares y de la red social que dispone actualmente o que pudieran activarse en su retorno al medio libre. En el análisis de los antecedentes que se vinculan con su situación actual, se debe consignar la situación socioeconómica, antecedentes relevantes con que cuenta la

persona en el medio libre en el ámbito de la vivienda, acceso a servicios de la red, competencias o experiencias laborales, etc., que favorezcan un adecuado proceso de reinserción social.

- Para dar cuenta de la conciencia de la gravedad del delito y del mal que éste causa, se utilizará como referencia la evaluación otorgada a las variables consignadas en el manual de puntuación del Inventario para la Gestión de Caso/Intervención (IGI), relativa al subcomponente actitud y orientación procriminal. Este subcomponente valora la percepción que tiene la persona de sí misma y de terceros en relación con las infracciones a la ley, lo que permite identificar la validación o postura crítica en relación con los delitos cometidos. Se debe señalar la tendencia a favor del delito, las actitudes frente a las normas y convenciones sociales, frente a la condena y hacia la supervisión e intervención.

Adicionalmente, y en el caso de evaluaciones en ámbitos específicos, se deberá indicar los principales hallazgos que aporten al análisis de la conciencia y gravedad del daño causado. A modo de ejemplo, cuando se confirma el diagnóstico de psicopatía, se deberá indicar de manera explícita en el informe esta condición, explicando la manera en que se manifiesta en el estilo de vida de la persona evaluada y su vinculación con la conducta delictiva.

- Por su parte, en relación con evaluar el rechazo explícito a tales delitos, es importante señalar que esta variable presenta una gran vinculación con la evaluación otorgada al factor actitud y orientación procriminal, señalado en los párrafos anteriores. De este modo, el rechazo a los delitos deberá analizarse a partir de la argumentación que realice la persona evaluada sobre su patrón delictivo, incorporando en el análisis las motivaciones y metas a futuro, a fin de ponderar su tendencia hacia lo normativo y convencional o más bien hacia lo delictivo y antisocial.

- En el caso de las personas condenadas por delitos sexuales, violentos y de lesa humanidad, se deberá complementar la evaluación de riesgo de reincidencia general con evaluaciones especializadas conforme a lo indicado previamente, privilegiando los resultados obtenidos en las áreas específicas vinculadas con el delito en cuestión para describir los factores de riesgo, necesidades de intervención, recursos y factores protectores.

4. Descripción de las actividades de reinserción realizadas

En este apartado corresponde describir los avances en el proceso de reinserción de la persona postulante. Esta descripción debe hacer referencia a las actividades de reinserción social realizadas durante el cumplimiento de su condena, especificando los objetivos perseguidos y los logros alcanzados por su participación en éstas.

En el caso de las personas que cuentan con un plan de intervención individual, se deberá indicar si la persona, a la fecha de postulación, ha participado de la oferta programática disponible en el establecimiento penitenciario, conforme a lo dispuesto en su plan; y en caso contrario, señalar los motivos por los que no ha participado de este tipo de acciones.

Asimismo, será necesario indicar cuál de todas las necesidades de intervención pesquiasadas en la evaluación han sido abordadas, indicando el resultado de las acciones de reinserción implementadas, explicando los logros alcanzados y los aspectos que deben fortalecerse. También, deberá señalarse las necesidades que aún se encuentran pendientes, en caso de que el plan se encuentre inconcluso y con plazos para su finalización. Es importante que se indique si la falta de oferta programática para cada una de las áreas de intervención es la causa de que un área no haya sido trabajada, ya que no es un motivo atribuible a la persona. Es importante que no solo se indique la necesidad de intervención que ha sido o no abordada, sino que se explique la relevancia que tiene esta área en el desenvolvimiento psicosocial de la persona evaluada y de qué manera se vincula, ya sea como un factor de riesgo o un factor protector en la comprensión de la conducta delictiva.

Para dar cuenta de los avances en el proceso de reinserción social, se podrá informar si ha habido variaciones en el nivel de riesgo de reincidencia y los motivos (y/o áreas) que podrían explicar este cambio, siempre y cuando, la persona postulante cuente con más de una evaluación efectuada durante el cumplimiento de su condena. Si la primera evaluación de riesgo de reincidencia efectuada es aquella para postular a la libertad condicional, será

necesario dar cuenta de los avances utilizando otras medidas o herramientas para describir los logros alcanzados.

Por otro lado, si la persona postulante ha finalizado satisfactoriamente las actividades contenidas en su plan de intervención y en la evaluación del riesgo de reincidencia obtiene un nivel alto o muy alto e incluso medio, se deberá indicar los resultados favorables obtenidos en su proceso de reinserción, identificando los avances alcanzados y los cambios en las necesidades de intervención que se han observado y que no han pesquissados con el instrumento de evaluación de riesgo de reincidencia. En estos casos, será necesario describir claramente en qué ámbitos se observan estos cambios y cómo se manifiestan en el comportamiento de la persona para evitar interpretaciones que no necesariamente se ajusten con la situación actual y/o que no permitan visibilizar los avances en el proceso de reinserción. Esto también puede ocurrir ante determinadas actitudes o comportamientos que no son evaluados a través de estos instrumentos, lo cual deberá identificarse por el/la profesional evaluador/a haciendo uso de su juicio profesional, para ponderar toda la información disponible al momento de dar cuenta de los avances.

En caso que la persona postulante no cuente con un plan de intervención al momento de ser evaluado, se deberá indicar de forma expresa esta situación e indicar si los motivos son por falta de cobertura u oferta del establecimiento penitenciario, o bien, por falta de motivación o interés de la persona evaluada, en cuyo caso deberán mencionarse las actividades realizadas para fomentar la motivación e interés por participar en la oferta programática y describir el resultado de estas acciones. Sin perjuicio de aquello, deberá señalarse la participación en actividades de intervención o asociadas a prestaciones de derechos, como educación, trabajo, de tipo cultural o participación en otras iniciativas locales que se hayan realizado sin un plan elaborado. Para esto, el/la profesional evaluador/a deberá analizar los resultados de su participación y la contribución que han tenido en su proceso de reinserción, en función de lo pesquissado en el proceso de evaluación.

5. Expectativas de la persona postulante

Considerando que este informe tiene por finalidad orientar a la Comisión de Libertad Condicional sobre los factores de riesgo de reincidencia y los avances en el proceso de reinserción desde la perspectiva del/la profesional evaluador/a, es importante que la Comisión puede conocer sobre las motivaciones de la persona postulante en torno a su proceso de reinserción y las posibilidades que le ofrece el cumplimiento de condena en el medio libre.

Con la finalidad de hacer partícipe a la persona en este proceso, pero también para que se tomen en consideración sus intereses al momento de planificar la supervisión de la libertad condicional, en caso de otórgasela, es que deben incorporarse las expectativas que la persona postulante tiene respecto a su proceso de reinserción en el medio libre. Se debe señalar el apoyo que la persona espera conseguir y cuáles son las posibilidades de que ello suceda, según la evaluación que realice el/la profesional, en la eventualidad que se le otorgara el beneficio de libertad condicional.

También corresponderá explicar y/o dar cuenta de los resultados obtenidos a la evaluación de los recursos personales, describiendo las motivaciones e intereses que las personas postulantes manifiesten para su futuro, al igual que sus metas, proyecciones y planes. Es importante que se analice de qué manera estos aspectos pueden convertirse en soportes para el proceso de reinserción, a partir de análisis global que se realice de todos los elementos evaluados.

6. Sugerencia de programas o actividades para el medio libre o acciones durante el cumplimiento

A partir del proceso de evaluación y de los avances en el proceso de reinserción, el/la profesional evaluador/a debe emitir un juicio respecto a las áreas que no han sido abordadas durante el cumplimiento de su condena y/o que requieren ser reforzadas o monitoreadas para dar continuidad a su proceso de reinserción en el medio libre.

En este punto, debe indicarse cuáles son las sugerencias que hace el equipo profesional que elabora el informe para la supervisión en el medio libre, en caso que la persona

accediera al beneficio de libertad condicional a partir de los factores de riesgo de reincidencia que han sido identificados y que aún no han podido ser trabajados. Se sugiere explicar de qué manera estos aspectos representan áreas potencialmente complejas o de alto riesgo a los que debe prestarse especial atención, y cuáles son áreas que pueden apoyar el proceso de reinserción en libertad.

Si como resultado del proceso de evaluación el/la profesional llega a la conclusión de que la persona presenta un alto riesgo de reincidir y que, además, durante el cumplimiento de la condena no registra vinculación en actividades de intervención o que ha renunciado o ha sido egresada por cumplimiento insatisfactorio del proceso de intervención o ante la existencia de un diagnóstico de psicopatía, es importante argumentar los motivos para considerar que el cumplimiento de la condena en libertad condicional representa una situación de alto riesgo que requiere una supervisión intensiva.

En caso que el/la profesional estime que hay razones fundadas para no sugerir la participación en programas o actividades en el medio libre, deberá señalar las razones que fundamentan tal determinación y las acciones que se recomienda que la persona realice, o bien, los logros que se espera que alcance durante el tiempo de condena que aún le resta por cumplir.

7. Análisis global del proceso de reinserción de la persona postulante

El análisis global del proceso de reinserción social debe resumir e integrar la información presentada en los puntos anteriores, dando cuenta de los factores de riesgo o necesidades de intervención, factores protectores, recursos y fortalezas que el/la evaluador/a a cargo del informe identificó como más significativos.

El foco debe estar en los aspectos que fortalecen el proceso de reinserción y en aquellos más problemáticos que necesitan ser reforzados o intervenidos para apoyar el tránsito a la comunidad y disminuir el riesgo de comisión de nuevos delitos. También es importante mencionar si es que se visualizan alternativas de apoyo disponibles para la persona evaluada en el medio libre que pudieran contribuir a su integración social.

Capítulo IV

Proceso de Supervisión de la Libertad Condicional

La supervisión de la libertad condicional es el proceso que se inicia una vez obtenida la libertad condicional, la que es considerada un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad demuestra avances en su proceso de reinserción social.

Toda persona beneficiada con la libertad condicional quedará sujeta a la supervisión de un(a) Delegado(a) de Libertad Condicional(DLC) de Gendarmería de Chile, institución que administrará el sistema de supervisión de la Libertad Condicional a través del Departamento Postpenitenciario y que operará a través de sus Centros de Apoyo para la Integración Social (CAIS), salvo excepciones, cuando estos no tengan cobertura.

Los objetivos que tendrá la supervisión de la libertad condicional en quienes han obtenido el beneficio son los siguientes:

- (a) Dar cumplimiento de las condiciones impuestas por la libertad condicional;
- (b) Disminuir las probabilidades de reincidencia;
- (c) Promover la integración social del individuo.

Objetivo	Dar cumplimiento de las condiciones impuestas por la libertad condicional	Disminuir las probabilidades de reincidencia	Promover la integración social del individuo
Acciones	Verificar el cumplimiento de las condiciones	Elaborar un plan de intervención que:	Elaborar un plan de intervención para:

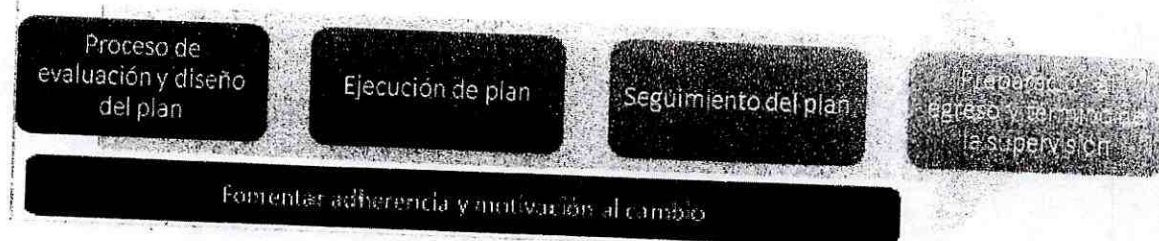
establecidas en el D.L. 321 y su respectivo reglamento.	Aborde las necesidades intervención con objetivos medibles y acotados en el tiempo (que considere el tiempo de cumplimiento y acceso a beneficios).	Facilitar la vinculación de la persona con los servicios y redes comunitarias que requiera para dar respuesta a sus necesidades de atención.
Potenciar la adherencia a la normativa, con el fin de lograr un adecuado cumplimiento de los requisitos establecidos en la Libertad Condicional, especialmente respecto a la participación en un plan de intervención individual	Considere el abordaje de las principales necesidades criminógenas, incorporando los factores protectores, fortalezas y recursos personales en el desarrollo de las actividades de gestión de caso.	Mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas través de su derivación a agencias de educación, capacitación, formación en oficios, o bien fomentar la colocación laboral, ya sea dependiente o independiente.
Postulación al art. 8 de la ley DL N° 321 y enviar la documentación establecida a la Comisión de Libertad Condicional para que emita un pronunciamiento respecto a la procedencia de este beneficio.	Promueva la incorporación de habilidades cognitivas, emocionales y sociales que le permitan a la persona desenvolverse adecuadamente en la comunidad, desplegando estrategias de evitación de riesgos de comisión de delitos y/o conductas de riesgo.	Potenciar proceso de revinculación familiar, en los casos que corresponda.
Entregar orientación sobre cumplimiento(s) de condena, omisión de antecedentes y aclaración prontuarial con el fin de posibilitar su adscripción al Decreto Ley N° 409		Proveer de información y orientación sobre redes de apoyo públicas, privadas y del tercer sector para que las personas puedan seguir con su proceso de integración social.
		Gestionar las derivaciones a la red pública y/o privada para facilitar el acceso a prestaciones especializadas que no pueden brindarse por el equipo de los CAIS, por ejemplo, en el ámbito del tratamiento de adicciones, patologías psiquiátricas, entre otros.

Proceso de Gestión de Caso en la Libertad Condicional

La gestión de caso es un proceso transversal a toda la supervisión de la libertad condicional y se inicia desde el momento en que al DLC se le asigna a la persona con el beneficio. Las principales actividades de la gestión de caso pueden resumirse en: (1) evaluación de las necesidades y recursos; (2) desarrollo de un plan de intervención; (3) vinculación de la persona a los servicios y actividades del plan; (4) monitoreo de los avances y fomento de la satisfacción de los requerimientos, equilibrando las necesidades de control asociados al cumplimiento de condena, con la autonomía requerida por parte de la persona para alcanzar los logros esperados.

Estas actividades están representadas en la figura 2, que detalla las etapas de la gestión de caso, proceso en que el fomento de la adherencia a la norma y la motivación al cambio es un elemento central de la relación entre DLC y liberto(a).

Figura 2: Etapas de la gestión de caso en libertad condicional



Fuente: Elaboración propia.

1. Fase de Ingreso al Centro

La fase de ingreso a libertad condicional se inicia cuando la persona acude al CAIS para iniciar el cumplimiento de este beneficio. Por tanto, se orienta al logro del ingreso satisfactorio de la persona beneficiada al sistema de supervisión, la cual se encontrará compuesta de dos etapas (1) ingreso administrativo, y (2) reunión de ingreso. Ambas etapas se consideran como la primera condición general de cumplimiento del plan de intervención individual.

1.1 Ingreso administrativo

El hito que dará inicio al proceso de supervisión de las personas con libertad condicional estará dado por la determinación de la respectiva Comisión de Libertad Condicional de conceder dicho beneficio, informando sobre su concesión a través de una resolución a todas las partes involucradas.

Una vez recibida la resolución por parte de la jefatura del establecimiento penitenciario del subsistema cerrado de origen y, en un plazo máximo de 24 horas, ésta deberá remitir copia de dicha resolución a cada CAIS que sea responsable de la posterior supervisión de las personas condenadas beneficiadas con la libertad condicional, según corresponda a su lugar de residencia, establecido en la resolución.

Recibida la resolución por parte del respectivo CAIS, será responsabilidad de la jefatura del Centro verificar la correspondencia entre la residencia contenida en la resolución de libertad condicional, para la persona y la jurisdicción territorial del Centro. En caso que no exista correspondencia, la jefatura deberá derivar la resolución al CAIS asociado al domicilio fijado en dicho documento e informar a la persona en libertad condicional el CAIS al que le corresponde asistir para iniciar el cumplimiento del beneficio. Un(a) funcionario(a) administrativo(a) —o quien la Jefatura designe— consignará su asistencia dentro de los plazos legales establecidos en el sistema de registro de la información convenido para libertad condicional.

La persona en libertad condicional dispondrá de un plazo máximo de 5 días corridos, contados desde su fecha de egreso del establecimiento penitenciario del subsistema cerrado donde se encontraba cumpliendo su condena, para presentarse en el CAIS.

Presentación de la persona beneficiaria al Centro

Una vez que concurra la persona al CAIS que le corresponda, un/a funcionario/a designado procederá a:

- Realizar su registro administrativo, consistente en consignar sus antecedentes sociodemográficos, judiciales y otros pertinentes, en el sistema de registro de la información convenido para la libertad condicional, de tal manera de formalizar su ingreso al centro de control.

b) Levantar información respecto a la presencia de necesidades urgentes, entendiéndose por tal, alguna enfermedad u otro problema de salud de carácter agudo, no contar con un lugar de residencia inmediato, no disponer de una cédula de identidad vigente, etc. Esta pesquisa y su resolución serán efectuados de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Departamento Postpenitenciario.

c) Entregarle una citación, a efectos de que la persona concurra en un plazo máximo de 3 días hábiles contados desde su fecha de presentación, a una reunión de ingreso con la jefatura del CAIS o con quien ésta designe.

d) Entregarle una cartilla relativa a los Derechos y Deberes de las personas mientras cumplen su condena con el beneficio de libertad condicional.

En caso que la persona se presente en el CAIS a dar cumplimiento al beneficio no habiéndose recibido aún la resolución que lo concede, el(la) funcionario(a) administrativo(a) deberá tomar contacto inmediato con la unidad penal de origen de la persona condenada – de acuerdo a lo informado por ésta- y gestionar el envío inmediato de la resolución. Sin perjuicio de aquello, deberá igualmente realizar el ingreso administrativo de la persona, detallado con anterioridad. En caso que desde la unidad penal de origen esta resolución se hubiese enviado a un CAIS distinto, será el(la) funcionario(a) administrativo(a) quien deberá verificar telefónicamente con aquel CAIS el lugar de cumplimiento efectivo del beneficio, de acuerdo a lo indicado en la respectiva resolución o la residencia fijada, luego de lo cual se traspasará el caso ingresado, si corresponde.

En caso de no concurrir la persona en libertad condicional dentro del plazo indicado

En caso de no presentarse la persona dentro de los 5 días corridos desde la fecha de su liberación del establecimiento penitenciario del subsistema cerrado, el Consejo Técnico respectivo, a través de la jefatura del CAIS, informará su no presentación a la Comisión de Libertad Condicional correspondiente dentro del plazo de 3 días hábiles, para que ésta se pronuncie dentro del plazo de 15 días hábiles respecto de la continuidad o revocación de beneficio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del Decreto Ley, letra a) del respectivo Reglamento. Si transcurrido ese plazo no se ha recibido una respuesta de la Comisión, deberá reiterarse la comunicación lo necesario para obtener un pronunciamiento.

En caso que la persona se presente en el CAIS con posterioridad al envío de dicha comunicación de no presentación, pero antes de la recepción del pronunciamiento de la Comisión de Libertad Condicional, un(a) funcionario(a) asignado(a) deberá informarle que su no presentación en los plazos establecidos fue debidamente informada a la respectiva Comisión de Libertad Condicional y que la Comisión aún no se pronuncia respecto al hecho, por lo que se oficiará su presentación extemporánea.

Posteriormente, procederá a realizar el ingreso administrativo en el sistema de registro de la información convenido para la libertad condicional, entregando la cartilla informativa y la citación a la reunión de ingreso con la jefatura, advirtiéndole a la persona que se estará a la espera de la respuesta por parte de la Comisión, pero que deberá continuarse con la supervisión hasta que se reciba el pronunciamiento.

A continuación, y en un plazo máximo de 24 horas hábiles, se deberá informar a la Comisión de la presentación extemporánea de la persona beneficiada con libertad condicional, indicando las razones -y adjuntando los verificadores en caso de disponibilidad- expuestas por la persona como justificación de su presentación fuera de plazo.

Se procederá de acuerdo al pronunciamiento de la Comisión respectiva, esto es, continuando con el beneficio en los términos establecidos de manera general, o egresando a la persona por revocación, de acuerdo al procedimiento establecido para ese efecto.

1.2 Reunión de Ingreso

Habiendo sido realizado el correspondiente ingreso administrativo y habiéndosele entregado en igual oportunidad la citación correspondiente, la persona en libertad condicional deberá

presentarse en la fecha y horario allí establecidos para participar de la reunión de ingreso. Esta reunión será presidida por la jefatura del CAIS y contará con la participación de los Delegados de Libertad Condicional que sean requeridos. Podrá efectuarse en modalidad individual o grupal, siendo algunos de los objetivos esenciales de esta reunión los siguientes:

- Promover la motivación y adherencia a la supervisión, comprendida como la participación en las actividades de supervisión, necesarias para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de supervisión, y la evitación del incumplimiento de las condiciones establecidas en el Plan de Intervención Individual.
- Designar y presentar al(la) Delegado(a) de Libertad Condicional asignado(a) para efectuar la supervisión del beneficio.
- Informar a las personas en libertad condicional acerca de las obligaciones que impone el cumplimiento de su pena en libertad condicional, al tiempo que acoger y responder sus dudas.
- Presentar al(la) beneficiario(a) los marcos normativos que regulan la supervisión de la libertad condicional.
- Informar de la duración de la libertad condicional, considerando la fecha original de cumplimiento de condena de cada participante de la reunión y del beneficio establecido en el artículo 8° del Decreto Ley.
- Informar de las condiciones generales de cumplimiento e incumplimiento relacionados con la supervisión del beneficio y específicamente de las actividades contenidas en el Plan de Intervención Individual a desarrollar.

Respecto al desarrollo de esta reunión en modalidad grupal, es necesario prever por parte del(la) funcionario(a) responsable de su implementación, que el lugar físico donde se realice y el número de participantes convocados no impida u obstaculice el cumplimiento de los objetivos indicados en el punto anterior.

Es importante que esta actividad se desarrolle desde un enfoque colaborativo entre la jefatura de CAIS y el(los/as) Delegados(as) que eventualmente participen, quienes podrán estar presentes desde el inicio de la actividad o integrarse en el momento que la jefatura lo determine. En esta instancia será necesario explicar el proceso de supervisión y las ventajas de transitar por un proceso de estas características, enfatizando los aspectos motivacionales que favorezcan la adherencia y la comprensión del cumplimiento de las actividades (asistencia a entrevistas, participación en intervención grupal, involucramiento en oferta programática de la red intersectorial, etc.).

A fin de cumplir con el objetivo de promover la adherencia al proceso de supervisión, se sugiere utilizar el enfoque motivacional y mantener expectativas positivas respecto del desenvolvimiento de la persona durante la libertad condicional, entendiendo que las resistencias son probables durante las primeras etapas de la supervisión.

Esta reunión se consignará en el sistema de registro de la información convenido para libertad condicional, donde el(la) Delegado(a) de Libertad Condicional deberá detallar la fecha de su realización, asistentes, aspectos revisados, eventuales acuerdos entre las partes, tareas y/o documentos pendientes y próxima fecha de entrevista con el(la) Delegado/a

Por último, será responsabilidad de cada jefatura de CAIS organizar las actividades de sus funcionarios(as), a fin de coordinar de manera eficiente la realización de las reuniones de ingreso dentro de los plazos establecidos para estos fines.

Designación y presentación del(a) Delegado(a) de Libertad Condicional

Será responsabilidad de la jefatura del CAIS, al momento de la reunión de ingreso, designar y presentar al(la) Delegado(a) de Libertad Condicional a cargo de la supervisión de cada

persona en Libertad Condicional, decisión que deberá considerar criterios técnicos y administrativos, entre los que destacan:

- La carga laboral del(la) Delegado(a) de Libertad Condicional, que se establecerá considerando la articulación entre la extensión de la jornada laboral del(a) profesional (habitualmente jornada completa ordinaria) y el desarrollo de la multiplicidad de tareas y requerimientos asociados al cargo.
- El total de personas vigentes en la cartera de casos del(a) profesional al momento de la nueva asignación, atendiendo los lineamientos vigentes respecto del número máximo de casos sugeridos a supervisar por un(a) profesional (razón: profesional / número de casos).
- El número de personas vigentes en libertad condicional de la cartera de casos del(a) profesional que se encuentren en las fases de evaluación y elaboración del plan de intervención individual, en consideración de las acciones que demandan estas etapas.
- La frecuencia mínima de atención requerida para los casos vigentes en la cartera de casos del(a) profesional al momento de la nueva asignación.
- El número de programas de intervención que tenga a cargo el(a) profesional al momento de la nueva asignación.

No presentación del(la) beneficiario(a) a la reunión de ingreso

En caso que la persona en libertad condicional no se presente a la reunión de ingreso, habiendo sido debidamente citada, el(la) funcionario(a) designado(a) por la jefatura del CAIS deberá registrar esta falta en el expediente individual y en el sistema de registro de la información convenido para libertad condicional, contactar telefónicamente a la persona en un máximo de 24 horas posteriores y establecer de común acuerdo con ella una segunda fecha y hora para el desarrollo de la reunión de ingreso, que no debiera exceder el plazo máximo de 2 días hábiles; informándole que la ausencia a esta entrevista reprogramada será informada como un incumplimiento a la Comisión de Libertad Condicional correspondiente, de acuerdo al art. 25, letra a) del reglamento de la ley.

Si la persona beneficiada no puede ser contactada en el número telefónico que informara en el ingreso administrativo y después de una cantidad razonable de intentos de contacto, un(a) funcionario(a) deberá contactar telefónicamente al referente significativo identificado por la persona y notificarlo(a) de la nueva fecha y hora de la reunión de ingreso. En esta comunicación deberá informarle que, de producirse una segunda inasistencia, ésta será notificada como un incumplimiento del beneficio a la Comisión de Libertad Condicional.

En cualquiera de los casos, si la persona no acude a la segunda citación para efectuar la reunión de ingreso, el Consejo Técnico, a través de la jefatura del CAIS, deberá informar el incumplimiento a la Comisión de Libertad Condicional correspondiente, en un plazo de dos días hábiles.

En caso que la persona en libertad condicional se presente a la reunión de ingreso con posterioridad al envío de la comunicación del incumplimiento, se le informará que su no presentación en los plazos establecidos fue debidamente informada a la respectiva Comisión de Libertad Condicional y que la misma aún no se pronuncia respecto al hecho, por lo que se oficiará su presentación extemporánea una vez que se realice dicha reunión. Luego, se agendará la reunión de ingreso pendiente en un plazo máximo de 48 horas hábiles.

A continuación, y en un plazo máximo de 24 horas después de haber efectuado la reunión de ingreso, el Consejo Técnico, a través de la jefatura del CAIS o quien ésta designe, deberá informar a la Comisión de la presentación extemporánea de la persona beneficiada con libertad condicional a la reunión de ingreso, indicando las razones -y adjuntando los verificadores en caso de disponibilidad- expuestas por la persona como justificación de su asistencia fuera de plazo.

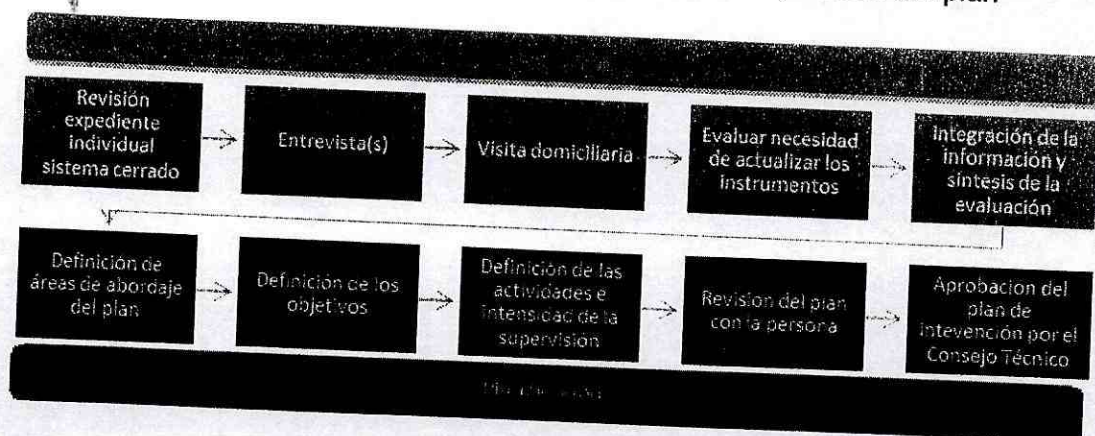
Se procederá de acuerdo con el pronunciamiento de la Comisión respectiva, esto es, continuando con el beneficio en los términos establecidos de manera general, o egresando a la persona por revocación, de acuerdo al procedimiento establecido para ese efecto.

2. Fase de evaluación y diseño del plan

La fase evaluación y diseño del plan corresponde al proceso mediante el cual se identifican, comprenden e integran los factores de riesgo de reincidencia, factores protectores y recursos para la reinserción social, con la finalidad de analizar y establecer cuáles de ellos representan necesidades que requieren ser abordadas y, por tanto, formarán parte del plan de intervención individual.

Esta fase se compone de dos grandes acciones: (1) de un proceso de evaluación que concluye con una síntesis de esta evaluación; y (2) de un proceso de planificación que termina con la elaboración y aprobación del plan de intervención individual; todo lo cual deberá efectuarse dentro los primeros 45 días hábiles luego de haber sido asignado el caso al Delegado(a).

Figura 3: Principales actividades de la fase de evaluación y diseño del plan



Fuente: Elaboración propia.

2.1. Proceso de evaluación

El proceso de evaluación debe entenderse como una actividad estructurada que, desde una visión integral de la persona, se oriente a la recopilación, análisis e integración de información proveniente de diferentes fuentes, para la identificación y comprensión de los factores de riesgo, factores protectores y recursos de la persona, considerando para ello todas aquellas circunstancias personales, sociales y comunitarias que pudieran incidir en su proceso de reinserción social.

Este proceso se traduce en una actualización de la información contenida en el informe de postulación psicosocial de la persona en libertad condicional y en el expediente individual remitido por la unidad penal del subsistema cerrado del cual egresó la persona. El objetivo será determinar la vigencia de los factores de riesgo, protectores y recursos identificados al momento de la postulación. Para ello, es fundamental el acceso a la mayor cantidad de información disponible de la persona por parte del(la) Delegado(a), tanto respecto a los antecedentes provenientes desde el subsistema cerrado, como a los que pueda obtener durante las entrevistas con la persona beneficiaria y con terceras personas que puedan aportar con información.

En ese sentido, se espera que el proceso de actualización permita identificar eventuales cambios en las áreas que fueron evaluadas para la postulación a la libertad condicional, pero que a la vez considere la necesaria contextualización de las condiciones evaluadas, en virtud de su incorporación al medio libre. Será, por tanto, necesario identificar la incidencia que los factores de riesgo y protectores evaluados tienen en este nuevo contexto, específicamente respecto a las probabilidades de reincidencia, las necesidades que deberán

ser abordadas durante el periodo de supervisión y los recursos personales, familiares y/o sociales que pueden apoyar este proceso.

Para el levantamiento y análisis de la información contempladas en esta fase, el(la) Delegado(a) de Libertad Condicional deberá realizar las siguientes actividades:

2.1.1. Revisión del expediente de egreso

La revisión del expediente individual de las personas beneficiadas con libertad condicional permitirá al(la) Delegado(a) conocer antecedentes asociados a las características y resultados de las actividades realizadas como parte del proceso de reinserción durante el cumplimiento de su condena en el subsistema cerrado, facilitando la continuidad de la supervisión.

Sin perjuicio de que, en general, cada uno de los documentos integrados a este expediente podría contribuir a la evaluación de la persona en libertad condicional, el(la) Delegado(a) debe enfatizar la revisión de aquellos antecedentes que aporten a una evaluación más precisa de la persona para lo cual se considerará, al menos, la revisión de los siguientes documentos:

- Informe de postulación psicosocial al beneficio de libertad condicional.
- Copia de sentencia, en la medida que establece la existencia y características de la(s) conductas sancionadas en la condena, aportando antecedentes relativos a la dinámica delictiva.
- Copia de los instrumentos de evaluación aplicados, especialmente el Inventario para la Gestión de Caso/Intervención (IGI) y Plan(es) de Intervención Individual(es) elaborados durante el cumplimiento de condena.
- Informes de la participación del(la) condenado(a) en programas especializados de intervención, identificando el estado de cumplimiento al momento del egreso (finalizado, en proceso, etc.).
- Informes de participación de la persona en actividades laborales, escolares, deportivas, recreativas, artísticas, culturales, de promoción de la parentalidad y otros.
- Informes de postulación a beneficios intrapenitenciarios y/o de traslado a Centro de Estudio y Trabajo.
- Otros informes elaborados durante el cumplimiento de condena.
- Especial consideración deberá tenerse en verificar la existencia de antecedentes respecto de aquellos casos que, por la tipología delictiva y/o definiciones técnico-administrativas, deben contar con evaluaciones especializadas (por ejemplo, diagnóstico de psicopatía, evaluación de la conducta sexual en caso de ofensores sexuales, etc.).

El(la) Delegado deberá verificar que la unidad penal de origen de la persona en libertad condicional haya remitido debidamente al CAIS la carpeta o expediente de la persona condenada, dando cuenta de los avances en su proceso de reinserción social durante la pena privativa de libertad. Dicho envío deberá producirse dentro de los cinco (5) días posteriores al egreso de la persona desde la unidad penal. En caso de que el CAIS no reciba el expediente dentro de este plazo, la jefatura deberá solicitarlo por correo electrónico a la respectiva Dirección Regional, sin perjuicio de comunicárselo conjuntamente a la jefatura de la unidad penal de egreso, debiendo gestionar su envío dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al cumplimiento del plazo indicado inicialmente.

2.1.2. Entrevista(s) individual(es) y áreas de evaluación

La entrevista, entendida como un medio de recolección de información que permite la aproximación del(la) evaluador/a a las creencias, esquemas, significados y experiencias del(la) entrevistado(a), se ubica como la acción fundamental en el proceso de evaluación de la persona en libertad condicional.

El carácter semiestructurado de esta actividad le otorga la flexibilidad necesaria, que posibilita la exploración de elementos biográficos y actitudinales de interés al contexto y objetivo de la evaluación, a través de preguntas abiertas asociadas a un listado de áreas de desenvolvimiento general que deben explorarse con la persona beneficiada y que difícilmente podrían recogerse de otra manera. Además del levantamiento de información sobre estas áreas, la(s) entrevista(s), en este momento de la supervisión en libertad condicional, también tiene como objetivo ir abordando la alianza de trabajo, el aumento de la motivación inicial y la adherencia a la norma, entre otros.

Para ello, es importante que durante la(s) entrevista(s), el(la) Delegado(a) utilice estrategias motivacionales que movilicen la necesidad de introducir cambios en el estilo de vida de la persona, y desde ahí, pueda mostrar una apertura a participar de un proceso de supervisión. Para esto, es importante indagar cuál es la disposición a la supervisión que manifiesta la persona ante las posibles acciones contempladas en este proceso, diferenciando si esta disposición está más vinculada a cumplir con las condiciones formales de la libertad condicional, o, por el contrario, es posible identificar una motivación por generar cambios en algún área de desenvolvimiento, aun cuando ésta sea muy incipiente.

El(la) Delegado(a) deberá realizar la cantidad de entrevistas necesarias que le permitan alcanzar los objetivos del proceso de evaluación, en orden a actualizar la información revisada en la evaluación efectuada por el sistema cerrado al momento de la postulación de la persona a la libertad condicional, a fin de disponer de los antecedentes suficientes para elaborar el plan de intervención individual. Será responsabilidad del(la) Delegado(a) planificar este proceso, evitando que las actividades contempladas excedan el cumplimiento de los plazos establecidos de 45 días hábiles desde que el caso le fue asignado, para concluir con esta fase.

Es esencial una adecuada preparación del(la) Delegado(a) frente a cada entrevista, para lo cual deberá haber identificado la información relevante contenida en el informe de postulación psicosocial y expediente de egreso de la persona, con la finalidad de orientar la entrevista a identificar y/o actualizar la evaluación realizada para la postulación al beneficio, y complementar aquellos elementos que no han sido explorados y/o que requieren de mayores antecedentes, para proponer un plan de intervención en las siguientes áreas:

- **Factores de riesgo de reincidencia general**

La evaluación de los factores de riesgo de reincidencia busca identificar aquellas necesidades que resultan susceptibles de intervención, para orientar la definición de objetivo(s) y focos de supervisión durante el periodo de cumplimiento de la libertad condicional. A partir de lo consignado en este informe de postulación psicosocial, el(la) Delegado(a) deberá evaluar si las condiciones y/o consideraciones técnicas vertidas sobre el desenvolvimiento de la persona en las siguientes áreas se mantienen o necesitan ser actualizadas:

- **Historial delictual:** consiste en identificar la trayectoria delictiva de la persona, que, al consistir en un factor estático, puede evaluarse a partir de la revisión del expediente y lo desarrollado en el informe de postulación psicosocial de la persona, triangulando o corroborando la información a través de la entrevista.

- **Patrón antisocial:** consiste en indagar sobre un estilo de funcionamiento en que predomina la impulsividad, la búsqueda de sensaciones en situaciones de riesgo, bajo autocontrol o irreflexibilidad en la toma de decisiones, comportamiento agresivo e irritable, que expone a la persona a situaciones que pueden representar un potencial riesgo de reincidir y que, eventualmente, requerirán de estrategias de control más intensivas.

- **Actitudes procriminales:** consiste en indagar en torno a las creencias, actitudes, valores y racionalizaciones que apoyan un estilo de vida delictual y que expresan actitudes negativas hacia las leyes y normas sociales.
- **Soportes sociales para el delito:** refiere a la presencia de amistades infractoras de ley, y al aislamiento de pares prosociales, a la valoración que les otorga a estas vinculaciones para mantenerse fuera o dentro de un estilo de vida delictivo. Considerando que, al momento de esta evaluación, la persona se encontrará en el medio libre, es importante indagar sobre los soportes sociales que están presentes en su entorno próximo.
- **Relaciones conflictivas la pareja/familia:** indagar en torno a la calidad de las relaciones familiares, la existencia de conflictos, violencias, conductas vinculadas con el delito. Este aspecto suele de ser de suma importancia en este periodo, debido al estrés familiar que podría provocarse luego de la liberación de la persona y los ajustes familiares que ello puede implicar en la convivencia familiar o de pareja. En su polo opuesto, también es importante identificar en qué manera la pareja o familia pueden apoyar el proceso de reinserción y alejamiento del delito.
- **Consumo de drogas y alcohol:** corresponde la indagación sobre un historial de consumo de drogas o alcohol que haya sido problemático para la persona, o bien, sobre la existencia de un consumo actual que también lo sea. Es importante, que en caso de pesquisar que este factor representa un área problemática, se indague sobre la existencia de evaluaciones especializadas para establecer el grado de consumo, si ha participado de algún tratamiento y/o de la necesidad de iniciar uno.
- **Educación:** se centra en indagar el nivel educacional alcanzado, su desempeño académico y posibles dificultades de aprendizaje, relación con sus pares y profesores y los niveles de satisfacción. También es importante pesquisar sobre el interés de proseguir con sus estudios y los ámbitos de interés, junto con revisar las necesidades de educación escolar, a objeto de evaluar la pertinencia de inscripción en programas de estudios que le permitirán acceder a diferentes prestaciones en la materia, ya sea Programas de Alfabetización, Cursos de Validación de Estudios o Cursos de Nivelación de estudios, según corresponda.
- **Empleo:** consiste en indagar sobre la trayectoria laboral, el desempeño, la estabilidad, niveles de satisfacción laboral, áreas de interés para fomentar sus habilidades de empleabilidad y tipo de capacitaciones recibidas. Una evaluación más detallada de las habilidades y competencias para desempeñar un determinado empleo o capacitación escapa de la evaluación de esta área como un factor de riesgo y se incorporan generalmente como parte de los programas.
- **Uso del tiempo libre:** como factor de riesgo debe identificarse la falta de participación en actividades recreativas prosociales, pero también es importante indagar el tipo de actividades que son de su interés o en las que ocupa su tiempo libre y la valoración que les otorga.

En esta población, y al tratarse de personas que probablemente han participado de una oferta programática durante su cumplimiento en el subsistema cerrado, la evaluación de los factores de riesgo buscará dar continuidad al plan de intervención iniciado durante su privación de libertad, por lo que al momento de evaluar estas áreas es importante analizar los resultados y orientaciones establecidos tanto en los informes del expediente individual como en el informe de postulación psicosocial. Esta información debe analizarse a partir de las condiciones contextuales y sociocomunitarias, ahora que la persona se encuentra en libertad, para establecer su impacto en el desarrollo de las actividades del plan de intervención al momento de la evaluación.

• Factores protectores

Cada uno de los factores generales de riesgo de reincidencia recién mencionados puede ser considerado como un factor protector, cuando se presente como una característica personal que puede ayudar a disminuir el riesgo de reincidencia. La identificación de estos factores también es un aspecto incorporado en el informe de postulación psicosocial, no obstante, es importante que el/la Delegado/a pueda evaluar de qué manera puede constituirse

6x

actualmente en un atributo social, interpersonal y/o ambiental, así como psicológico y/o conductual que, en términos funcionales, sea más que la ausencia de un factor de riesgo de reincidencia (Vries Robbé, Mann, Maruna y Thornton, 2015). Una manera de evaluar si un determinado factor puede considerarse como protector es siguiendo los lineamientos desarrollados por Andrews et al. (2012), quienes mencionan que un factor protector no sólo indica que el desenvolvimiento de la persona en esta área da cuenta de un nivel de riesgo bajo o muy bajo, sino también que las circunstancias o el nivel de funcionamiento es tan positiva que puede reducir la influencia de los factores de riesgo que están presentes.

La identificación de los factores protectores ciertamente apoya la precisión de las evaluaciones al ofrecer una mirada integral de la persona, a la vez que permite orientar el diseño del plan, al entregar información para ponderar con mayor claridad las necesidades de intervención. Por lo tanto, en el caso de las personas en libertad condicional, los factores protectores permitirán ampliar el conocimiento respecto de la persona, a la vez que promueven una visión positiva del cambio que puede reforzar la alianza de trabajo entre la persona y el(la) profesional, siendo una importante variable que a menudo se ha pasado por alto en relación con el resultado de las intervenciones (Marshall et al., 2003, en Dickson, Willis y Mather, 2018).

- **Recursos personales y familiares**

Además de los factores protectores, las personas cuentan con recursos, entendidos como capacidades, saberes, experiencias y habilidades, que permiten alcanzar logros y facilitar los procesos de cambios esperados, en la medida que representan capitales susceptibles de utilizarse y, más aún, incrementarse en la medida que son puestos en acción.

Estos recursos pueden estar a nivel personal, familiar y social pudiendo ser visibilizados a lo largo del proceso de evaluación, al identificar desde la perspectiva de la persona logros en su historia vital, eficiencia y eficacia en sus relaciones interpersonales y en el cumplimiento de objetivos en procesos de intervención previos. A diferencia de los factores protectores, que desempeñan un rol central en la evaluación del riesgo de reincidencia, los recursos son fundamentales como palancas de cambio que pueden ayudar a remover las barreras, apoyar el cambio deseado y fomentar la mantención de los logros.

- **Recursos personales:** A nivel personal, incluye las habilidades, capacidades y los aprendizajes obtenidos de experiencias previas y utilizarlos a su favor para la consecución de los planes, en este caso, referidos con un desenvolvimiento prosocial en la comunidad. También, consiste en identificar las motivaciones e intereses que las personas manifiestan para su futuro. Estos elementos representan un importante movilizador cuando se vinculan con las metas que las personas se proponen alcanzar, al activar su disposición por realizar acciones para el logro de éstas, lo que, a su vez, refuerza su sentido de autoeficacia. Por lo tanto, las metas, proyecciones y planes que tienen las personas y la manera en que pueden convertirse en soportes para el proceso de reinserción, en este caso, durante la supervisión en el medio libre, son un elemento central que considerar en la planificación.
- **Recursos familiares:** Considerando que las relaciones familiares tienen incidencia en el desarrollo de las conductas prosociales y, por tanto, en la integración social de la persona en libertad condicional, se hace necesario conocer la cualidad de dichas relaciones, identificando los elementos de la dinámica familiar o los(as) miembros que puedan sostener los procesos de cambios. La presencia de recursos familiares que ejerzan una influencia positiva, ya sea mediante el modelamiento de conductas como a través de acciones de control social, deben ser identificados por el(la) Delegado(a) como parte del proceso de evaluación inicial. Lo anterior, permitirá contar con recursos susceptibles de integrar al plan de intervención, pudiendo incorporarlos como sujetos que aporten a sostener la motivación y adherencia, así como de refuerzo en el logro de resultados. Para ello, dentro del proceso de evaluación, deberá identificarse si la persona en libertad condicional refiere contar con recursos familiares que puedan apoyar este proceso, considerando criterios como su permanencia en la historia vital, la capacidad de contener o apoyar el cambio de conductas antisociales, afectividad y compromiso que tengan o manifiesten respecto del proceso que inicia la persona y la valoración de los logros

prosociales que esta tenga y pueda alcanzar. En este sentido, es necesario que dicha persona se constituya en una figura coherente y consistente para el proceso, por lo que deberá despejarse que no presente o promueva la actividad antisocial actualmente.

Tanto la identificación y evaluación de la presencia de los recursos personales como familiares, podrían constituirse como palancas de cambios y aumentar la adherencia y motivación de la persona en libertad condicional al proceso de supervisión. El diseño de actividades dentro del futuro plan deberá considerar a los recursos personales y al apoyo familiar, lo que contribuye a la reducción de la resistencia al cambio, haciéndolas significativas para la persona y apoyándose en el control familiar, incrementando, en suma, la capacidad de respuesta a la intervención.

- **Evaluación de las necesidades de apoyo a la integración social**

El(la) Delegado(a) deberá complementar la evaluación de los factores de riesgo, factores protectores y recursos, con la identificación de otras condiciones pueden impactar en el proceso de reinserción, considerando que se trata de personas que acaban de salir de un período de encarcelamiento. El tránsito a la comunidad de las personas beneficiadas con la libertad condicional requiere evaluar si hay ciertas necesidades de carácter urgente que deban ser resueltas en forma inmediata, o bien, otras de más largo plazo, que podrán ser abordadas como parte de las actividades a realizar durante el periodo de supervisión, en las siguientes áreas:

- **Vivienda:** es necesario evaluar si la persona cuenta con un lugar donde hospedarse, y en caso contrario, considerar la necesidad de apoyarlo en la obtención de una vivienda que le entregue la estabilidad requerida para proseguir con su proceso de reinserción en el medio libre. En caso de detectar que la persona no cuenta con un lugar donde pernoctar, el(la) DLC le informará inmediatamente acerca de las alternativas locales de alojamiento, tales como albergues gratuitos o de pago, para lo cual contará con un catálogo de opciones y alianzas locales.
- **Salud:** tratándose de un derecho fundamental, el(la) DLC explorará las necesidades de atención que presenten las personas en libertad condicional, ya sea en términos de continuidad de tratamientos iniciados en su unidad penal de origen, como de otras necesidades de atención en salud que presente la persona. En caso que el(la) DLC detecte una necesidad urgente en esta área, es decir, que la persona necesita una atención especial de salud inmediata, se coordinará con el encargado de redes del Centro para gestionar su derivación al Centro de Salud más cercano a su domicilio, en forma oportuna.
- **Asistencia socio-jurídica:** consiste en identificar si la persona en libertad condicional presenta algún requerimiento en materia judicial que deba ser atendido. Por ejemplo, en lo relativo a pensiones de alimentos, divorcio, posesiones efectivas, etc., de forma incorporar esta área dentro de las gestiones a realizar durante el proceso de supervisión. Adicionalmente, identificará si la persona presenta necesidades de orientación respecto a las gestiones necesarias para acceder a beneficios del Estado, por ejemplo, obtención de clave única, certificados, registro social de hogares, etc., todo lo cual deberá incorporarse como actividades a realizar durante la supervisión en el plan de intervención. En caso que la persona en libertad condicional, especialmente si es mujer, se encuentre en una situación en que es o podría ser víctima de violencia intrafamiliar, se coordinará inmediatamente con el encargado de redes del Centro para orientarla y derivarla a un Centro de la Mujer u otro similar.
- **Evaluación de las expectativas de la persona sobre su cumplimiento en libertad condicional**

En el proceso de evaluación, y para tener una aproximación a la disposición que tendrá la persona a cumplir con las condiciones de la libertad condicional, es fundamental considerar las expectativas que manifiesta sobre este proceso, así como lo que espera de la supervisión. Por otro lado, la evaluación de las expectativas se vincula con la identificación

de recursos personales, especialmente con los intereses y motivaciones, en el sentido de que éstas también pueden dar cuenta de las inquietudes o deseos que generan atracción en la persona hacia ciertas actividades o metas.

Considerando lo anterior, es importante que el/la Delegado/a consulte explícitamente sobre las expectativas que tiene la persona respecto a lo que espera alcanzar en el período que dure la supervisión y que su consecución sea parte del plan de intervención, en caso de ser pertinente. Estos elementos tienen el potencial de integrarse como factor de motivación y adherencia, en la medida que fomenten el carácter prosocial de las actividades, aportando además a disminuir las resistencias al cambio que pueda presentar en otras áreas que no sean identificadas como problemáticas por la persona.

Para ello, es importante que el/la Delegado/a ayude y oriente a la persona en libertad condicional para alcanzar las expectativas del proceso de supervisión. Por ejemplo, en relación a la estructuración de rutinas diarias para participar de actividades de ocio o realizar una actividad laboral. La resolución de estas expectativas debe considerar la viabilidad de alcanzarlas dentro del tiempo disponible para ello, cautelando no generar expectativas de algo que no se podrá concretar.

2.1.3. Entrevista con referente significativo

El referente significativo corresponde a cualquier persona mayor de edad, familiar o no, que muestre interés por involucrarse en el proceso de supervisión de la persona beneficiada con libertad condicional. Se espera que el referente significativo disponga de características y antecedentes que puedan promover conductas prosociales, que sea contrario a la actividad delictual y que pueda apoyar los procesos de cambio que inicie la persona.

La entrevista a esta persona se orienta a contrastar y complementar la información recabada durante las entrevistas desarrolladas con la persona en libertad condicional, contribuyendo y aportando al análisis de la información levantada durante el proceso de evaluación. Es obligación del(la) DLC mantener el resguardo de la información sensible de la persona condenada, por lo que deberá obtener de ésta la autorización para el contacto con el(la) referente significativo. Para dicha entrevista, deberá explicar al contacto familiar o persona cercana el objetivo de ella, evitando exponer innecesariamente a la persona en libertad condicional respecto de su situación actual.

Promover una adecuada alianza de trabajo con el(la) referente significativo puede resultar beneficioso para el proceso de supervisión de la persona en libertad condicional, ya que puede reforzar las actividades que serán acordadas como parte del plan, lo que ayudará el mantenimiento de conductas favorables al proceso de reinserción social y/o el control social de conductas de riesgo identificadas en el proceso de evaluación. El(la) Delegado(a), partir del análisis de los antecedentes disponibles y, especialmente, a partir de la(s) entrevista(s) a la persona en libertad condicional, deberá determinar quién será la persona a entrevistar, citándola al Centro o acudiendo a su domicilio, si así lo acuerdan.

2.1.4. Visita domiciliaria

Esta acción debe realizarse según su relevancia para el proceso de evaluación, considerando el tiempo que puede implicar el desplazamiento al domicilio de la persona, así como los recursos disponibles para ello; por lo que su carácter es opcional o complementario a las otras acciones para levantar información que estén disponibles.

No obstante, la visita domiciliaria es altamente deseable, pues permitirá al(la) Delegado(a) conocer el lugar de residencia informado por la persona beneficiada, en términos de sus condiciones de habitabilidad, además de conocer al grupo familiar o de cohabitación, y el tipo y calidad de las posibles relaciones interpersonales articuladas al interior de la vivienda, entre otros objetivos que pueda tener, lo que puede ser especialmente relevante para ciertos delitos, como los de índole sexual o de violencia intrafamiliar.

En relación con las condiciones de habitabilidad, es importante indagar sobre los factores de tipo físico-espacial y sociocomunitarios, destacando aquellos elementos que podrían impactar tanto en los factores de riesgo y/o condiciones de responsividad o adherencia a la supervisión. Ejemplos de ello, zonas de tráfico de drogas cercanos al domicilio, sectores con

alta tasa de criminalización, hacinamiento, condiciones sanitarias y de higiene, grado de accesibilidad y disponibilidad de transporte público, presencia o no de grupos sociocomunitarios de orientación prosocial y otros.

Por otra parte, la visita domiciliaria permitirá al(la) Delegado(a) aproximarse a la situación socioeconómica de la persona y su grupo familiar, evaluando la posibilidad de coordinar la derivación a programas asistenciales o a redes de apoyo comunitarias que corresponda, junto con indagar en el origen y regularidad de los ingresos económicos de los miembros del grupo y su grado de legalidad y formalidad. El levantamiento de información sobre la situación socioeconómica también podrá efectuarse a través de la entrevista a la persona o al referente significativo y esta visita más bien permitiría corroborar dicha información.

Por último, durante la visita domiciliaria es importante indagar si la persona y su grupo familiar se relacionan con otros sistemas sociocomunitarios, tales como grupos sociales, organizaciones vecinales, grupos religiosos, clubes e instituciones comunitarias públicas y privadas, entre otros, identificando recursos y potenciales conflictos que podrían impactar en la supervisión de la libertad condicional. De este modo, la visita domiciliaria no debe entenderse como una instancia destinada estrictamente a conocer el hogar de la persona, sino como una oportunidad para indagar otros ámbitos relevantes para la evaluación y supervisión de la persona en libertad condicional.

Excepcionalmente, la visita domiciliaria podría reemplazarse o complementarse con una visita en terreno, coordinada con la persona, a otros espacios, como su lugar de trabajo u otros en los que se desenvuelva. En estos casos, durante la visita y según el perfil de la persona, será importante evaluar posibles escenarios de riesgo, por ejemplo, asiduidad a lugares con cercanía de niños(as) por parte de personas condenadas por abusos sexuales a menores de edad, frecuentar lugares con presencia de pares criminógenos, entre otros.

2.1.5. Consideraciones técnicas para la evaluación de situaciones especiales

En algunas situaciones, el proceso de evaluación deberá considerar la evaluación de condiciones específicas vinculadas con el tipo de delito por el cual cumplen condena, como es el caso de las personas condenadas por un delito sexual o de violencia contra la pareja. En otros casos, será necesario efectuar una evaluación especializada para profundizar en algunas necesidades, como es el caso del consumo de alcohol y drogas, la conducta violenta o la presencia de un diagnóstico de psicopatía, en cuyos casos será necesario identificar la presencia de características específicamente vinculadas con estos comportamientos.

En el caso de proceso de evaluación de las personas condenadas por un delito sexual o de violencia contra la pareja, y/o que se observe la presencia de un diagnóstico de psicopatía será necesario considerar que no solo el proceso de evaluación será diferenciado, sino que las actividades del plan de intervención y el abordaje de la supervisión en general, podrá requerir el establecimiento de estrategias diferenciadas para el abordaje de situaciones que pueden representar un eventual riesgo de reincidencia. Estos delitos se vinculan con la presencia de características particulares que configuran un perfil delictivo que requiere un abordaje especializado, tanto por los factores de riesgo presentes como por la mayor latencia en la reincidencia que se ha observado, especialmente en aquellos casos de violencia sexual o extrema; siendo, además, de mayor impacto en cuanto a víctimas y daños asociados, por lo que el tipo de supervisión deberá ser consistente con la fenomenología de estos delitos. Igual que en el caso de la evaluación de los factores de riesgo general, factores protectores y recursos, la identificación de características diferenciadoras en los casos de delitos sexuales y de violencia contra la pareja, así como, la presencia de un diagnóstico de psicopatía y de evaluación de la conducta violenta, requerirá que antes de la entrevista se hayan revisado los antecedentes del expediente individual y del informe de postulación psicosocial.

Considerando que se trata de evaluaciones especializadas que requieren que los profesionales estén familiarizados con la identificación de este tipo de conductas y sobre las áreas más complejas en que se requiere obtener información, el(la) Delegado/a deberá ponderar la pertinencia de actualizar la evaluación, o bien, tomar en consideración la realizada al momento de la postulación al beneficio, si se realizó. Sin perjuicio de esto, y

más allá de las herramientas específicas de valoración de riesgo de reincidencia (RSVP, SARA, etc.), las principales áreas a evaluar son las siguientes:

- **Riesgo de conducta violenta**

El (la) Delegado(a) debe identificar los factores de riesgo que se vinculan con la manifestación de una conducta violenta, en personas que cuentan con antecedentes de violencia extrema o reiterada. La conducta violenta es entendida como el acto, intento o amenaza de infligir daño físico y/o psicológico grave a otra persona, cuyo delito índice involucre violencia grave, tales como homicidios, lesiones de consideración. Las principales áreas que evaluar son las siguientes:

- **Antecedentes de violencia previa:** consiste en identificar el patrón de conducta violenta, inicio y motivaciones.
- **Funcionamiento psicosocial y familiar:** evaluar el desenvolvimiento y la presencia de situaciones conflictivas en diversos aspectos: relaciones de pareja, problemas laborales y apoyo social. También se incluye una indagación sobre la existencia de desajustes conductuales en la infancia y la presencia de altos niveles de estrés.
- **Consumo de drogas y alcohol.**
- **Actitudes:** en este punto es importante indagar sobre la presencia de pensamientos negativos hacia terceros, racionalizaciones que justifiquen la violencia.
- **Impulsividad y baja capacidad reflexiva.**
- **Salud mental:** considera la necesidad de evaluar la presencia de un trastorno de la personalidad o mental, ideaciones suicidas, etc.

- **Riesgo de violencia sexual**

La evaluación de estos delitos siempre es compleja, ya sea por el tipo de conducta como por la disposición por revelar información sobre sí mismo y el delito que se observa en la persona. Es importante considerar que es altamente probable que la persona pueda sentirse fuertemente afectada por encontrarse en esta instancia, expresando ya sea molestia por la obligatoriedad de participar de una intervención, frustración por los problemas que esto le puede generar en el día a día y quejas o reclamos por las nuevas condiciones a las que deberá adaptarse (Herrero, 2018), especialmente con los requisitos de supervisión que impone la libertad condicional.

Ello implica que la aproximación profesional debe ser cautelosa, siendo, en ocasiones, beneficioso no explorar en una primera instancia en la conducta delictiva de violencia sexual, sino que partir por cuestiones neutras, como es la situación familiar y/o laboral, para luego ir progresivamente profundizando en aspectos más complejos de la historia vital y, por tanto, de la conducta antisocial. Por tanto, y teniendo presente las limitaciones de tiempo y recursos que puedan afectar el proceso, deberán realizarse las entrevistas que sean necesarias para obtener la mayor cantidad y variedad de antecedentes, priorizando la identificación de las áreas que son más complejas, para pesquisar con mayor precisión los factores de riesgo en las personas que cumplen condena por este tipo de delito:

- **Historial delictivo de violencia sexual:** al igual que en los delitos generales, consiste en indagar sobre el tipo de delito, cambios en la frecuencia o diversidad de la violencia sexual cometida, etc.
- **Actitudes:** se indaga respecto a la existencia de distorsiones cognitivas vinculadas con la minimización o negación de la conducta y aquellas que apoyan o justifican su comportamiento.
- **Adaptación psicosocial:** identificar la presencia de estresores al momento de la comisión del delito y/o que pudieran estar presentes en su entorno actualmente, antecedentes de victimización y/o experiencias de abuso.
- **Relaciones interpersonales:** considera relaciones problemáticas con la pareja, familia, dificultades para establecer relaciones cercanas, retraimiento, aislamiento social.
- **Intereses sexuales:** indagar sobre las preferencias sexuales, desviaciones, etc.
- **Salud mental:** considera la necesidad de evaluar la presencia de un trastorno de la personalidad o mental, ideaciones suicidas, etc.

Se recomienda que durante el proceso de evaluación se evite la confrontación frente a las distorsiones cognitivas y/o negación que pueda manifestar la persona para no afectar la

construcción del vínculo de trabajo inicial y la colaboración de la persona con el proceso. Finalmente, durante la entrevista es importante que el(la) Delegado(a) no se limite solo a identificar la presencia de determinados factores de riesgo de reincidencia, sino que puede comprender la manera en dichos factores han tenido relación con su conducta de violencia sexual a lo largo de su historia vital. Para esto, deberá tener presentes teorías comprensivas que subyacen a la evaluación de comportamiento.

- **Evaluación de riesgo de violencia contra la pareja**

La violencia ejercida en este contexto se entiende como cualquier intento, amenaza o violencia real perpetrada por un hombre o una mujer contra alguien con quien tiene, o ha tenido, una relación sentimental íntima. Para ello, el(la) Delegado(a) deberá identificar la presencia de los siguientes aspectos:

- **Antecedentes de conductas violentas hacia la pareja:** consiste en identificar el tipo de conducta violencia ejercida, inicio y motivaciones, así como el uso de mecanismo de coerción o amenazas.
- **Cualidad de la relación de pareja actual:** indagar sobre la existencia de problemas recientes con la pareja y los motivos.
- **Consumo de alcohol y drogas.**
- **Actitudes hacia la conducta violenta:** indagar sobre racionalizaciones para justificar su comportamiento, atribuciones de responsabilidad a terceros, validación de la agresión. También considera la identificación de ideas descalificadoras hacia la pareja, sentimientos de ira, rabia.
- **Adaptación psicosocial:** incluye la indagación en torno a problemas en el ámbito laboral y la presencia de estresores en la esfera social. También es importante evaluar si ha sido víctima o testigo de violencia en la familia a lo largo de su vida.
- **Salud mental:** considera la necesidad de evaluar la presencia de un trastorno de la personalidad o mental, ideaciones suicidas, etc.

Es importante profundizar en las distorsiones cognitivas que presentan, toda vez que son relevantes en la mantención de la conducta delictiva, en la medida que, fundamentalmente, aportan a sustentar la eximición de responsabilidad en los delitos mediante la racionalización de la conducta, minimizándola y, de manera muy extendida, externalizando la responsabilidad a terceros, muchas veces a la víctima.

- **Diagnóstico de psicopatía**

La evaluación de psicopatía hace referencia a la presencia de determinadas características que configuran el diagnóstico, según los criterios propuestos por Hare (2000):

- **En el ámbito interpersonales:** identificar si hay superficialidad en las relaciones, insensibilidad, arrogancia, necesidad de poder y control, para lo cual hacen uso de la manipulación para lograr sus objetivos.
- **Área afectiva:** irritabilidad, falta de sentimientos de culpa y de empatía.
- **Estilo de vida antisocial:** evaluar la presencia de comportamientos impulsivos, desinhibición de la conducta violenta y una tendencia a ignorar o violar las convenciones y normas sociales.

Estas áreas deben ser evaluadas por psicólogos/as capacitados y formados para aplicar la Escala de Evaluación de Psicopatía de Hare revisada (PCL-R) o en su versión screening (PCL-SV), que son las herramientas que permiten establecer el diagnóstico. Cabe tener especial consideración en integrar al proceso de evaluación el resultado de esta escala, que debería haber sido aplicada al momento de la postulación a todas las personas en libertad condicional condenadas por delitos sexuales y en aquellos cuya gravedad y uso de violencia supongan características criminógenas asociadas a la estructura de personalidad. De no contar con la aplicación de dicho instrumento, el Consejo Técnico deberá determinar la pertinencia de realizar una evaluación de psicopatía a la persona, considerando los criterios precedentemente señalados, cuyos resultados deberán ponderarse con la información levantada en las otras áreas de evaluación para elaborar el plan de intervención.

58

• **Evaluación del consumo de problemático de alcohol/drogas**

El consumo problemático de alcohol y/o drogas es un factor de riesgo que requiere de una evaluación especializada, con la finalidad de establecer el grado de consumo, si ha participado de un tratamiento y si presenta aún necesidades en esta área. Para ello, no es suficiente con realizar una evaluación de riesgo general, sino que debe considerarse apoyar la evaluación con instrumentos validados como el Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIT). Si bien, las personas beneficiadas con la libertad condicional podrían contar con la aplicación de este instrumento al postular al beneficio, es recomendable actualizar esta evaluación en los siguientes casos:

- Cuando la persona en libertad condicional se encuentre cumpliendo condenas por delitos asociados a la ley de drogas.
- Cuando en el historial delictual de la persona en libertad condicional se reporten delitos directamente relacionados con el consumo de drogas/alcohol.
- Cuando se sospeche consumo problemático de drogas/alcohol durante el proceso de evaluación.

2.1.6. Criterios para actualizar los instrumentos de evaluación

Durante el proceso de evaluación, el(la) Delegado(a) revisará la información sobre las diversas áreas de desenvolvimiento de la persona contenida en el informe de postulación psicosocial y los resultados de la aplicación de los instrumentos de evaluación que se encuentran en el expediente del subsistema cerrado, para identificar los factores de riesgo, factores protectores y recursos para la reinserción que deberán utilizarse para elaborar el plan de intervención individual.

No obstante, cuando en el proceso de entrevista se identifique que algunas condiciones de la persona que fueron evaluadas al momento de la postulación a la libertad condicional han cambiado, el(la) Delegado(a) deberá considerar la necesidad de actualizar uno o más de los siguientes instrumentos aplicados (lista referencial):

- Inventario para la Gestión de Caso/Intervención (IGI): instrumento que establece el nivel de riesgo de reincidencia y las necesidades de intervención, además de identificar los elementos de responsividad, que ha sido completado en todas las personas que han accedido a la libertad condicional; su vigencia es de un año desde su elaboración.
- Protocolo para la Valoración del Riesgo de Violencia Sexual (RSVP): cuyo objetivo es determinar el nivel de riesgo de reincidencia en todos aquellos condenados cuyo delito índice sea de índole sexual; su vigencia es de un año desde su elaboración.
- Guía para la Valoración de Conducta Violenta (HCR-20 V3): tiene por objetivo evaluar y gestionar el riesgo de violencia interpersonal en las personas con antecedentes de haber cometido un comportamiento de violencia extrema o reiterada; su vigencia es de un año desde su elaboración.
- Guía para la Valoración del Riesgo de Agresión hacia la Pareja (SARA V3): se aplica para la evaluación de los factores de riesgo, identificación de necesidades, de personas condenadas por un delito de violencia en contra de la pareja; su vigencia es de un año desde su elaboración.
- Psychopathic Checklist Revised (PCL-R): Se utiliza de manera obligatoria en delitos de mayor connotación social y otros, para evaluar un posible diagnóstico de psicopatía. Su vigencia es de 5 años desde la fecha de aplicación.

Será a partir de las necesidades identificadas en el Inventario para la Gestión de Caso/Intervención (IGI), más el resultado a uno o más de los otros instrumentos de evaluación especializada que fueron administrados en el subsistema cerrado, o actualizados por el(la) Delegado(a), que se elaborará el plan de intervención que guiará la supervisión en libertad condicional. La actualización de estos instrumentos deberá efectuarse en los siguientes casos:

- a) Cuando el expediente proveniente del subsistema cerrado no contenga un Inventario para la Gestión de Caso/Intervención (IGI) o este instrumento no esté debidamente tabulado (por ejemplo, que se encuentre incompleto o con información contradictoria).
- b) Cuando, producto del proceso de actualización de necesidades llevado a cabo por el(la) Delegado de Libertad Condicional, se constate la presencia de cambios relevantes en los factores de riesgo general y específicos, asociados a modificaciones en las condiciones individuales y/o contextuales de la persona en libertad condicional. Se entiende como un cambio significativo toda aquella variación en los factores de riesgo y/o características personales con potencial criminógeno, que probablemente impacten en el riesgo de reincidencia como en las posibilidades de reinserción inicialmente evaluadas.
- c) Cuando el Inventario para la Gestión de Caso/Intervención (IGI) tenga una fecha de elaboración mayor a 12 meses, a contar de la fecha de designación del(la) Delegado(a) de Libertad Condicional.
- d) Además, en el proceso de evaluación de situaciones especiales y frente a la presencia de alguna de las causales descritas previamente (a, b o c), también corresponderá actualizar los instrumentos específicos de evaluación del riesgo de reincidencia.

2.1.7. Integración de la información y síntesis de la evaluación

La síntesis de evaluación corresponde al resumen informativo, de orientación criminológica, que contempla la integración y análisis de la situación de la persona, construido a partir de las entrevistas y todos los antecedentes revisados, como historia vital, factores de riesgo, factores protectores, recursos personales y familiares, consideraciones de adherencia y antecedentes psicosociales, que incidirán en el proceso de supervisión y que favorezcan o dificulten una adecuada integración social. En otras palabras, la síntesis de evaluación debe ser el documento técnico en el cual se plasmen los aspectos más relevantes de la situación de la persona y desde el cual se pueda construir el plan de intervención.

Especial relevancia adquiere en el desarrollo de esta síntesis la formulación y análisis de la dinámica delictiva de la persona, identificando e integrando aspectos relevantes del comportamiento delictivo y ubicándola como un aspecto nuclear en la formulación de caso y planificación de la supervisión. Además, esta síntesis debe dar cuenta del estado motivacional de la persona, su capacidad de respuesta a la intervención, así como del grado de minimización de responsabilidad en los hechos por los cuales la persona ha sido condenada, variables que, de no ser abordadas adecuadamente, podrían impactar en el éxito del plan de intervención como de la supervisión de la libertad condicional.

Resulta de suma importancia señalar que el desarrollo de la síntesis de evaluación facilitará la lectura y comprensión del análisis criminológico desarrollado y de la propuesta de intervención individual construida, por parte de otros actores ajenos al proceso de evaluación implementado, como por ejemplo, Delegados/as de Libertad Condicional subrogantes, accidentales y titulares, en caso de traslado de establecimiento de control, etc., lo cual debiese favorecer la continuidad de la intervención.

Por otra parte, la síntesis de evaluación deberá registrar y describir brevemente las técnicas de recolección de información utilizadas: número de entrevistas efectuadas a la persona y a su referente significativo, visita domiciliaria, tipo de instrumentos revisados o aplicados, ya sea de evaluación del riesgo de reincidencia general como específica, revisión y análisis de antecedentes documentales, etc.

La síntesis de evaluación será presentada al Supervisor(a) Técnico(a) o al(la) Jefe(a) Técnico(a) Local, Encargado(a) de Programas Postpenitenciarios de Intervención, o Encargado(a) Regional, según indique la jefatura del CAIS, quién deberá verificar que contemple el análisis de los distintos factores explorados durante la evaluación,

especialmente de aquellos que serán incluidos en la propuesta de intervención, permitiendo, de esta manera, ser la base para la construcción del plan de intervención individual.

2.1.8. Supervisión técnica del proceso de evaluación

El objetivo principal de la supervisión técnica, como última etapa, es retroalimentar el proceso de evaluación, específicamente respecto de la congruencia entre los resultados de la evaluación y los antecedentes criminológicos y psicosociales disponibles sobre la persona en libertad condicional.

Resulta fundamental para el desarrollo de las actividades de supervisión y retroalimentación técnica resguardar que estas se implementen dentro de plazos que garanticen que el plan de intervención sea aprobado por el Consejo Técnico del C.A.I.S dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles desde la designación del(la) Delegado(a) de Libertad Condicional. Por lo tanto, será dentro de ese periodo, que deberán realizarse las eventuales acciones sugeridas para resolver contradicciones o aspectos poco claros (por ejemplo, nuevas entrevistas, utilización de instrumentos complementarios, entrevistas con profesionales de la unidad penal de origen, etc.).

Las acciones involucradas en la supervisión técnica contemplan la presentación por parte del(la) Delegado(a) de los resultados del proceso de evaluación, incluyendo el desarrollo de las entrevistas, los resultados de todos los instrumentos aplicados o revisados provenientes del subsistema cerrado, revisión de informes y todo documento utilizado como fuente de información. En todos los casos, deberá revisarse la coherencia de lo planteado en la síntesis de evaluación, en la que finalmente se estampará la firma del(la) Delegado(a) de Libertad Condicional y la del(la) profesional que cumpla la función de supervisor(a) técnico(a).

Esta actividad será realizada por el(la) supervisor(a) técnico(a) y en casos debidamente fundamentados y autorizados por la jefatura del CAIS podrá efectuarse por otros(as) funcionarios(as) distintos(as), como el(la) Jefe(a) Técnico(a) Local, Encargado(a) de Programas Postpenitenciarios de Intervención, Encargado(a) Regional u otro profesional que ejerza una jefatura de ese nivel.

2.2. Diseño del Plan de Intervención Individual

Luego del proceso de evaluación, corresponde planificar las actividades que formarán parte de la supervisión de la libertad condicional, con la finalidad racionalizar el empleo de medios y recursos, a través de un proceso de toma de decisiones basadas en criterios técnicos, de forma de determinar las acciones más pertinentes, efectivas y eficientes, que serán plasmadas en el plan de intervención individual.

La planificación es la acción que consiste en utilizar un conjunto de procedimientos, mediante los que se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre ellas que, previstas con anticipación, tienen el propósito de influir en el curso de determinados acontecimientos para llegar a una situación que se define como deseable, mediante el uso eficiente de determinados medios y recursos.

Una adecuada planificación de las actividades que realizará la persona durante su periodo de cumplimiento en libertad condicional es fundamental para el proceso de gestión de caso; por un lado, permite al Delegado(a) coordinar las acciones y los tiempos en que debe dar respuesta a las necesidades identificadas en la evaluación; y por otro, permite que la persona en libertad condicional tenga claridad sobre lo que se espera de él y de los principales hitos la supervisión. Esta planificación es aún más relevante en aquellos casos que presenten varias necesidades de intervención, pues la evidencia disponible establece que la calidad de la formulación del plan de intervención se relaciona con la probabilidad de reincidencia de esa persona. Es decir, un mal diseño del plan de intervención, que no se ajuste a las necesidades de la persona constituye en sí mismo un factor de riesgo de reincidencia (Willis y Grace, 2009).

2.2.1. Construcción del Plan de Intervención Individual (PII)

Se denomina Plan de Intervención Individual (PII) al documento donde el(la) DLC organiza y consigna las actividades que la persona deberá desarrollar durante el período de cumplimiento de su condena en libertad condicional. Se trata de una herramienta dinámica que debe guiar la supervisión del cumplimiento de condena, de las actividades a realizar y objetivos a cumplir con apoyo del/la Delegado(a) quien será el conductor y facilitador de este proceso.

El plan deberá integrar las necesidades que serán abordadas durante todo el período en que la persona se encontrará en libertad condicional, considerando para ello, los siguientes hitos para estructurar las actividades:

- Tiempo que le corresponde cumplir condena en libertad condicional;
- Fecha en que se cumple la mitad del período en libertad condicional para postular al beneficio del artículo 8 de la D.L. 321, con excepción de las personas condenadas por los delitos establecidos en el artículo 3° bis del Decreto Ley, quienes están excluidas de este beneficio.

Por lo tanto, al momento de la elaboración del plan, el(la) Delegado(a) deberá planificar las actividades y objetivos tomando como horizonte que la persona pueda postular a la libertad completa transcurrido la mitad del período, siempre y cuando haya dado cumplimiento a las condiciones establecidas en este plan. Dado que la postulación puede derivar en una concesión o rechazo de este beneficio, en este último caso, será necesario reevaluar los avances estableciendo las actividades a realizar hasta el término de la condena para seguir la supervisión en libertad condicional, sin perjuicio de que pueda ser repostulado al beneficio nuevamente.

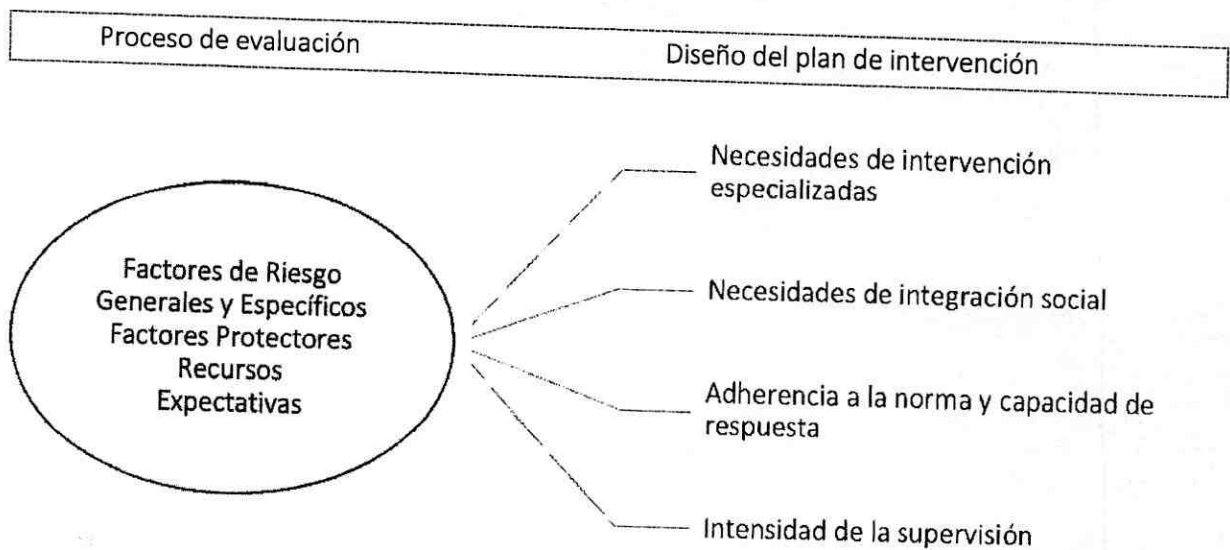
El plan de intervención individual deberá elaborarse a partir de la información recabada durante el proceso de evaluación. Específicamente, deberá dar cuenta de qué manera los factores de riesgo de reincidencia, factores protectores y recursos se traducen en necesidades o áreas a considerar a lo largo de la supervisión y/o representan soportes para apoyar el proceso de reinserción social y los logros esperados. Los pasos a seguir para la elaboración del plan son los siguientes:

- **Definir las áreas de abordaje**

La información levantada durante el proceso de evaluación deberá ser ponderada y analizada para organizarla en las siguientes áreas:

- Necesidades de intervención especializadas: agrupa a los factores de riesgo dinámicos generales y específicos que se orientan al abordaje de áreas directamente vinculadas con la conducta delictiva, como son las actitudes procriminales, patrón antisocial, soportes sociales, al igual que todas las necesidades que forman parte de las evaluaciones especializadas que caracterizan determinados delitos como los sexuales, de violencia extrema o hacia a la pareja. En general, incluye a todas las áreas de intervención que se vinculan con la comprensión fenomenológica de determinados perfiles delictivos y que requieren de un abordaje especializado, generalmente (pero no exclusivamente) a través de programas estructurados.
- Necesidades de integración social: agrupa a los factores de riesgo dinámicos generales o específicos, al igual que los aspectos psicosociales y las expectativas que tenga la persona, que se orientan a fomentar el bienestar general de las personas en ámbitos considerados como prestaciones de derechos y que promueven la integración social como: vivienda, apoyo familiar, nivelación escolar, capacitación y empleo, salud, tratamiento por consumo problemático del alcohol y drogas, asistencia socio-jurídica, ámbitos recreacionales y culturales, entre otros.
- Consideraciones referidas con la adherencia a la norma y la capacidad de respuesta a las actividades del plan de intervención: agrupa a los factores protectores, recursos y expectativas de las personas que pueden fomentar la adherencia a las condiciones de cumplimiento de la libertad condicional, como aquellos aspectos a reforzar y/o considerar

como elementos a trabajar para un adecuado control de la norma, como de las condiciones de responsividad para el logro de los objetivos del plan.



Fuente: Elaboración propia.

- **Definir los objetivos, actividades, indicadores de logro y plazos**

En virtud de lo anterior, el(la) DLC deberá proponer un plan que será concebido como una hoja de ruta lo suficientemente flexible para permitir acomodar los cambios en la situación de la persona en libertad condicional, y lo suficientemente concreto, para direccionar el desarrollo de las metas de las actividades propuestas y la evaluación de sus logros, debiendo ser evaluado en forma continua y modificado de acuerdo con el comportamiento de las necesidades que lo sustentan.

- **Objetivos:** Los objetivos deben redactarse para cada factor y ser concretos, medibles, alcanzables, pertinentes y con plazos establecidos, debiendo ordenarse según se trata de una necesidad de intervención especializada, necesidad de integración social y/o consideraciones referidas con la adherencia a la norma y la capacidad de respuesta. Para cautelar la correcta ejecución del plan se recomienda formular un número de objetivos acotados y abordables, cautelando que la adecuada planificación de la intervención permita ir consiguiendo resultados de modo gradual, de acuerdo con las capacidades de las personas, sin sobrecargarlas, para potenciar su motivación de logro y sentimientos de autoeficacia, con la consecución progresiva de las metas planteadas.

En aquellos casos en que el nivel de riesgo sea muy bajo o bajo y que no presenten necesidades de intervención especializada o de integración social, puede indicarse que el objetivo del plan de intervención consistirá principalmente en actividades de control y/o seguimiento, atendiendo a la importancia de mantener información actualizada respecto de la evolución del caso y el control de la adherencia a la norma.

- **Actividades:** comprenden las acciones concretas que se efectuarán para alcanzar los objetivos propuestos en cada una de las áreas a lo largo de la supervisión. Es importante que en el caso que se hayan identificado necesidades urgentes que requieran el acceso de la persona a la red socio-comunitaria territorial, que haya requerido o requiera acciones inmediatas, también sean incorporadas en el plan.

- **Indicadores de logro:** corresponde a los resultados esperados que permiten observar avances en el cumplimiento de los objetivos propuestos, reflejando cambios observables y evaluables, vinculados con las actividades del plan.

- **Plazo:** corresponde al plazo asignado o estimado en el que se espera dar cumplimiento a los objetivos planteados.

- **Definir la intensidad de la supervisión**

Se refiere a graduar los recursos y actividades en función de los requerimientos de las personas en libertad condicional, a partir de la complejidad que reviste el caso, la que será determinada según la información recabada en las áreas recién mencionadas, más los factores de riesgo estáticos, especialmente el historial delictivo, que da cuenta del perfil delictivo de la persona. Para esto, deberá considerar el nivel de riesgo de reincidencia para establecer la frecuencia del control y/o la supervisión, siguiendo para ello, las directrices establecidas en el punto 3 (Ejecución del Plan de Intervención Individual), que se desarrolla más adelante.

Sin perjuicio de aquello, es importante recordar que la ley establece que, durante el primer año, las reuniones entre el Delegado(a) y la persona beneficiada se realizarán al menos con una frecuencia mensual. Por tanto, cualquier frecuencia de contacto inferior a un contacto o reunión mensual solo podrá implementarse a partir del segundo año del periodo en libertad condicional, tomando en consideración el riesgo de reincidencia, las necesidades de intervención y los recursos para la reinserción de la persona, a partir de los lineamientos que se desarrollan en el punto 3 (Ejecución del Plan de Intervención Individual).

- **Consensuar el Plan de Intervención Individual con la persona en libertad condicional**

Las actividades propuestas en el plan, así como los logros esperados, deben ser consensuados con la persona en libertad condicional, a fin de propiciar un trabajo mancomunado a través de su participación activa y responsable, lo que también permitirá fomentar su adherencia a la supervisión.

Para tal efecto, el(la) DLC le presentará a la persona las áreas definidas en el plan, acordando la priorización de las actividades, los plazos y lo que se espera de cada una de las partes. Es importante escuchar la opinión que tiene la persona de los objetivos y actividades propuestas, explicándole de qué manera podrán ayudarla en su proceso de reinserción y aprovechar la instancia para responder a las dudas o consultas que tengan al respecto. Es fundamental que el(la) DLC utilice estrategias motivacionales durante las entrevistas y contactos con los referentes significativos, para promover la visualización de las áreas necesarias de abordar de forma gradual y progresiva durante el proceso de supervisión. Lo anterior, permitirá la co-construcción del plan, promoviendo que la persona tenga claridad de las condiciones de cumplimiento de su libertad condicional y de los resultados esperados, al tiempo que de las consecuencias que su incumplimiento podría ocasionar.

- **Presentación del Plan de Intervención Individual al Consejo Técnico**

Una vez que el plan ha sido consensuado entre el(la) Delegado(a) y la persona en libertad condicional, el(la) profesional será responsable de presentarlo al Consejo Técnico para su revisión y aprobación, velando por el cumplimiento de los plazos establecidos para su elaboración (45 días). La función del Consejo Técnico será principalmente la de revisar y aprobar el plan de acuerdo con la información técnica disponible, debiendo considerar:

- La coherencia entre los resultados del proceso de evaluación, los hallazgos presentados en la síntesis de evaluación, las necesidades de intervención especializada y de integración social incorporados al plan. El Consejo Técnico debe revisar la fundamentación que respalda esta decisión técnica.
- Las consideraciones de adherencia a la norma y de responsividad observadas por el(la) Delegado(a) en la persona en libertad condicional, tanto respecto al cumplimiento de las condiciones del beneficio como de las actividades propuestas en el plan.
- El planteamiento de los objetivos de la supervisión, visando tanto su coherencia con los antecedentes presentados como la calidad de su formulación.
- La priorización de los objetivos a trabajar de acuerdo con la conceptualización de caso desarrollada.

- La coherencia entre los objetivos, las actividades propuestas, los indicadores de logro y la frecuencia de la supervisión, considerando el nivel de riesgo de reincidencia general estimado y las consideraciones de responsividad identificadas.

Será responsabilidad del(la) DLC(a) cautelar que el plan sea aprobado por el Consejo Técnico en un plazo de hasta 45 días hábiles y se encuentre firmado por la persona. De todos modos, la jefatura de CAIS debe establecer un método de trabajo que asegure que los procesos de aprobación de los planes se realicen dentro del plazo debiendo, para estos efectos, realizar controles periódicos.

En caso que el Consejo Técnico indique que es necesario realizar modificaciones en aspectos técnicos (como reformular objetivos, actividades, plazos u otros), el(la) DLC deberá realizar las modificaciones indicadas, debiendo contar con el visto bueno final de la Jefatura del CAIS (o Supervisor Técnico o Jefatura Técnica, según corresponda) debiendo, luego, presentarle las modificaciones efectuadas a la persona en libertad condicional. En todo aquello no se podrá exceder el plazo de siete (7) días hábiles.

En caso que el Consejo Técnico no apruebe un plan de intervención, el(la) DLC deberá presentar un nuevo plan al Consejo Técnico, debiendo previamente contar con el visto bueno del(la) Supervisor(a) Técnico(a) o Jefe(a) Técnico(a) (según corresponda) debiendo, luego, presentarle el nuevo plan a la persona en libertad condicional. En todo aquello no se podrá exceder el plazo de ocho (8) días hábiles.

- **Firma del plan de intervención de parte de la persona en libertad condicional**

Una vez aprobado el plan de intervención por el Consejo Técnico, se espera que la persona sea informada de aquello y proceda a firmarlo, explicitando de esta forma el conocimiento y acuerdo con su contenido, el que fue trabajado junto a su DLC, comprometiéndose al cumplimiento y participación activa de las actividades propuestas. Esta firma deberá realizarse en un plazo de cinco (5) días hábiles contados desde su aprobación. Se hace necesario recordar a la persona en libertad condicional al momento de firmar su plan, que el incumplimiento de las condiciones establecidas podría ser causal de revocación del beneficio.

2.2.2. Contenido del Plan de Intervención

- I. Antecedentes
 - Nombre Delegado(a)
 - Fecha de asignación del caso
 - Fecha elaboración del plan
- II. Individualización de la persona
 - Datos personales de la persona beneficiada
 - Nombre completo
 - Fecha de nacimiento
 - Edad
 - Datos de la supervisión en libertad condicional
 - CAIS
 - Nombre del (la) Delegado(a)
 - Delito
 - Fecha de inicio y fecha de término de la condena
 - Fecha de inicio de la libertad condicional
 - Fecha cumplimiento de la mitad del período

III. Síntesis de la evaluación

Corresponde dar cuenta de los principales resultados de la evaluación que fundamentan la propuesta de plan de intervención que se propone para la supervisión de la libertad condicional.

IV. Áreas de abordaje

En esta sección corresponde indicar las áreas que serán abordadas durante el periodo en libertad condicional, indicando el factor de riesgo al que corresponde, el objetivo esperado, las actividades, indicadores y plazo en que se espera cumplir con dicho objetivo.

a) Necesidades de intervención especializada

Indicar el (los) factores de riesgo general y específico, los objetivos perseguidos, las actividades para dar respuesta, los indicadores de logro y el plazo en que se espera que sea cumplido.

b) Necesidades de integración social

Indicar el (los) factores de riesgo dinámicos generales, o específicos al igual que los aspectos psicosociales y las expectativas; los objetivos perseguidos, las actividades para dar respuesta, los indicadores de logro y el plazo en que se espera que sea cumplido.

c) Adherencia a la norma y capacidad de respuesta a la supervisión

- Aspectos que influyen en la capacidad de respuesta que deben ser trabajados,
- Aspectos que influyen en la adherencia a las normas que deben ser trabajados,
- Recursos que pueden utilizarse como palancas de cambio y soporte a los logros.

IV. Intensidad de la supervisión

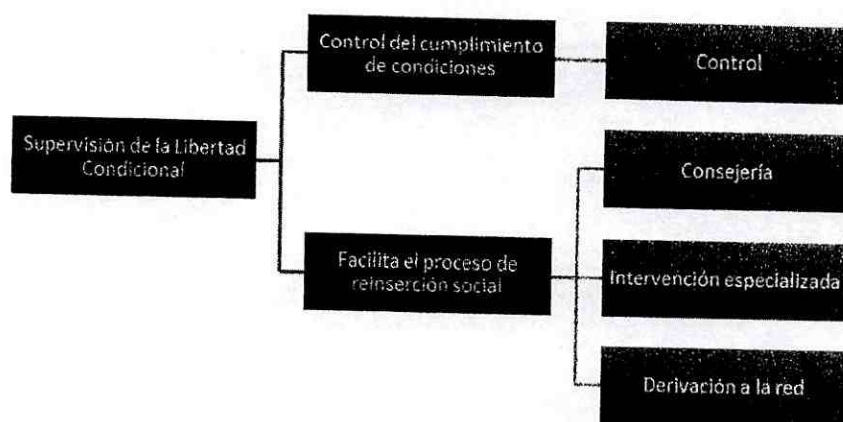
Indicar la frecuencia de contactos que debiese mantenerse hasta que haya una evaluación de los avances del plan y se revise la pertinencia de ajustar la frecuencia. Cabe mencionar que la intensidad de la supervisión hace referencia a los contactos que el(la) DLC debe establecer con la persona (control, intervención u otro), independiente a la frecuencia que pueda tener la participación en un determinado programa o actividad al cual ha sido derivado como parte del plan de intervención individual, aun cuando en algunos casos esta frecuencia podrá coincidir.

3. Ejecución del Plan de Intervención Individual

El artículo 28 del reglamento de la ley, establece que el(a) Delegado(a) de Libertad Condicional "será responsable de la supervisión de las personas en libertad condicional, y de la planificación y conducción del plan de intervención individual". Esta fase corresponde a la etapa en que el(a) Delegado(a) lleva a cabo las actividades especificadas en el plan de intervención individual de acuerdo con la planificación sugerida y a partir de los lineamientos que se desarrollan a continuación.

En el entendido que el objetivo principal del(la) Delegado es facilitar el proceso de reinserción social de las personas que han obtenido este beneficio; y mismo al tiempo controlar que se respeten las condiciones que les fueron impuestas, la supervisión de la libertad condicional y los objetivos del plan de intervención podrán considerar la implementación de una o más de las siguientes actividades: control, consejería, intervención especializada y derivación a la red.

Figura 4: Tipo de actividades que conforman la supervisión de la libertad condicional



Fuente: Elaboración propia.

Actividades de Control

El control considera acciones de monitoreo y verificación, transversales a la totalidad de la población y permanentes durante el período de la supervisión, dirigidas a comprobar el cumplimiento de las condiciones del beneficio de la libertad condicional, según los medios disponibles y lo que se acuerde en el plan de intervención.

Como parte de las actividades de control se contempla que la persona informe a su Delegado(a) en un plazo máximo de 3 días hábiles las siguientes situaciones:

- Cambio de su lugar de residencia;
- Cambio de su actividad laboral o de su actividad escolar/académica;
- Cambios en su situación individual, familiar y económica, respecto de las condiciones informadas en el proceso de evaluación;

Además, de aquello, deberá presentarse a las reuniones estipuladas en el plan de intervención o acordadas con su Delegado(a). En caso de no poder asistir, le corresponderá dar aviso de su inasistencia y los motivos que fundamentan su ausencia por los medios idóneos (presencialmente, por teléfono u otro medio que se haya acordado).

Las reuniones presenciales podrán remplazarse por otro tipo de comunicación, a través de las cuales sea posible hacer seguimiento a las condiciones la libertad condicional, las que deberán estipularse en el plan de intervención, teniendo en especial consideración las condiciones de ubicación del centro respecto al domicilio personal o laboral de la persona en libertad condicional.

Junto con lo anterior, corresponderá al(la) Delegado(a) implementar acciones complementarias al reporte realizado por la persona en libertad condicional, dentro de las cuales destacan las entrevistas –presenciales o no- con el referente significativo, visitas domiciliarias, revisión regular del sistema WSI, contacto con la red comunitaria y/o intersectorial pública o privada a las que haya sido derivada la persona para controlar su asistencia y participación. Esto último siempre que el organismo o institución de la red esté en conocimiento que la persona se encuentra con el beneficio de la libertad condicional.

Actividades de Consejería

La consejería es una actividad reactiva frente a situaciones emergentes, de carácter transversal dentro del proceso de supervisión, cuyo objetivo es proporcionar información y orientación, así como también, si resulta pertinente, facilitar la vinculación a la red intersectorial. Corresponde a acciones acotadas en el tiempo, destinadas a resolver problemáticas puntuales que surjan durante el proceso de supervisión.

Las actividades de consejería podrán realizarse en una o más sesiones, con objetivos a corto plazo, que fomenten la toma de decisiones informada, orientadas a la satisfacción de

la necesidad o demanda puntual. El(la) Delegado(a) de Libertad Condicional deberá utilizar la empatía, la escucha activa, ofrecer ayuda, reconociendo las diferencias de género y culturales, considerando las características particulares de la persona y potenciando los recursos personales, utilizando esta instancia para fomentar la autoeficacia y la capacidad de resolución de problemas en las personas.

En los casos que sea requerido, la consejería incluye acciones para facilitar la vinculación a la red intersectorial disponible (salud, educación, prestaciones sociales, entre otros), con el objetivo de apoyar a la persona y a su familia para que, de manera conjunta, puedan acceder a servicios o bienes concretos en pos de una mejora en la calidad de vida. Para ello, el(a) Delegado(a) de Libertad Condicional deberá contar con un catastro actualizado de la red de apoyo intersectorial, realizado por el encargado de redes o quien cumpla la función en el CAIS, para posteriormente realizar un seguimiento a las eventuales derivaciones realizadas.

Actividades de Intervención Especializada

La intervención especializada incluye a las actividades orientadas a disminuir el riesgo de reincidencia, a través de la incorporación de habilidades cognitivas, emocionales y sociales para un desenvolvimiento en la comunidad alejado del delito. También puede definirse como "todas las acciones especializadas y sistemáticas en el ámbito de la reinserción social cuya finalidad es promover las condiciones individuales, interpersonales y sociales que favorezcan la modificación de factores que pudieron haber influido en la conducta delictual, de manera que propendan a la reinserción e integración social de los(as) usuarios(as)" (Gendarmería de Chile, 2017).

Estas actividades se orientan, por lo general, a resolver necesidades de intervención que presentan las personas condenadas, por lo general en el ámbito individual, y que actúan como obstáculos en su proceso de reinserción social, tal como un funcionamiento emocional deficiente y patrones de pensamiento disfuncionales, falta de planificación y de habilidades de autocontrol, dificultades interpersonales y de resolución de conflictos, tratamiento de adicciones, manejo de la violencia, entre otros factores de riesgo de reincidencia delictiva. Considerando que en el proceso de evaluación se levanta información respecto a los recursos personales y las expectativas de la persona, la manera de reforzar estos aspectos también podrá realizarse a través de la intervención especializada, en el entendido que su finalidad será reforzar los aprendizajes o logros obtenidos en otras áreas, principalmente en torno a los factores de riesgo.

La implementación de las actividades de intervención especializada podrá efectuarse en modalidad individual o a través de programas estructurados:

- **Intervención individual**

Corresponde al establecimiento de acciones planificadas para generar un cambio o una modificación en los factores de riesgo identificados durante la evaluación. Para estos fines, el(a) Delegado(a) podrá apoyarse en los factores protectores y en los recursos de la persona para facilitar el logro de los cambios propuestos.

Operativamente, la intervención individual en libertad condicional corresponde a la modalidad de supervisión bipersonal –considerando a la persona y a un(a) Delegado(a)– orientada al cumplimiento de uno o más objetivos para dar respuesta a las necesidades de intervención especializada consignadas en el plan, habitualmente desde un enfoque motivacional y cognitivo-conductual. La intervención individual corresponde a una relación de ayuda de orientación terapéutica, implementada de acuerdo a la frecuencia de intervención indicada en el plan de intervención por medio de sesiones.

- **Programas estructurados**

De acuerdo con el artículo 24 del reglamento de la ley, para el abordaje de los factores de riesgo de reincidencia, la ejecución del plan de intervención podrá considerar la derivación a programas orientados a desarrollar herramientas que contribuyan a evitar la reincidencia en el delito y favorecer la integración social.

Los programas corresponden a un conjunto estructurado y especializado de actividades orientadas al cumplimiento de ciertos objetivos y pertinentes a las necesidades de intervención de la población en libertad condicional. Estos programas se dirigirán al abordaje de necesidades de intervención especializada en la población evaluada con un nivel de riesgo de reincidencia medio, alto o muy alto. Su contenido se orienta generalmente hacia la adquisición de habilidades prosociales, contemplando estrategias de intervención respaldadas por la evidencia científica y mecanismos de evaluación que permitan conocer sus resultados.

Junto con lo anterior, también podrá haber programas que se orienten a trabajar aspectos vinculados con las consideraciones de responsividad, que podrán requerir un abordaje especializado, como los aspectos motivaciones u otros similares.

Los CAIS deberán contar con una oferta de programas estructurados con objetivo(s) general(es) y específico(s) claros, criterios de inclusión y exclusión, sesiones estructuradas e instrumentos que permitan su supervisión y sistematización. Los lineamientos específicos estarán contenidos en el Manual respectivo de cada Programa de Intervención.

Actividades de Derivación a la Red Intersectorial

Las derivaciones a la red intersectorial tienen por finalidad asistir a la persona, generando oportunidades para promover su integración social por medio de actividades que estarán a cargo de organismos y/o instituciones externas a Gendarmería de Chile.

Estas actividades pueden consistir en dar respuesta a una necesidad de intervención especializada que no pueda ser cubierta por el CAIS o bien, puede consistir en acceder a la oferta programática y servicios de la red intersectorial para atender una necesidad de integración social. Al(la) Delegado(a) le corresponderá gestionar su acceso a las redes que sean requeridas, debiendo hacer seguimiento a esta derivación para recibir retroalimentación sobre la satisfacción de las necesidades, para lo cual, mantendrá contacto directo con los organismos de la red que estén trabajando con las personas en libertad condicional.

Según lo establecido en el plan de intervención respecto a las necesidades susceptibles de ser satisfechas a través de los recursos disponibles en la red público-privada, las principales áreas de derivación serán las siguientes (lista no exhaustiva):

- Encontrar alojamiento
- Conseguir asesoría legal
- Nivelar estudios
- Participar de una capacitación laboral
- Encontrar empleo
- Acceder a tratamiento de salud física y/o mental
- Acceder a tratamiento por consumo de alcohol/drogas
- Otras

Para hacer posible la correcta derivación, mancomunarán esfuerzos el/la DLC, el encargado de redes del CAIS, el/la liberto y la entidad pública o privada pertinente. Las razones que llevarán a la derivación y lo que se espere de ella, deberá ser compartido por todos(as) los(as) implicados(as), por lo cual, la persona en libertad condicional, deberá firmar el compromiso que contrae al ser derivado a la red en el marco de ejecución de su plan.

Asimismo, cada vez que se realice una derivación asistida, mediará la firma de un documento en el que se dé cuenta de ello entre CAIS y la institución de la red a la que se recurre. Dicho documento indicará las razones por las cuales se contacta a dicha institución/organización y especificará qué se requiere de ella en materia de cobertura de necesidades de la persona en libertad condicional. Indicará además el nombre del/la DLC y sus datos de contacto, a efectos de establecer las debidas coordinaciones y retroalimentación entre ambas instituciones.

3.1. Lineamientos generales para supervisión de la libertad condicional en delitos comunes

Estos lineamientos son criterios orientadores para los(as) DLC y excepcionalmente podrán modificarse, cuando existan criterios técnicos debidamente justificados y aprobados por el Consejo Técnico del CAIS.

A través del siguiente cuadro, se presentan las directrices para la supervisión cuando el(los) delito(s) índice(s) corresponda(n) a delitos comunes, considerando que, durante el primer año de cumplimiento, la frecuencia de control deberá ser a lo menos mensual, según lo establecido en el Decreto Ley N° 321. Sin perjuicio de aquello, el establecimiento de la intensidad de la supervisión y el tipo de actividades a realizar debe proponerse a partir de los siguientes lineamientos:

Tabla 3: Frecuencia de la supervisión para personas condenadas por delitos comunes

Riesgo de reincidencia	Necesidad(es)	Frecuencia de Supervisión	Tipo de actividad
Muy bajo	Baja, media y alta	Mensual	Control / Consejería
Bajo	Baja y media	Mensual	Control / Consejería
	Alta	Mensual	Control / Consejería / Intervención individual
Medio	Baja	Quincenal	Control / Consejería / Intervención individual
	Medias y alta	Quincenal	Control / Consejería / Intervención individual/Programas
Alto y muy alto	Media y alta	Semanal	Control / Consejería / Intervención individual/Programas

Las directrices presentadas en la tabla anterior podrán ser flexibilizadas y modificadas en virtud de una o más condiciones identificadas y debidamente fundamentadas por el(la) Delegado(a), solamente con la aprobación del Consejo Técnico. Algunas de estas condiciones corresponden a:

- La persona en libertad condicional vive en una zona alejada del CAIS (dispersión geográfica);
- Inexistencia de transporte público que permita su desplazamiento;
- Razones climáticas;
- Algún impedimento concreto, que se traduzca en la imposibilidad de asistir durante un periodo determinado al CAIS (por ejemplo, hospitalizaciones, enfermedad que impida temporalmente el desplazamiento físico, entre otros).

Por otro lado, en el caso de las personas que presenten alguna de las condiciones recién mencionadas, la frecuencia de supervisión establecida para los diferentes niveles de riesgo de reincidencia podrá mantenerse en la medida que se flexibilicen las modalidades a través del cual el/la DLC realice las actividades propuestas. De este modo, las actividades propuestas podrán realizarse con la frecuencia propuesta siempre y cuando no se requiera la presencia de la persona en libertad condicional en el CAIS, pudiendo remplazar la asistencia presencial o los contactos cara a cara por el uso de videoconferencias, llamados telefónicos o cualquier otro medio tecnológico que se instruya.

Delitos generales con muy bajo o bajo riesgo de reincidencia

Como ha sido indicado por la literatura especializada, los casos de bajo riesgo no debiesen participar de intervenciones especializadas intensivas, pues su desenvolvimiento en la condena y posterior a ella, suele ser favorable aún en total ausencia de intervención (Bonta, 2009). Por lo tanto, en el caso de personas con un riesgo de reincidencia general muy bajo o bajo, y para dar cumplimiento a lo establecido en el reglamento de la ley, la intensidad de la

supervisión durante el primer año se traducirá en reuniones o controles mensuales, y en la derivación a organismos o instituciones públicas o privadas, en caso que sea necesario apoyarlo con el acceso a prestaciones y servicios de la red intersectorial.

A partir del segundo año y posterior a una reevaluación del caso, ante la presencia de un nivel bajo o muy bajo de reincidencia y la ausencia de necesidades de intervención, las actividades de supervisión podrán realizarse mensualmente y de manera mixta (presencial y remota), en caso de contar con la aprobación del Consejo Técnico del CAIS.

Las actividades a realizar contemplan el control del cumplimiento de las condiciones del plan y/o el abordaje de requerimientos o necesidades puntuales mediante consejería, a excepción de las personas con riesgo de reincidencia general bajo, pero con necesidades altas en alguna área. En estos casos, debido a la presencia de necesidades de intervención que deben ser abordadas, se optará por actividades de intervención individual y/o derivación a la red intersectorial.

Delitos generales con mediano riesgo de reincidencia

Las personas en libertad condicional que presenten un nivel de riesgo de reincidencia medio deberán ser supervisadas con una frecuencia mínima quincenal, durante el primer año de cumplimiento, con las consideraciones sobre la flexibilidad en la modalidad de control mencionadas previamente. Posterior al primer año, deberá establecerse la frecuencia de acuerdo a los resultados obtenidos en la reevaluación de los factores de riesgo, factores protectores y recursos.

En caso de personas que sólo presenten necesidades en nivel bajo, el plan de intervención individual podrá contemplar solo actividades de control y/o la derivación a la red intersectorial, en la que el(la) DLC deberá estar atento(a) ante posibles cambios en las condiciones personales y/o del entorno, que pudiesen impactar o influir de manera significativa en su comportamiento.

Es importante, además, que el(la) Delegado(a) utilice técnicas de la entrevista motivacional para favorecer la motivación al cambio en los ámbitos que resulten pertinentes, además de reforzar sus factores protectores y utilizar los recursos para la mantención y promoción de los logros.

Por su parte, las personas que presenten necesidades de intervención en nivel medio o alto deberán participar de intervención individual o asistir a programas estructurados, considerando sus características particulares, su capacidad de respuesta, nivel de motivación y las directrices definidas en los manuales de cada programa en particular. En caso que no sea posible efectuar actividades de intervención especializada, ya sea porque la persona no puede acudir al Centro con la frecuencia requerida, o por otros motivos debidamente justificados, el(la) DLC deberá desplegar estrategias de control a través del uso de los medios tecnológicos.

El (la) Delegado(a) debe considerar que cuando las personas presenten necesidades de integración social, éstas pueden ser abordadas a través de consejería y derivación a la red sociocomunitaria, simultáneamente a la intervención individual o asistencia a programas, las que deben ser monitoreadas a fin de controlar la adecuada y oportuna disposición de servicios y tratamientos requeridos.

Delitos generales con muy alto o alto riesgo de reincidencia

Las personas con un riesgo de reincidencia alto o muy alto, presentan necesidades que requieren de un abordaje intensivo para alcanzar el cumplimiento de los objetivos del plan de intervención individual. En todos estos casos, la frecuencia mínima de supervisión será semanal durante el primer año de supervisión, manteniéndose las consideraciones sobre la flexibilidad en la modalidad de control mencionadas previamente.

Respecto al tipo de actividades, deberá optarse por la intervención individual o la asistencia a programas estructurados. Ante personas que vivan en localidades muy distantes al CAIS, el Consejo Técnico podrá aprobar una modalidad mixta de supervisión (presencial y remota) que implique preferentemente al menos la asistencia quincenal al Centro. En el caso que no

sea posible que la persona asista al Centro con esta periodicidad, el/la DLC podrá realizar la actividad de supervisión o intervención planificada a través de videoconferencia, llamados telefónicos u otros medios tecnológicos que sean pertinentes para cumplir con el plan de intervención. Dicha modificación deberá resguardar el adecuado cumplimiento de los objetivos de supervisión y control, siendo monitoreado por el(la) DLC o Consejo Técnico, de acuerdo con la periodicidad que se detalla en el apartado "seguimiento del plan".

El(la) Delegado(a) considerando el análisis de las necesidades de intervención especializadas presentes, deberá priorizar su abordaje atendiendo a las características particulares de la persona y la definición de plazos establecidos en el plan de intervención. Adicionalmente, deberá monitorear permanentemente los factores de riesgo agudo (entendidos como los factores que pueden emerger dentro del proceso y se constituyen en un riesgo inminente de reincidencia, por ejemplo, ingesta intensa de alcohol/drogas) y de cualquier cambio en las condiciones generales de la persona, anticipando escenarios de riesgo y generando estrategias de control y supervisión que sean necesarias. Es fundamental, que el(la) DLC realice las acciones motivacionales, fortaleciendo los recursos personales y sociales, promoviendo la identificación de micro-logros (cambios acotados, pero positivos), que motiven a la persona a persistir en el proceso de cambio conductual o actitudinales que resulten favorables a su proceso de reinserción social. En caso que no sea posible efectuar actividades de intervención especializada, ya sea porque la persona no puede acudir al Centro con la frecuencia requerida o por otros motivos debidamente justificados, el/la DLC deberá desplegar estrategias de control a través del uso de los medios tecnológicos disponibles.

El (la) Delegado(a) debe considerar que cuando las personas presenten necesidades de integración social, éstas pueden ser abordadas a través de la consejería y la derivación a la red, simultáneamente a la intervención individual o participación en programas, las que deben ser monitoreadas a fin de controlar la adecuada y oportuna disposición de servicios y tratamientos requeridos.

Para todos los casos, siempre deberá tenerse en consideración que los horarios sean compatibles con el cumplimiento de las otras actividades de reinserción que se encuentre realizando la persona.

3.2. Lineamientos generales para supervisión de la libertad condicional en delitos sexuales y de violencia de pareja

La supervisión de las personas condenadas por delitos sexuales o de violencia contra la pareja deberá llevarse a cabo, siempre que sea posible y pertinente, en función de las características de la persona, por medio de la derivación a un programa estructurado, orientado al abordaje de uno o más de los factores de riesgo específicos, en aquellos casos en que:

- El(Los) delito(s) índice(s) corresponda(n) a un delito sexual o de violencia en razón de género;
- La condena por la cual se otorga el beneficio de libertad condicional no sea por delitos sexuales o de violencia en razón del género, pero en virtud de los antecedentes disponibles (por ejemplo, presencia de delitos sexuales y/o violencia de pareja) y considerando los resultados del proceso de evaluación, el(la) DLC decide incorporar el abordaje de los factores de riesgo específico para delitos sexuales o de violencia de pareja como parte de las actividades del plan de intervención. Cabe mencionar que estos programas deben ser diferenciados, y considerar la diversidad de perfiles que pueden encontrarse en personas condenadas por delitos sexuales y de violencia contra la pareja.

La participación en programas podrá ser complementada con la derivación asistida a la red sociocomunitaria, en los casos que corresponda, para dar respuesta a las necesidades de integración social.

En aquellos casos en que los criterios de exclusión de los programas no permitan incorporar a una persona que presenta esta necesidad, su participación deberá ser reemplazada por una intervención individual. En otros casos especiales, como, por ejemplo, de

incompatibilidad de horarios entre el programa y las actividades cotidianas de la persona, será el Consejo Técnico el organismo que autorizará o no el reemplazo de la participación en programas por otra modalidad que permita cumplir con los objetivos del plan de intervención.

Cabe señalar que, con independencia al nivel de riesgo de reincidencia, deberán implementarse acciones de control, ya que es una actividad transversal a la supervisión, considerando especialmente el impacto de una eventual reincidencia para potenciales nuevas víctimas, la seguridad pública y las condiciones de la libertad condicional.

También se espera que el(la) Delegado(a), en cada una de las actividades de supervisión, monitoree presencial o no presencialmente y/o a través del referente significativo o cualquier otra fuente fiable de información (y gestione cuando corresponda) la presencia de:

- Factores de riesgo agudos para la reincidencia en delitos sexuales, los cuales pueden ser definidos como elementos dinámicos que podrían modificarse en un breve lapso de tiempo (horas o días) y que, desde el consenso de la literatura disponible, corresponderían a oportunidad de acceso a potenciales víctimas, estado de ánimo negativo, enojo o ira, rechazo o falta de cooperación con la supervisión, pérdida del soporte social y consumo de alcohol y/o drogas (Hanson y Harris, 1999; Hanson y Harris, 2013).
- Factores de riesgo (o estresores), para el caso de hombres condenados por agredir a sus parejas, como, por ejemplo, consumo de alcohol y/o drogas, ideación o intento suicida, posesión de armas, violación de medidas precautorias, crisis emocional, pérdida del empleo, pérdida del apoyo social, crisis económica, etc. (Folino, 2004).

Por lo tanto, se espera que frente a la presencia o incremento de uno o más de los factores descritos anteriormente, el(la) profesional aplique todas las estrategias y medidas posibles para evitar la concreción de un nuevo delito, entre las cuales destaca la intervención individual del(los) factor(es) de riesgo, la comunicación de la situación al referente significativo, la derivación asistida a oferta programática extrainstitucional relevante, la comunicación con la autoridad policial, etc.

Por último, la gestión de caso en estas poblaciones deberá incorporar a un referente significativo como fuente de información respecto de los cambios conductuales favorables en la persona y contemplar visitas domiciliarias, para mantener seguimiento en terreno de las condiciones particulares de la persona en Libertad Condicional.

A continuación, se presenta la directriz técnica para la supervisión de estos casos considerando las variables riesgo de reincidencia, necesidad(es), frecuencia mínima de intervención y tipo de actividad:

Tabla 4: Frecuencia de la supervisión para personas condenadas por delitos sexuales y de violencia de pareja

Riesgo de reincidencia	Necesidad(es)	Frecuencia de Supervisión	Tipo de actividad
Muy Bajo / Bajo	Baja	Quincenal	Control / Consejería
	Media y alta	Quincenal	Control / Consejería / Intervención individual
Medio	Baja	Semanal	Control / Consejería / Intervención Individual
	Media y alta	Semanal	Control / Consejería / Intervención individual/Programas
Muy alto/alto	Media y alta	Semanal	Control / Consejería / Intervención individual/Programas

Las directrices presentadas en la tabla anterior podrán ser flexibilizadas y modificadas en virtud de una o más condiciones identificadas y debidamente fundamentadas por el(la) Delegado, solamente con la aprobación del Consejo Técnico. Algunas de estas condiciones corresponden a:

- La persona en libertad condicional vive en una zona alejada del CAIS (dispersión geográfica);
- Inexistencia de transporte público que permita su desplazamiento;
- Razones climáticas;
- Algún impedimento concreto, que se traduzca en la imposibilidad de asistir durante un periodo determinado al CAIS (por ejemplo, hospitalizaciones, enfermedad que impida temporalmente el desplazamiento físico, entre otros).

Por otro lado, en el caso de las personas que presenten alguna de las condiciones recién mencionadas, la frecuencia de supervisión establecida para los diferentes niveles de riesgo de reincidencia podrá mantenerse en la medida que se flexibilicen las modalidades a través del cual el/la DLC realice las actividades propuestas. De este modo, las actividades propuestas podrán realizarse con la frecuencia sugerida, siempre y cuando no se requiera la presencia de la persona en libertad condicional en el CAIS, pudiendo remplazar la asistencia presencial o los contactos cara a cara por el uso de videoconferencias, llamados telefónicos o cualquier otro medio tecnológico que se instruya; así como el desplazamiento del DLC al lugar en que se encuentre la persona en caso de ser posible.

Delitos sexuales o de violencia contra la pareja con muy bajo o bajo riesgo de reincidencia

Para aquellos casos de muy bajo o bajo riesgo de reincidencia, la consejería o la intervención individual podrán ser el tipo de intervención a utilizar por el(a) Delegado(a) de Libertad Condicional, decisión que dependerá del nivel de las necesidades de intervención (bajo, medio o alto) considerados en el plan de intervención individual manteniendo, en cualquiera de los casos, una frecuencia de supervisión quincenal y manteniéndose las consideraciones sobre la flexibilidad en la modalidad de control mencionadas previamente.

En aquellos casos donde solo se identifiquen necesidades en nivel bajo, el abordaje será a través de consejería y además se podrán implementar actividades de vinculación con la red intersectorial y comunitaria en los casos que corresponda, para dar respuesta a las necesidades de integración social. Mientras que en los casos en que se hayan evaluado necesidades medias o altas, será la intervención individual la estrategia a privilegiar para el abordaje de estos factores de riesgo, siguiendo los lineamientos planteados en el punto anterior.

Delitos sexuales o de violencia contra la pareja con mediano riesgo de reincidencia

En cuanto a las personas que cumplen libertad condicional, cuyo riesgo de reincidencia se estime en nivel medio, y cuyas necesidades de intervención hayan sido evaluadas nivel medio o alto, la frecuencia de supervisión a implementar deberá ser semanal optando por la participación en un programa estructurado como la modalidad de intervención a implementarse. En caso de no poder efectuarse una intervención especializada con asistencia de la persona al CAIS, por motivos debidamente fundamentados, se deberá optar por flexibilizar la modalidad de supervisión por otras actividades o bien utilizando otros medios tecnológicos para cumplir con la frecuencia sugerida.

En caso que la persona haya sido evaluada con necesidades de intervención bajas, el(a) Delegado(a) deberá utilizar la intervención individual para, por una parte, monitorear el comportamiento de los factores de riesgo agudos y factores estresantes y, por otra, explorar las eventuales variaciones de los factores de riesgo de reincidencia específicos para violencia sexual y de violencia contra la pareja, desde un enfoque de prevención de recaídas, es decir, analizando el delito como un proceso de toma activa de decisiones y desarrollando estrategias de afrontamiento ante la presencia de factores y situaciones de riesgo (Negredo y Pérez, 2019).

En aquellos casos en que la frecuencia de las sesiones del programa no coincida con la frecuencia mínima de contactos establecidos en el plan de intervención individual -por ejemplo, Centros donde el Consejo Técnico resuelva implementar el programa con frecuencia quincenal mientras que el plan indica una frecuencia mínima de intervención semanal-, el(a) DLC deberá cumplir con la frecuencia mínima indicada en el plan, agregando sesiones de control e intervención individual en aquellas semanas en que no se realice la intervención grupal orientadas, por ejemplo, al refuerzo de uno o más contenidos del

programa, seguimiento de situaciones individuales relevantes, monitoreo de factores de riesgo agudos, etc.

Por último, y en los casos que corresponda de acuerdo con el contenido del plan, además de la intervención especializada se deberán implementar actividades de vinculación con la red intersectorial y comunitaria que contribuyan a la gestión de factores de riesgo y/o la promoción de derechos en el marco de las necesidades de integración social.

Delitos sexuales o de violencia contra la pareja con alto y muy alto riesgo de reincidencia

Los lineamientos para la supervisión de personas con alto riesgo de reincidencia contemplan una frecuencia de supervisión semanal y la participación en programas estructurados o intervención individual, como actividades para el logro de los objetivos contemplados en el plan orientado a la disminución del riesgo de reincidencia. No obstante, en caso de no poder efectuarse una intervención especializada con asistencia de la persona al CAIS, por motivos debidamente fundamentados, se deberá optar por flexibilizar la modalidad de supervisión por otras actividades o bien utilizando otros medios tecnológicos para cumplir con la frecuencia sugerida.

En el caso de las personas que participen de los programas de intervención y considerando además que este grupo presenta un alto riesgo de reincidencia junto a necesidades que se vinculan con riesgo de reincidencia sexual o contra la pareja -por ejemplo, el patrón de consumo de alcohol y/o drogas, la exposición a situaciones de riesgo, la asociación con otras personas condenadas o involucradas en conductas delictuales, desempleo, etc.- el(la) DLC deberá plantear y activar estrategias que le permitan monitorear el comportamiento de estos factores. Con este objetivo, y en caso de resultar pertinente, se debe evaluar la viabilidad de implementar entrevistas individuales (presencial o remotas) no contempladas en las actividades del programa o visitas domiciliarias, a modo de control y refuerzo.

En aquellos casos en que la frecuencia de las sesiones del programa no coincida con la frecuencia mínima de contactos establecidos en el plan de intervención, debido a una decisión técnica aprobada por el Consejo Técnico del CAIS, el(a) DLC deberá cumplir con la frecuencia mínima indicada en el plan, agregando sesiones de control e intervención individual en aquellas semanas en que no se realicen sesiones del programa orientadas, por ejemplo, al refuerzo de uno o más contenidos del programa, seguimiento de situaciones individuales relevantes, monitoreo de factores de riesgo agudos, etc., pudiendo remplazar la asistencia presencial o los contactos cara a cara por el uso de videoconferencias, llamados telefónicos o cualquier otro medio tecnológico que se instruya; así como el desplazamiento del DLC al lugar en que se encuentre la persona de ser posible.

En estos casos, es particularmente relevante que el(la) Delegado(a) mantenga un monitoreo estricto de las condiciones generales de la persona, principalmente referido a conductas y escenarios de riesgo que puedan presentarse. Para esto, como parte de los contactos habituales con la persona el(la) Delegado(a) deberá ser activo(a) en la búsqueda de este tipo de información, considerando los delitos realizados por la persona (por ejemplo, presencia de conflictos con la pareja en caso de condenados por VIF, acceso a potenciales víctimas menores en caso de delitos sexuales o estados de ánimo disfórico en caso de presencia de delito sexuales, entre otros). Si resulta pertinente, el(la) Delegado(a) podrá mantener acciones de control más intensivas, de acuerdo a los medios disponibles (por ejemplo, de forma remota) para complementar los contactos presenciales con la persona.

Por último, y en los casos que corresponda de acuerdo con el contenido del plan de intervención, además de la intervención especializada se deberán implementar actividades de vinculación con la red intersectorial y comunitaria que contribuyan a la gestión de factores de riesgo y/o la promoción de derechos para dar respuesta a las necesidades de integración social.

3.3. Lineamientos generales para supervisión de la libertad condicional en delitos violentos

En casos de personas condenadas por delitos violentos que no correspondan a violencia contra la pareja o delitos sexuales (por ejemplo, homicidio, lesiones graves, robo con violencia, delitos ocurridos en el ámbito de violencia intrafamiliar, etc.), y considerando los resultados del proceso de evaluación (por ejemplo, existencia de un patrón antisocial, antecedentes delictuales relacionados con la comisión de actos de agresión/violencia, diagnóstico de psicopatía, deficiente manejo de la ira, intimidante/controlador, agresión física no sexual y otras formas de violencia, etc.), la intervención debiese orientarse al abordaje de las áreas que se vinculan con el riesgo de reincidencia y a la moderación de la intensidad, duración y frecuencia de los episodios de violencia, desarrollando habilidades para las respuestas no agresivas en las relaciones interpersonales (Feindler y Weisner, 2006 en ISUC, 2017).

En estos casos, resulta relevante implementar una intervención de alta intensidad que considere tanto la participación en actividades de intervención especializada, contacto con el referente significativo, visitas domiciliarias, actividades regulares de coordinación intersectorial y otras determinadas por el(a) profesional responsable de la intervención. Tal como ha sido mencionado para los otros delitos, es posible remplazar la asistencia presencial o los contactos cara a cara por el uso de videoconferencias, llamados telefónicos o cualquier otro medio tecnológico que se instruya; así como el desplazamiento del DLC al lugar en que se encuentre la persona de ser posible.

Además, en casos en que, durante el proceso de evaluación, algún(os) factor(es) de riesgo no hubiesen sido identificados, pero existe constatación durante el periodo de la supervisión de su emergencia, deberán realizarse los ajustes necesarios al plan y a la intensidad de la intervención, de ser necesario.

3.4. Lineamientos para el abordaje de las necesidades de integración social

El abordaje de las necesidades de integración social requerirá en la mayoría de los casos la derivación a la red intersectorial, siendo, por tanto, un aspecto fundamental para la ejecución del plan de intervención. Las acciones mínimas que deberá tener en consideración el/la DLC, en conjunto con el encargado de redes serán las siguientes:

- Cada encargado de redes deberá mantener un catastro actualizado de la red intersectorial para que el(la) DLC pueda ubicar la institución adecuada para derivar a la persona en libertad condicional.
- El encargado de redes se vinculará con los organismos e instituciones de la red para que puedan aportar con material gráfico como dípticos, trípticos o cartillas, que sirvan como medio informativo de la derivación.
- El(la) DLC deberá considerar en la información que entregue a la persona en libertad condicional la explicación de la derivación, describiendo en qué consistirá la atención, sus objetivos y duración.
- El(la) DLC deberá gestionar la derivación a través de una Ficha, que será general para todas las prestaciones, la que deberá ser entregada al encargado de redes para activar la solicitud. Cuando el DLC haya decidido dónde derivar a la persona en libertad condicional y le haya entregado la correspondiente orientación e información sobre el proceso que se llevará a cabo, éste debe coordinarse con el encargado de redes del CAIS para que éste realice la derivación.

Para la derivación a la red intersectorial y comunitaria, el(la) DLC junto al encargado de redes del CAIS deberán:

- Establecer contactos previos con los profesionales responsables del apoyo a la persona en libertad condicional en la institución a la que ha sido derivada.
- Completar los documentos y protocolos exigidos por cada institución y enviarlos oportunamente a las personas encargadas.

- Establecer reuniones con el equipo a cargo en la institución de la red para el traspaso de la información.
- Indicar a los usuarios/as, las referencias exactas de la institución que le acogerá. Entregárselas verbalmente y por escrito.

Prestaciones de apoyo en red

Las alternativas de prestación para cubrir las necesidades de integración social que posee Gendarmería son escasas, por lo tanto, las derivaciones a la red son fundamentales y en este caso, el (la) DLC podrá ejecutar los siguientes pasos dependiendo de los requerimientos establecidos en el plan de intervención:

• Necesidades educacionales

El(la) DLC revisará el catastro de la oferta educacional (establecimientos educacionales) y derivará la persona, dependiendo de la modalidad en la cual debe incorporarse para terminar su educación, utilizando la ficha de derivación diseñada para tales efectos. Las modalidades podrán ser las siguientes:

- Modalidad flexible
- Plan de Alfabetización denominado Contigo Aprendo o similar
- Validación de estudios (exámenes libres o equivalencia de estudios)
- Ofrecer apoyo y orientación en la postulación a becas de estudio

Una vez realizada la derivación y concretado el proceso de matrícula, el(la) DLC deberá solicitar la copia del documento como medio de verificación e incorporarlo al expediente del(la) liberto(a). Dicho documento acreditará la inscripción o matrícula en el Centro Educacional correspondiente.

Corresponderá además al DLC realizar el seguimiento a los cursos en los cuales se matriculó la persona y contar con información sobre la evolución y cumplimiento de los mismos.

• Apoyo social

En el transcurso del proceso de evaluación y a lo largo de la ejecución del plan de intervención, deberá verificarse si la persona posee su cédula de identidad vigente y si está inscrita en el Registro Social de Hogares (RSH), si correspondiere. En la eventualidad que en ambos casos la respuesta resulte negativa, el(la) liberto(a) deberá ser informado(a) que debe actualizar la cédula y obtener la clave única para poder ingresar sus datos en el RSH, acción que se puede realizar a través de internet. En todo este proceso, el DLC deberá orientar al(la) liberto(a) sobre cómo debe hacerlo, priorizando los trámites no presenciales, por la eficiencia que implican.

En el caso que el(la) DLC detecte que el liberto(a) no posee la clave única, le informará del procedimiento para la obtención mediante la página web del SRCEI. El(la) DLC debe procurar que cuando se encuentre inscrito en el RSH, la persona en libertad condicional tenga acceso a los beneficios correspondientes.

• Vivienda

El(la) DLC revisará el catastro de oferta en materia de albergues y vivienda, en la medida que este requerimiento sea necesario de acuerdo con lo establecido en el plan de intervención. Para ello existirán las siguientes alternativas de información:

- Albergues
- Hospedajes de pago y gratuitos
- Acceso a la vivienda en caso de: arriendo, compra y reparación
- Apoyo y orientación en la postulación a subsidios

Corresponderá al DLC derivar al organismo competente para que pueda tener acceso a la prestación, previa coordinación telefónica o vía mail con la contraparte. Posteriormente,

el(la) DLC solicitará a la persona el documento que acredite su acceso a la prestación vía mail o documento impreso en el caso de postulación.

- **Salud/SENDA**

El(la) DLC realizará la pesquisa de la situación de acceso a salud de la persona en libertad condicional, orientándolo(a) a que se inscriba en el consultorio más cercano a su domicilio para que pueda acceder a las prestaciones que entrega el Estado en materia de salud (CESFAM, CRS, COSAM, etc.), en caso que sea pertinente. También deberá ofrecerle apoyo para inscribirse en FONASA, en caso que no cuente con adscripción a un sistema de salud durante su periodo en libertad condicional.

En el caso que la persona presente un consumo problemático de alcohol y/o drogas que requiera del acceso a la red de tratamiento de SENDA/MINSAL, el(la) DLC debe ceñirse al protocolo de derivación vigente en Gendarmería para estos efectos, promoviendo el acceso oportuno a la oferta programática de los dispositivos de SENDA o MINSAL, según corresponda.

En el caso que la persona haya estado en un Centro de Tratamiento de Adicciones mientras cumplía condena en el subsistema cerrado, el(la) DLC deberá realizar las coordinaciones necesarias para favorecer la continuidad de la atención recibida al interior del establecimiento penitenciario. Debido a lo anterior, es necesario coordinarse con la contraparte de SENDA local o regional, acción que realizará el DLC o encargado de redes, informándole a la persona sobre las posibilidades que tiene de continuar su tratamiento.

- **Oferta Municipal**

El(la) DLC deberá revisar junto al liberto(a) el catastro de alternativas de programas municipales a los cuales puede acceder, dependiendo del lugar en que este resida y según las necesidades que requiera satisfacer.

En caso de ser pertinente, es importante que el(la) DLC promueva en la persona la búsqueda de alternativas laborales que oferte el municipio donde vive. Esto debe realizarse paralelamente a la gestión que deba realizar el encargado de redes con la respectiva OMIL. El(la) DLC deberá informar al liberto(a) sobre la forma de acceder a la oferta de empleo de acuerdo a la comuna a la cual pertenece (Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL). En el caso que la persona sea mujer y con hijos(as) se le entregarán alternativas municipales que le permitan acceder a las guarderías, para poder obtener un trabajo.

- **Capacitación Laboral**

El(la) DLC de acuerdo revisará el catastro de cursos de capacitación a los cuales es posible acceder en forma gratuita a través de los organismos del Estado como SENCE, en el caso, que no sea posible derivarlo a la oferta laboral de Gendarmería.

En caso de ser necesario, el(la) DLC guiará al liberto(a) en el proceso de postulación a los cursos, ya sea de manera presencial (entregándole información escrita) o vía internet, considerando que existen bonos para el empleo entregado por organismos públicos.

- **Empleo**

El(la) DLC, en caso de ser pertinente, dará a conocer a la persona la oferta que entrega el Ministerio del Trabajo a través de sus diversas plataformas. En complemento a lo anterior, el(la) DLC entregará información respecto de la oferta del sector privado de acuerdo a la red comunitaria que haya establecido el CAIS, en el caso, que no sea posible derivarlo a la oferta laboral de Gendarmería de Chile.

El(la) DLC deberá solicitar a la persona el contrato de trabajo o comprobante de inserción laboral en cuanto lo haya obtenido. Dicho documento deberá ser incorporado en el expediente de la persona en libertad condicional.

- **Asistencia entregada por la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)**

El(la) DLC informará a la persona que puede acudir a la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), en para recibir orientación judicial en las siguientes materias:

- Civil (arrendamiento, posesiones efectivas testadas, recursos de protección, etc.)
- Laboral (despido injustificado, prestaciones adeudadas, fuero maternal, etc.)
- Familia (divorcio, pensión de alimentos, régimen de visitas, adopción, etc.)
- Penal Sistema Antiguo (todas aquellas causas anteriores a la Reforma Procesal Penal)
- Atención Integral para Víctimas de Delitos Violentos (abusos sexuales, violaciones, homicidios, etc.)

Asimismo, el(la) DLC también informará a la persona en libertad condicional que, de necesitar Patrocinio, la CAJ puede hacerlo en forma gratuita, considerando que ésta todavía está cumpliendo condena.

Previo a realizar la derivación, el(la) DLC deberá coordinar con la CAJ respectiva, a través de correo electrónico, el acceso a la atención requerida por la persona. El(la) DLC deberá contar con información básica del liberto(a), como nombre, Rut y teléfono, para remitir a la contraparte de la CAJ y agilizar así la orientación requerida.

- **Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MINMEG)**

Si el(la) DLC ha detectado que la persona sufre o ha sufrido violencia intrafamiliar durante el proceso de evaluación y a lo largo de la supervisión en libertad condicional, derivará a la persona, previo contacto con la contraparte, a un Centro de la Mujer o a los Centros de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual.

Es importante que, ante la constatación de estos hechos, el(la) DLC se muestre empático(a) y acoja la situación de la mujer, orientándola respecto de la existencia de programas que gestiona el MINMEG en esta materia, los que tienen como objetivos proteger, prevenir y tratar a las mujeres víctimas de violencia, entre los cuales se encuentran:

- Violencia contra las mujeres
- Mujer y Trabajo
- Mujer y participación política
- Mujer, sexualidad y maternidad

4. Seguimiento del Plan de Intervención Individual

La supervisión de la libertad condicional es responsabilidad del(la) Delegado(a), quien deberá cautelar que se realicen actividades de control, consejería, intervención especializada y/o derivaciones a la red, según lo que se haya establecido en el plan de intervención individual, para el periodo en que la persona se encuentre con este beneficio.

La supervisión debe entenderse como un proceso técnico y continuo, en el que la persona, desde su incorporación al beneficio y con la guía y apoyo del(la) DLC, va progresivamente accediendo a prestaciones y desarrollando competencias que facilitarán su integración a la comunidad. En este proceso, tanto el acceso a las redes de apoyo intersectorial como la intervención especializada y el trabajo motivacional, ocupan un lugar central como parte de las acciones del plan de intervención. Es importante recordar que si el(la) DLC estima, luego de la evaluación, que la persona no presenta necesidades de intervención especializada o de integración social, o bien, que estas necesidades han sido resueltas, la supervisión se traducirá en actividades de control y/o consejería, de acuerdo con los lineamientos presentados en la fase de ejecución del plan.

4.1. Monitoreo del Plan de Intervención

Un elemento central del seguimiento del plan de intervención es el monitoreo constante de la ejecución de las actividades acordadas, evaluando la necesidad de realizar ajustes con el fin de alcanzar el objetivo esperado. Esto puede requerir, entre otras cosas, revisar la

programación de las actividades, su desarrollo y resultados todo lo cual debe ser registrado en la carpeta de la persona en libertad condicional.

El monitoreo de las acciones del plan de intervención permite cautelar la entrega oportuna de las actividades establecidas en el plan, asegurando la continuidad y coherencia de las mismas. El monitoreo permanente de los avances y el desarrollo oportuno de las actividades planificadas son parte central del proceso de gestión de caso que el(la) Delegado(a) implementa con cada persona en libertad condicional, debiendo mantener un seguimiento estrecho y un conocimiento actualizado del estado de ejecución del plan de cada una de ellas. Lo anterior, también incluye hacer seguimiento a las coordinaciones necesarias, que el(la)DLC debe realizar para la gestión de redes intersectoriales, con las contrapartes de los organismos o programas de la red, no solo en lo referido a la derivación asistida del caso, sino para monitorear la participación de la persona en dichas instancias.

El monitoreo de los avances en la ejecución del plan debe realizarse permanentemente durante el cumplimiento de la condena, acorde con la frecuencia establecida según nivel de riesgo de reincidencia, establecido para la ejecución de la condena. Por ejemplo, si la frecuencia de contactos con el/la Delegado/a es mensual, el monitoreo de las actividades establecidas en el plan deberá efectuarse al menos con esa periodicidad, a fin de ir evaluado si se están cumpliendo con las actividades consignadas e ir tomando las medidas correctivas que sean necesarias para resolverlas.

El monitoreo del plan de intervención requiere que el(la) Delegado(a) verifique que la persona haya asistido a las reuniones o citaciones, de acuerdo con la frecuencia establecida en el plan. Luego, que haya asistido a las actividades en las cuales se haya considerado participación, ya sea que se trate de actividades de control, consejería, intervenciones especializadas y programas. Finalmente, que se haya presentado a los organismos de la red intersectorial a los que haya sido derivado y el contacto con la contraparte de estos organismos en caso de ser necesario y/o pertinente, según la situación en que se haya realizado la derivación.

Vinculado con lo anterior, el monitoreo del plan requerirá que el (la) Delegado(a) y/o el encargado de redes haga un seguimiento de la derivación a la red intersectorial, lo que permitirá que cualquier problema que surja con el catastro de la oferta y las contrapartes públicas y privadas que gestiona el CAIS, se detecte y corrija a tiempo, disminuyendo en lo posible, los efectos de la insatisfacción de las necesidades de la persona.

Esta será una acción que el(la) DLC y/o encargado de redes deberá realizar de manera regular y que debe centrarse en la evaluación del cumplimiento de lo establecido en el plan relativo a las derivaciones, distinguiendo la responsabilidad que le compete a la persona respecto de la atribuible a la red u organización, considerando los siguientes aspectos: cumplimiento del requerimiento por el cual la persona fue derivada, acogida de la red intersectorial, tiempo de respuesta a la solicitud de la derivación, seguimientos y resultado de la misma.

El registro del monitoreo de los avances debe consignarse en la carpeta de la persona en libertad condicional, para lo cual deberá incorporar allí, en un plazo no superior a tres (03) días hábiles desde que se realiza una actividad, toda la documentación técnica que dé cuenta del resultado de este seguimiento, tales como:

- Registros que dan cuenta del avance en las actividades ejecutadas, su objetivo, contenido y la manera en que se efectuó el seguimiento (entrevistas con la persona en libertad condicional, visitas domiciliarias, entrevistas con referente significativo, entre otros).
- Evaluaciones de la participación en sesiones de programas de intervención especializados.
- Formularios de derivaciones e informes u otros documentos derivados y/o recibidos en el marco de las necesidades de intervención que serán resueltas a través de la red intersectorial pública y/o privada.

- Copias de los informes dirigidos a la Comisión de Libertad Condicional, Tribunales u otros órganos jurisdiccionales.
- Cualquier otro antecedente relacionado con el proceso de supervisión de la persona en libertad condicional.

4.2. Evaluación del cumplimiento de los objetivos del Plan de Intervención

Las acciones de seguimiento deben permitir evaluar el nivel de avance y los resultados del plan de intervención, según los objetivos de cambio propuestos, y redireccionar el curso de las actividades en caso de ser necesario. Para ello, el seguimiento no solo debe considerar la evaluación de la adherencia o cumplimiento de los requisitos formales de las actividades de supervisión, sino que evaluar el logro de los objetivos propuestos en el plan de intervención.

La evaluación de los avances será diferenciada, en atención al plazo de extensión del periodo en libertad condicional. De este modo, se realizará cada seis (06) meses desde la elaboración del plan de intervención para las personas con un saldo de condena superior a 2 años (considerando en el cálculo la postulación al beneficio del art. 8 de la ley) y cada cuatro (04) meses desde la elaboración del plan para las personas con un saldo inferior a dicho periodo.

Junto con evaluar la asistencia a las actividades del plan, es necesario que el(la) DLC evalúe la participación de la persona en estas actividades, es decir, su nivel de adherencia, colaboración en su desarrollo, integración de habilidades y desarrollo de competencias y progresión de la motivación, para lo cual podrá apoyarse en los registros sobre el monitoreo de los avances consignados en la carpeta individual. Esta evaluación es integradora, por lo tanto, debe abarcar el análisis de las actividades realizadas durante el periodo de seguimiento (es decir, los últimos 6 o 4 meses, según corresponda), cuyo análisis debe tener como referencia el logro de los objetivos establecidos en el plan de intervención, por lo que es fundamental identificar indicadores que den cuenta de los avances en el abordaje de las necesidades en particular y del proceso de reinserción en general.

Cabe señalar, que es importante respetar la frecuencia con que deben realizarse las actividades de evaluación del plan, por cuanto un análisis de los resultados reales de la intervención especializada y la derivación a la red intersectorial permitirá que, si éstos no cumplen con las expectativas, se pueda corregir el problema en los primeros meses de contacto entre la persona condenada y la red intersectorial a la que fue derivada.

Los resultados de la evaluación de los objetivos del plan se consignarán en un Informe de Seguimiento que deberá elaborarse cada vez que se realice este seguimiento. Es decir, cada seis (06) o cuatro (04) meses, según la extensión de la condena en libertad condicional. En casos debidamente justificados, se podrá hacer la evaluación de los avances y la consiguiente elaboración del informe en un plazo menor a los estipulados.

4.3. Actualización del Plan de Intervención

Frente a situaciones tales como cambios relevantes en la situación de la persona y/o de las condiciones inicialmente evaluadas, escasos o nulos resultados respecto del logro de objetivos o, la presencia de indicadores que señalen el aumento de necesidades a abordar, se debe considerar la pertinencia de efectuar una reevaluación de necesidades, lo que, eventualmente, puede implicar una modificación del plan de intervención.

Considerando los eventuales cambios que pueden ocurrir en las circunstancias vitales de las personas, se sugiere que la reevaluación de las necesidades se realice anualmente, desde la fecha de aprobación del plan de intervención. La decisión de realizarla fuera de este plazo debe ser considerada una situación excepcional que requiere estar claramente justificada, en mérito a criterios técnicos o en virtud de una instrucción judicial, correspondiendo la validación de esta decisión al Consejo Técnico, cuando se trate de una propuesta del(la) Delegado(a). Para el cálculo de los tiempos para la reevaluación deben aplicarse las adecuaciones de plazos que corresponda al proceso de postulación al beneficio de Rebaja de Condena establecido en ley N° 19.856 u otro de similar naturaleza que pueda invocar el(la) liberto(a) condicional.

Esta reevaluación requiere actualizar los instrumentos de evaluación de riesgo de reincidencia (principalmente el IGI), ya que tiene por finalidad identificar la presencia de nuevas necesidades o áreas que deban ser abordadas durante la supervisión en libertad condicional, lo que permitirá evaluar la pertinencia de seguir con las mismas actividades propuestas en el plan o bien actualizarlo e incorporar los ajustes necesarios en virtud de los nuevos emergentes. Las modificaciones que eventualmente podrán incorporarse al plan pueden afectar las necesidades originalmente propuestas, en cuyo caso será necesario indicar el objetivo esperado, las actividades a realizar, los indicadores de logro y el plazo estipulado para cumplirlo. Otra opción es que se mantengan las mismas áreas o necesidades inicialmente propuestas, sin embargo, sea necesario modificar los objetivos y las actividades a realizar, o bien, ajustar la intensidad de las mismas y de la supervisión en general. Hay que tener presente que cualquier modificación del plan debe efectuarse ponderando el tiempo de condena que le resta a la persona para terminar con la supervisión y la posibilidad de cumplir con los nuevos objetivos dentro del plazo que le resta en libertad condicional.

Para la reevaluación de necesidades, el (la) DLC determinará si requiere realizar visitas domiciliarias, así como la pertinencia de utilizar algún instrumento de evaluación especializada, considerando situaciones emergentes en las que se aprecien indicadores de riesgo específico que no hayan sido considerados en el proceso de evaluación previo. Respecto a los instrumentos de evaluación de riesgo específico, sin perjuicio de la indicación precedente, éstos siempre deberán actualizarse en los casos de delitos sexuales y violencia contra la pareja, y en aquellos casos en que la evaluación de necesidades vigente haya concluido la presencia de factores específicos de riesgo de reincidencia. Lo anterior, tiene el objetivo de disponer de resultados comparables, manteniéndose la preponderancia de los resultados de esta evaluación específica por sobre la evaluación de riesgo general.

Todas las modificaciones que se incorporen al plan de intervención deberán consignarse en un nuevo documento en el cual deberán actualizarse los campos que correspondan, según la nueva planificación que el(la) DLC proponga para el abordaje de las necesidades. En caso que no sea necesario actualizar el plan de intervención, dado que se no observaron cambios significativos en las necesidades que ameriten un abordaje diferente al propuesto, se deberá registrar tal situación en la carpeta individual de la persona. Estas modificaciones deberán ser aprobadas por el Consejo Técnico dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la modificación y/o desde que este órgano instruyera la actualización del plan (cuando corresponda) para continuar la supervisión de la libertad condicional.

La actualización del plan, ya aprobado por el Consejo Técnico, será informado por el(la) DLC a la persona en libertad condicional dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, debiendo firmar las nuevas condiciones de cumplimiento establecidas. Es importante que el(la) DLC, haga partícipe a la persona del proceso de actualización del plan, explicando las razones de los eventuales ajustes realizados, buscando fomentar la adherencia y compromiso de la persona a las nuevas actividades.

En síntesis, la actualización del plan deberá realizarse en las siguientes situaciones:

1. Anualmente desde la fecha de aprobación del plan de intervención individual, para evaluar la emergencia de nuevas necesidades o cambios en las situaciones previamente identificadas.
2. Cuando exista una indicación específica por parte del Consejo Técnico y/o por requerimiento de la Comisión de Libertad Condicional u otra autoridad competente.
3. En momentos distintos a los precedentemente señalados, siempre que dichos casos estén debidamente justificados y se relacionen con estas situaciones:
 - Cuando ocurra un cambio significativo en la situación de vida de la persona, debido a la presencia de indicadores asociados a sus factores de riesgo, protectores, consideraciones para la adherencia y capacidad de respuesta y/o indicadores situacionales, que ameriten una nueva evaluación.

- Cuando en el monitoreo del plan se observe una baja efectividad de las actividades y técnicas propuestas, y/o cuando se observe un escaso o nulo impacto en la consecución de los logros esperados según la planificación establecida.

Por otra parte, en algunas situaciones será necesario realizar una nueva evaluación de las necesidades de intervención, con la finalidad de conocer los avances y cambios en la situación de la persona respecto a un estado inicial previo, sin que esta reevaluación tenga asociado la actualización o modificación del plan. Estas situaciones son las siguientes:

1. Un mes antes del cumplimiento de condena por fecha original, en el caso que la persona se encuentre aún en libertad condicional, con la finalidad de evaluar los avances del proceso de reinserción y registrar los cambios respecto a las evaluaciones previas. Para las personas cuyo saldo de condena es igual o inferior a seis (6) meses desde la fecha en que se realizó la reunión de ingreso, se considerará la última evaluación efectuada, salvo que se hayan observado cambios relevantes que requieran ser actualizados. En dicho caso, el(la) Delegado(a) deberá realizar una reevaluación, la que corresponderá a la evaluación de egreso.
2. Un mes antes que se cumpla el periodo para la postulación al beneficio del art. 8° del D.L. N°321 y/o la rebaja de condena, para dar cuenta del cumplimiento de las condiciones del plan de intervención y que será el insumo para elaborar el Informe de Solicitud de la Libertad Completa y el Informe de Cumplimiento de las Condiciones de la Condena, en el caso de quienes postulan a la rebaja de condena. En caso de ser rechazada la solicitud, la reevaluación de necesidades realizada se utilizará para realizar los ajustes necesarios al plan para continuar con el periodo de supervisión.

4.4. Informes de Supervisión de la Libertad Condicional

La Libertad Condicional es un beneficio cuya supervisión corresponde a un(a) DLC de Gendarmería de Chile. Sin embargo, tanto el otorgamiento de este beneficio como su continuidad es una facultad privativa de una Comisión de Libertad Condicional, de acuerdo con lo establecido en el art. 5° y art. 8° del D.L. N° 321. Así, corresponderá que se le informe a dicha instancia respecto de aquellos aspectos de la supervisión que, de acuerdo con la citada norma, incidan negativamente en el cumplimiento del beneficio otorgado; o por el contrario, de aspectos positivos que apoyen la solicitud de la libertad completa, cuando la persona ha cumplido con las condiciones para aquello.

Estas comunicaciones deberán ser realizada por medio de informes establecidos al efecto, cuya gestión es responsabilidad del(a) DLC, pero que corresponde a las funciones del Consejo Técnico de cada CAIS.

De los informes que se describen a continuación, todos deben enviarse a la Comisión de Libertad Condicional, con excepción de los Informes de Seguimiento, los cuales consisten en documentos internos de trabajo, que permiten dar cuenta de los avances en el proceso de cumplimiento de la libertad condicional y que deben quedar consignados en la carpeta individual de la persona.

Informe de Seguimiento

El Informe de Seguimiento es el instrumento de monitoreo que da cuenta de los avances en el proceso de reinserción de la persona en libertad condicional, de acuerdo con lo establecido en el plan de intervención individual. Este informe debe referirse al estado y desarrollo de las acciones orientadas a dar respuesta a las necesidades detectadas durante el proceso de evaluación y priorizadas en el plan, dando cuenta del logro de los objetivos establecidos dentro del plazo de ejecución definido, identificando indicadores que permitan sustentar esta evaluación.

A partir de las actividades de seguimiento del plan de intervención el(la) DLC podrá proyectar la continuidad del proceso de supervisión y, excepcionalmente, indicar la

necesidad de reevaluar necesidades antes de la revisión anual consignada como norma y, por tanto, reformular el propio plan de intervención previo a este tiempo.

Los plazos para elaborar el Informe de Seguimiento son los siguientes:

- Cada seis (06) o cuatro (04) meses desde la fecha de aprobación del Plan de Intervención Individual. En aquellos casos en los que se haya actualizado el plan, deberá considerarse la fecha de aprobación de esta modificación por parte del Consejo Técnico para establecer la periodicidad para realizar las actividades de seguimiento y elaborar el informe;
- Previo al traslado de la persona en libertad condicional a otro CAIS;
- Cuando exista una indicación específica por parte del Consejo Técnico;
- Por requerimiento de otro órgano jurisdiccional y/o la Comisión de Libertad Condicional.

El Informe de Seguimiento deberá indicar si el plan de intervención ha sido actualizado o modificado desde la última revisión (indicando la fecha) y además dar cuenta detallada de las siguientes áreas:

- a) Frecuencia del control: se deberá informar la frecuencia de contacto efectivamente cumplida, indicando razones en el caso de existir alguna variación con respecto a la fijada en el plan de intervención. Todo cambio que se proponga en la frecuencia de control deberá ser informado y aprobado por Consejo Técnico, debiendo quedar técnicamente justificado y registrado en Actas y en el registro del proceso de supervisión de la carpeta de cada persona en libertad condicional.
 - b) Necesidades de intervención especializada: se deberá hacer referencia al desarrollo de las actividades del plan de intervención vinculadas con necesidades que se relacionan directamente con la conducta delictiva. Deberá informar el estado de cumplimiento o no de los objetivos que se definieron, realizando las observaciones que expliquen diferencias respecto de la programación establecida.
 - c) Necesidades de integración social: corresponde a aquellos objetivos del plan que se orientan a la vinculación con la red intersectorial, ya sea en el ámbito de la salud mental, la salud física, actividad laboral y capacitación y requerimientos de asistencia social, entre otros, por lo que deberá indicarse el estado cumplimiento de estos objetivos. En las observaciones el(la) DLC deberá señalar sintéticamente las acciones realizadas en este ámbito (ej.: derivaciones asistidas, inscripción en cursos, entre otras), actividades pendientes y sugerencias de ajustes dentro del plan (ej.: plazos de cumplimiento), objetivo de la derivación, resultados y cuestiones pendientes, si resulta pertinente.
- Es fundamental que exista una retroalimentación constante entre el(la) encargado(a) de redes del C.A.I.S. y el(la) DLC para realizar la evaluación de los avances alcanzados por la persona en su proceso de derivación a la red intersectorial. El(la) encargado(a) de redes deberá realizar un monitoreo del funcionamiento de las vinculaciones con la red intersectorial teniendo en consideración el grado de satisfacción de las personas, incidencias o problemas encontrados en las derivaciones a la red pública o privada, áreas a considerar en la gestión de redes a futuro, entre otras.
- d) Áreas que se abordarán durante el siguiente período: de acuerdo con la planificación establecida, se debe indicar las áreas que corresponde trabajar en el siguiente período para dar continuidad al plan de intervención.
 - e) Necesidad de ajustes al plan de intervención: se deberá indicar si fue necesario realizar ajustes en las actividades del plan para cumplir con los objetivos de intervención propuesto para cada necesidad.
 - f) Descripción de la propuesta de modificación de Plan de Intervención (en caso de ser necesario): se deberá explicar los ajustes a las actividades del plan. Junto a lo anterior, el(la)

DLC justificará técnicamente la estrategia de intervención a utilizar, velando por la coherencia entre los objetivos, actividades y plazos disponibles.

Para efectos de evaluar los avances de las actividades del plan, se considerará la siguiente clasificación en lo que respecta a los puntos b) y c):

- Cumplido: el objetivo propuesto se ha alcanzado de manera favorable y no existen actividades pendientes.
- En proceso: actualmente se están realizando actividades, por lo que el objetivo se encuentra en fase de desarrollo.
- No cumplido: el objetivo no se ha intervenido/gestionado aún, o bien, se ha trabajado para cumplirlo, pero el resultado ha sido desfavorable, distinguiendo ambas situaciones. Si las actividades fueron iniciadas y actualmente están detenidas o retrasadas, fuera del plazo de programación, deberá anotarse como No cumplido. Deberá registrarse la situación de no cumplimiento de los objetivos, señalando si esto se debe a situaciones atribuibles a la persona en Libertad Condicional, decisión del(la) DLC o a la falta de disponibilidad de los recursos necesarios (por ejemplo, pendiente de ingreso o falta de cupos en programas de intervención o programas de la red de derivación).

Informe de Incumplimiento de las Condiciones del Plan de Intervención

El (la) DLC es responsable de supervisar el cumplimiento de las condiciones del Plan de Intervención y, por tanto, le asiste el deber de dar cuenta al Consejo Técnico de manera oportuna de cualquier incumplimiento de éstas, de forma tal que el Consejo Técnico pueda evaluar y determinar su comunicación a la respectiva Comisión de Libertad Condicional.

Al DLC, entonces, le corresponde dar aviso formalmente del incumplimiento de las condiciones del plan de intervención de manera inmediata al Consejo Técnico, aportando todos los antecedentes disponibles sobre la situación. El Consejo Técnico deberá constituirse para estos fines, hasta tres (03) días hábiles siguientes a dicho aviso, con el fin de analizar los antecedentes, determinando si existió o no justificación suficiente para el incumplimiento, e informar a la respectiva Comisión de Libertad Condicional, si lo considera incumplimiento, dentro del plazo de tres días, fijado al efecto en el art. 20 del reglamento de la ley.

Para todos los efectos, las condiciones generales de cumplimiento del plan de intervención individual son las establecidas en el artículo 25 del reglamento:

- a) La presentación en el CAIS respectivo, que permita realizar el registro administrativo de la persona en libertad condicional y la reunión de ingreso, requeridas para la asignación de un delegado de libertad condicional a cargo de la supervisión.
- b) La asistencia a entrevistas individuales con el (la) DLC que le fuere asignado, salvo situaciones debidamente justificadas.
- c) La participación en acciones y programas especializados, individuales y/o grupales, dirigidos a disminuir los factores de riesgo delictual, que se encuentren contemplados como necesarios en su plan de intervención individual.
- d) La participación y asistencia, a través de procesos de derivación asistida, a organismos y programas de la red intersectorial, que se encuentren establecidos como acciones técnicas en su plan de intervención individual.
- e) Mantener un lugar de residencia estable y conocido que permita la supervisión y la asistencia a las actividades programadas, y el deber de informar de manera oportuna un cambio de residencia, de modo de garantizar la continuidad de la intervención a través de la derivación a una nueva unidad de control.

En esta situación, el(la) DLC deberá elaborar un Informe de Incumplimiento, que indique cuál es la fundamentación que motiva la evaluación de incumplimiento, de modo de presentarla al Consejo Técnico y que éste, a su vez, la remita a la respectiva Comisión de Libertad Condicional, dentro del plazo de hasta tres (03) días hábiles desde que el Consejo

Técnico resolvió el caso, para que ésta se pronuncie respecto a la continuidad o revocación del beneficio.

Así también, el(la) DLC deberá informar al Consejo Técnico las siguientes situaciones:

- a) Que la persona en libertad condicional se encuentra en prisión preventiva. Ante esto, el Consejo Técnico deberá informar a la Comisión de Libertad Condicional la suspensión de la supervisión, mientras dure la medida cautelar de prisión preventiva. Sin perjuicio de aquello, el(la) DLC deberá hacer seguimiento de dicho proceso, en caso de que terminare con una condena.
- b) Que la persona, ya sea que se encuentre en prisión preventiva o con otra medida cautelar, se encuentra condenada. De modo tal que el Consejo Técnico informe de aquello a la respectiva Comisión, para que ésta se pronuncie respecto a la continuidad o revocación del beneficio, de acuerdo con los plazos estipulados en el art. 20 letra c) del reglamento.

La jefatura del CAIS, en cualquiera de las situaciones anteriores, informará mediante oficio a la respectiva Comisión de Libertad Condicional. En el caso de que se informe una nueva condena, se deberá adjuntar a la comunicación el último informe de seguimiento realizado a la persona en libertad condicional.

De recibirse una resolución de revocación del beneficio, la jefatura del CAIS instruirá egresar a la persona de los sistemas dispuestos para la supervisión y notificar formalmente del egreso al (los) Tribunal(es) que dictaron la condena por el(los) cuál(es) la persona estaba en libertad condicional, acompañando dicha comunicación con una copia de la resolución de revocación, para que disponga(n) su detención, cuando ella fuere procedente, y posterior ingreso al establecimiento penitenciario que correspondiere, a fin de que cumpla el tiempo que le falte para completar su condena.

Si, por el contrario, la resolución de la Comisión de Libertad Condicional establece la continuidad del beneficio, deberá continuarse con el plan de intervención incorporando los ajustes indicados por la Comisión y/o indicaciones del Consejo Técnico.

Informe para la postulación al beneficio del artículo 8° del D.L. N° 321 y a la rebaja de condena

El artículo 8° del DL N° 321 establece la posibilidad que las personas que se encontraren gozando del beneficio de libertad condicional y que hubieren cumplido la mitad del período y las condiciones establecidas en su Plan de Seguimiento e Intervención Individual, podrán ser beneficiadas con la concesión de su libertad completa, por medio de una resolución de la respectiva Comisión, con la sola excepción de los/las beneficiarios/as en virtud del artículo 3° bis de la citada ley.

Por otro lado, el artículo 15 de Ley N° 19.856 que crea un sistema de reinserción social sobre la base de la observación de buena conducta, establece que las personas condenadas que gozaren de la libertad condicional podrán optar a la rebaja de condena según lo establecido en el art. 2° y 3° 4° de la ley, cuando hayan dado cumplimiento a las condiciones impuestas por la condena, lo que deberá acreditarse a través de una certificación de cumplimiento por parte de Gendarmería de Chile.

En virtud de lo anterior, le corresponderá al(la) DLC realizar la postulación de la persona a estos beneficios, por medio de un Informe de Solicitud de Libertad Completa o un Informe de Cumplimiento de Condiciones, en el que deberá dar cuenta del cumplimiento de los requisitos formales, así como del cumplimiento de las condiciones del plan de intervención.

Estos informes deben:

- Referirse a los avances en el proceso de reinserción social y del cumplimiento de las condiciones del plan de intervención;

- Dar cuenta de las necesidades de intervención abordadas y el nivel de logro de la persona en los objetivos del plan que estaban considerados a partir del proceso de evaluación.

Para elaborar estos informes, será necesario que el(la) DLC tenga como insumo los resultados de la reevaluación de las necesidades efectuada un mes antes que se cumpla el periodo para la postulación. Dicho informe deberá ser visado para su envío por el Consejo Técnico, debiendo remitirse a la respectiva Comisión el día hábil siguiente al cumplimiento de la fecha referida en el DL. N° 321 y/o en la fecha determinada por la Ley N°19.856.

5. Preparación al egreso y término de la supervisión

En esta fase, el(la) Delegado(a) deberá focalizar su trabajo en lo que se denomina Actividades de Preparación para el Egreso, para lo cual se deberá informar a la persona que, debido a la proximidad del término de su condena o de su postulación al art. 8° de la ley o a la rebaja de condena, se desarrollarán actividades específicas que comprenden el análisis, revisión y refuerzo de los aspectos trabajados durante el cumplimiento del beneficio.

Esta fase se inicia tres (03) meses antes de la fecha de egreso, por cualquiera de las causales mencionadas, de la persona que cumple en libertad condicional. En aquellos casos que registren un saldo de condena igual o inferior a 6 meses (considerando el tiempo para la postulación al art. 8 para efectuar el cálculo) a partir de la reunión de ingreso, esta etapa se reduce a un mes antes de la fecha de término del periodo de cumplimiento.

Las actividades de preparación para el egreso deberán ser consensuadas con la persona enfatizando los logros alcanzados, los cambios identificados y los aspectos que aún requieren de refuerzo y mantenimiento de logros. Para ello, se deberá focalizar el trabajo en el análisis de situaciones y/o contextos de riesgo, fortaleciendo las estrategias de prevención de recaídas. Es igualmente importante identificar y valorar los aspectos positivos del proceso de supervisión y/o de acontecimientos que pueden haber ocurrido en la vida de la persona, reforzando las capacidades personales para alcanzar metas y objetivos.

Dado que al momento del egreso la persona ya no contará con un(a) DLC, toda acción de intervención, reparación, atención u otra que requiera, deberá ser proporcionada por la red comunitaria. Por lo tanto, una actividad fundamental de esta fase es la vinculación con la red intersectorial mediante derivaciones asistidas y la inclusión de terceros significativos que le brinden soporte y lo ayuden a minimizar las posibilidades de reincidencia.

En el caso de personas condenadas por delitos sexuales y/o de violencia contra la pareja, se deberá poner especial atención en las necesidades de intervención que no hayan sido abordadas completamente, o cuyos objetivos establecidos en el plan no se hayan cumplido. Es fundamental que el(la) DLC y/o el encargado de redes procuren realizar una vinculación con la red intersectorial que permita, en la medida de las posibilidades, dar continuidad al trabajo realizado en el periodo de supervisión de la libertad condicional y promover el mantenimiento de los logros alcanzados.

En algunos casos será necesario trabajar específicamente las expectativas y/o ansiedad que el proceso de desvinculación con el(la) DLC pudiera producir en la persona. Por lo anterior, es relevante que el(la) DLC explicita los avances en el proceso de reinserción social de la persona, destacando la capacidad de autogestión y autoeficacia desarrollada durante el periodo de supervisión.

Finalmente, es importante que el(la) DLC oriente a la persona respecto de la posibilidad de acceder a la Eliminación de Antecedentes (D.L. N°409). Al respecto, el(la) DLC deberá explicar los beneficios para el proceso de reinserción social que puede generar la eliminación de antecedentes, especialmente para la obtención de un empleo formal. De esta forma, el(la) DLC entregará la información pertinente (folletería de la normativa, etc.), destacando la voluntariedad de la adscripción que considera dicho Decreto Ley.

Término de la supervisión

Esta fase del proceso se inicia 10 días hábiles antes de la fecha de cumplimiento de la condena impuesta, o bien, de la modificación de la pena a través de la postulación a beneficios legales. Se espera que, en esta etapa, la persona haya alcanzado los objetivos propuestos en el plan de intervención individual, disminuyendo la presencia de necesidades de intervención y presentando avances en el proceso de integración social, ya sea por la adquisición de habilidades para aquello, como por encontrarse inserto(a) en los ámbitos que fueron definidos durante el proceso de supervisión.

Durante la preparación al egreso, la persona en libertad condicional es preparada para culminar su condena, mediante un proceso de revisión de objetivos cumplidos, reforzando conductas prosociales, con acciones que potencien su alejamiento del delito. Se genera un tránsito entre el cumplimiento de condena y la integración de la persona a la comunidad como sujeto de derechos. Las actividades de egreso, por su parte, corresponden al cierre de este proceso, siendo el hito que da cuenta del cumplimiento de la sentencia y del proceso de supervisión.

El(la) DLC deberá cerrar el proceso de supervisión con una evaluación final que permita identificar los logros alcanzados durante el cumplimiento de la libertad condicional. Esta evaluación tiene por finalidad dejar consignado la situación inicial, al ingreso de la persona al beneficio, y la situación final evaluada a su egreso. La evaluación final contempla las siguientes actividades:

- Evaluación de los logros alcanzados mediante una nueva aplicación de los instrumentos de evaluación de riesgo de reincidencia general y/o específica en los casos que corresponda de acuerdo con el tipo de delito (delitos sexuales, de violencia contra la pareja, conducta violenta generalizada, abuso de drogas y/o alcohol). Cabe señalar que esta evaluación no será obligatoria respecto de quienes egresan por revocación del beneficio.
- Elaboración del Informe de Egreso: se deberá indicar los logros obtenidos para cada objetivo establecido en el plan de intervención. Además, considerando los informes previos y la información de proceso contenida en la carpeta de la persona, se deberá señalar los avances observados en su proceso de reinserción social durante el periodo de supervisión. Este informe debe elaborarse dentro de los 15 días hábiles posteriores al egreso de la persona.
- Registro del egreso en la carpeta de la persona: Para esto, el(la) DLC dispondrá de un plazo máximo de 24 horas desde la fecha de cumplimiento de la condena. En caso de generarse el término de condena en día feriado o inhábil, el(la) DLC deberá registrar el egreso el siguiente día hábil.

Adicionalmente, la jefatura de CAIS deberá instruir a quien corresponda, que se consigne el egreso administrativo de la persona en los sistemas de registro y control institucionales.

Tipos de egreso de Libertad Condicional

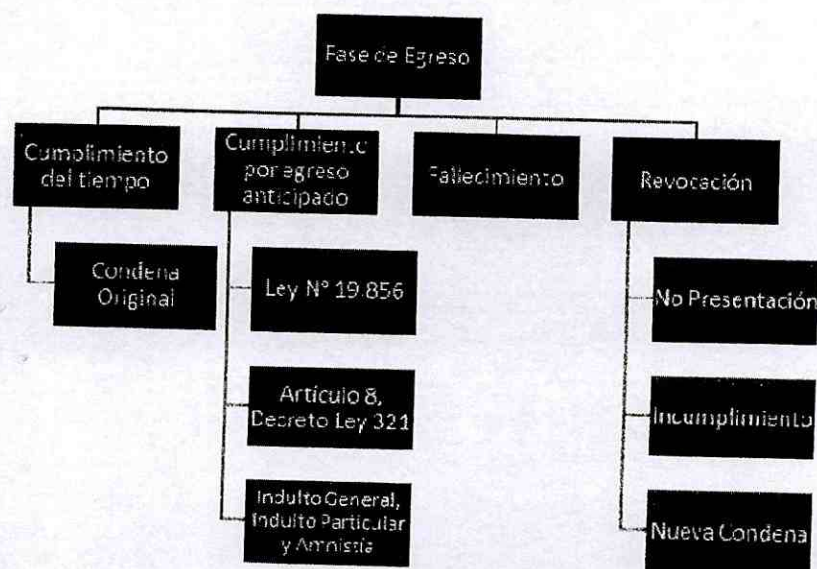
El término de la condena en libertad condicional y el egreso de la persona del CAIS se puede producir a través de los siguientes tipos:

- **Término anticipado:** egreso que ocurre en virtud de la obtención de beneficios legales asociados a la ley N° 19.856, que se hacen efectivos en el período de supervisión de la libertad condicional y/o por Resolución de la Comisión de Libertad Condicional respecto a la aplicación de artículo 8° D.L. N° 321 que otorga libertad completa a la persona. Asimismo, la persona con beneficio de libertad condicional será egresada sin que se cumpla el tiempo de la pena cuando se vea favorecido por un indulto general, particular o una amnistía.
- **Cumplimiento del tiempo de supervisión del beneficio de libertad condicional:** este egreso ocurre cuando la persona cumple el tiempo impuesto en su sentencia condenatoria, involucra también el término de las condiciones establecidas en su plan de intervención individual.

- **Por fallecimiento:** egreso que ocurre cuando la persona con el beneficio de libertad condicional fallece durante el período de cumplimiento de la pena. El(la) Delegado(a) deberá efectuar su egreso a partir de esa fecha, situación que será informada a la Comisión de Libertad Condicional respectiva, adjuntando el certificado de defunción.
- **Por revocación de beneficio de libertad condicional:** egreso que ocurre cuando la Comisión de Libertad Condicional resuelve que la persona debe dejar de cumplir su condena a través de este beneficio, debiendo ingresar a cumplir el tiempo que le reste para completar su condena en un establecimiento penitenciario. Las causales de revocación, de acuerdo con la ley son las siguientes:
 - **Revocación por no presentación:** en caso de no concretarse la presentación de la persona en los plazos establecidos en el art. N° 21 del reglamento de la ley, lo que debe informarse a la Comisión de Libertad Condicional correspondiente dentro del plazo de tres días hábiles, para que ésta se pronuncie dentro del plazo de quince días hábiles respecto de la continuidad o revocación del beneficio.
 - **Revocación por incumplimiento de las condiciones del plan de intervención:** situación que ocurre cuando la persona ha incumplido las condiciones establecidas en su plan de intervención individual sin justificación suficiente. Ante esta situación, el(la) DLC informará el hecho al Consejo Técnico, para que este informe a la Comisión de Libertad Condicional en un plazo máximo de tres días, para que, en un plazo de quince días, ésta determine si procede la revocación de la libertad condicional. Sólo la Comisión de Libertad condicional está facultada para revocar el beneficio de la libertad condicional de una persona condenada.
 - **Revocación por nueva condena:** si la persona con beneficio de libertad condicional fuese condenada por cualquier delito, el(la) DLC dentro del plazo de tres días, deberá informar este hecho a la Comisión de Libertad Condicional para que ésta se pronuncie dentro del plazo de quince días respecto de la continuidad o revocación de la libertad condicional. En caso de revocación del beneficio, la Comisión ordenará el ingreso de la persona al establecimiento penitenciario que corresponda, con el fin de que cumpla el tiempo que le falte para completar su condena.

Las tareas relacionadas con el registro administrativo del egreso de libertad condicional (por ejemplo, rebaja del sistema informático, etc.), serán funciones del operador administrativo designado al efecto por la Jefatura del CAIS.

Figura 5: Tipos de egreso de la libertad condicional



Capítulo V: Funciones y responsabilidades

1. Gendarmería de Chile

Conforme lo indica el artículo 1° del Decreto Ley N° 2.859, de 1979, que fija la Orgánica del Servicio, modificada por Ley N° 20.426, de fecha 20 de marzo de 2010, Gendarmería de Chile es un Servicio Público dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que, por resolución de las autoridades competentes, fueron detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley.

1.1. Departamento de Reinserción Social en el Sistema Cerrado (DRRSC)

Tiene por objeto desarrollar, gestionar y supervisar las actividades conducentes a la reinserción social de las personas atendidas en el sistema cerrado de los establecimientos penitenciarios con administración directa, así como la supervisión técnica de los servicios de reinserción que se prestan en los establecimientos concesionados.

Sus tareas específicas son:

- Diseñar, proponer, ejecutar, coordinar y controlar, según corresponda, las políticas, estrategias, planes, programas y acciones conducentes a la reinserción social de las personas atendidas en los sistemas cerrado y semiabierto, administrados por el Servicio.
- Diseñar, proponer, supervisar y controlar, según corresponda, las orientaciones técnicas y normativas para la ejecución de acciones conducentes a la reinserción social de las personas atendidas en los sistemas cerrado y semiabierto, administrados por el Servicio.
- Diseñar, proponer, supervisar y controlar las orientaciones y normativas para la observación y diagnóstico de la población penal, como, asimismo, colaborar con la Subdirección Operativa, en la definición de las orientaciones en materia de clasificación y segmentación.
- Coordinar con el Departamento de Salud, el desarrollo y gestión de la atención sanitaria de las personas privadas de libertad y supervisar su ejecución.
- Supervisar técnicamente el servicio de reinserción social en los establecimientos penitenciarios concesionados.
- Diseñar, proponer, ejecutar, coordinar y controlar las acciones de asistencia y atención de quienes, en virtud de un permiso de salida, se encuentren en el medio libre.
- Gestionar la obtención de recursos y celebración de convenios que contribuyan al proceso de reinserción social de las personas atendidas en los sistemas cerrado y semiabierto.
- Generar bases de datos estadísticos de la intervención otorgada a la población privada de libertad.
- Ejecutar las demás tareas que le sean encomendadas en el ámbito de su competencia.

1.1.1. Establecimiento penitenciario del subsistema cerrado

Se les denomina así a los recintos donde deben permanecer custodiadas las personas privadas de libertad en razón de su detención y mientras están puestas a disposición del Tribunal pertinente; las personas sometidas a prisión preventiva y las personas condenadas al cumplimiento de penas privativas de libertad:

Centros de Detención Preventiva (CDP): Destinados a la atención de detenidos y sujetos a prisión preventiva.

Centros de Cumplimiento Penitenciario (CCP): Para quienes cumplen penas privativas de libertad. Pueden tener los siguientes regímenes: cerrado, semiabierto y abierto.

Centros Penitenciarios Femeninos (CPF): Destinados a la atención de mujeres. En ellos existirán dependencias con espacios y condiciones adecuadas para el cuidado y tratamiento pre y postnatal, así como para la atención de hijos lactantes de las internas.

Complejos Penitenciarios (CP): Aquellos en que los establecimientos penitenciarios coexisten en un mismo perímetro y aplican un régimen interno y tratamiento diferenciado a los reclusos, con el apoyo de servicios únicos centralizados de seguridad, administración, salud, reinserción social, laboral y de registro y movimiento de la población penal.

Centros de Educación y Trabajo (CET): Son secciones de tratamiento dependientes de Gendarmería de Chile, que pueden estar ubicadas dentro o fuera de los recintos penales, donde los internos trabajan y cumplen su condena en un lugar segmentado especialmente para estos fines.

En lo que respecta a estas normas técnicas, serán los profesionales del área técnica de estos establecimientos penitenciarios los encargados de la elaboración del informe psicosocial de postulación y la necesaria coordinación con los establecimientos donde se desarrolle la supervisión de la libertad condicional, para el traspaso correcto de las carpetas individuales.

a) Jefatura técnica local o coordinador de reinserción social (establecimientos concesionados)

La Unidad Técnica Local tiene a su cargo la implementación, seguimiento y evaluación de acciones y programas referidas al proceso de reinserción social, que se desarrollen en el respectivo establecimiento penitenciario y estarán integradas por el personal de custodia y vigilancia, administrativo, técnico y profesional, cuyas funciones estén referidas a este proceso, según determine el Director Regional respectivo.

La jefatura técnica depende administrativamente de la jefatura del establecimiento penitenciario y técnicamente de la Unidad Técnica Regional. En el caso de los establecimientos penitenciarios concesionados, esta labor la desarrollará la persona encargada para tales efectos en el Servicio de Reinserción Social.

En lo referido a esta norma técnica, la jefatura de esta Unidad será responsable de:

- Distribuir los casos de personas condenadas postulantes a la libertad condicional, de acuerdo a la nómina preliminar entregada según calendarización del proceso semestral, considerando los criterios entregados al efecto,
- Informar la nómina resultante de mujeres condenadas que se vean favorecidas con el artículo 3° ter del Decreto Ley, a la Oficina de registro, movimiento y control de la población penal y al secretario del Tribunal de Conducta, de tal modo de que se acredite el haber cumplido un tiempo determinado de la condena, según lo establecido en el art. 10 del reglamento de la ley,
- Velar para que la totalidad de los informes psicosociales de postulación se encuentren elaborados e ingresados a los sistemas dispuestos para tal fin, con la debida antelación a la fecha de remisión de los antecedentes a las comisiones de libertad condicional,
- Revisar la propuesta de informe realizada por el/la profesional asignado(a) para la evaluación, pudiendo aprobarlo o rechazarlo con observaciones, conformando, así, parte del equipo que realiza la elaboración del informe de postulación psicosocial.

b) Profesional del área técnica asignado a la evaluación

Corresponde al profesional del área técnica de Gendarmería de Chile o del Servicio de Reinserción Social en el caso de los establecimientos concesionados, de formación psicólogo/a, asistente social o terapeuta ocupacional, que ha sido designado para efectuar el proceso de evaluación y confeccionar el informe de postulación, conforme a las directrices descritas.

Será responsable de la evaluación de las personas postulantes a libertad condicional y de presentar el informe a la jefatura técnica o a quien ésta designe para su aprobación.

1.2. Departamento Postpenitenciario

El Departamento Postpenitenciario tiene por objetivo "gestionar los planes y programas de asistencia a las personas que, habiendo cumplido sus condenas, requieran de apoyo para su reinserción social".

Sus tareas específicas son:

- Diseñar, proponer, ejecutar, coordinar y controlar, según corresponda, las políticas, estrategias, planes, programas y acciones conducentes a la reinserción social de las personas que han cumplido sus condenas.
- Diseñar, proponer, supervisar y controlar las orientaciones técnicas y normativas para la ejecución de acciones conducentes a la reinserción social de las personas que han cumplido sus condenas.
- Generar, de conformidad a la legislación vigente, bases de datos estadísticos de las personas que han cumplido sus condenas.
- Ejecutar las demás tareas que le sean encomendadas en el ámbito de su competencia.

1.2.1. Centro de Apoyo para la Integración Social (CAIS)

En estos establecimientos gestionan los planes y programas de asistencia a las personas que, habiendo cumplido sus condenas, requieran de apoyo para su reinserción social. Los CAIS tienen presencia regional, con dependencia técnica y administrativa de la Dirección Regional respectiva, a través de las directrices técnicas del Departamento Postpenitenciario.

a) Jefe de CAIS

La jefatura de CAIS es un funcionario público perteneciente a la planta profesional, responsable de la conducción administrativa y técnica del Centro.

Sin perjuicio de las funciones establecidas en la orgánica interna de Gendarmería de Chile, corresponderá a la jefatura del CAIS lo siguiente:

- Verificar la correspondencia entre la residencia contenida en la resolución de Libertad Condicional de la persona que ingresa y la jurisdicción territorial del Centro;
- Coordinar la correcta recepción de los antecedentes de la persona beneficiada desde el establecimiento penitenciario de origen;
- Presidir la reunión de ingreso, para designar al delegado de libertad condicional a las personas beneficiarias, de acuerdo a los criterios establecidos al efecto;
- Presidir el Consejo Técnico, como órgano asesor, y comunicar sus resoluciones a las respectivas Comisiones de Libertad Condicional.

b) Consejo Técnico

El Consejo Técnico para Libertad Condicional es una instancia de discusión, con facultades asesoras y resolutivas, cuyo objetivo es orientar a los Delegados en el ejercicio y cumplimiento de su rol frente a las personas beneficiarias de libertad condicional.

Las funciones del Consejo Técnico serán, entre otras:

- Informar a la Comisión de Libertad Condicional correspondiente el cumplimiento de las condiciones establecidas en el plan de intervención individual de las personas condenadas, cuando éstas cumplan la mitad del periodo de goce del beneficio de la libertad condicional, a fin de solicitar a la respectiva Comisión su libertad completa, con excepción de los que gocen de ella conforme a lo dispuesto en el artículo 3° bis del decreto ley N° 321, de 1925.

- Informar a la Comisión de Libertad Condicional correspondiente el incumplimiento de las condiciones establecidas en los respectivos planes de intervención, cuando no existiere justificación suficiente para ello, o la condena por cualquier delito cometido mientras se encontrare en libertad condicional, a la respectiva Comisión de Libertad Condicional a fin de que se pronuncie, en los plazos establecidos en el artículo 7° del decreto ley N° 321, de 1925, respecto a la continuidad o revocación del beneficio.
- Informar a la Comisión de Libertad Condicional la suspensión de la supervisión que realiza Gendarmería de Chile de la persona en libertad condicional, en caso de decretarse, durante el período de supervisión la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, deberá hacer seguimiento de dicho proceso y en caso de que se configure una causal de revocación, informar a la Comisión de Libertad Condicional.
- Asesorar en la resolución de cualquier otra situación de las personas en libertad condicional, relacionada con los distintos ámbitos de la gestión y supervisión que le corresponde, entre ellas, aprobar los planes de intervención de las personas en libertad condicional.

c) Jefe Técnico

La jefatura técnica del CAIS tiene a su cargo las siguientes tareas vinculadas con la libertad condicional:

- Orientar, dirigir y supervisar técnicamente al equipo de profesionales encargados de la evaluación y la intervención, cautelando que las normativas técnicas se cumplan en los términos definidos.
- Organizar el funcionamiento y distribución de carga laboral del equipo de profesionales bajo su responsabilidad.
- Participar y conducir los Consejos Técnicos.
- Planificar y guiar las reuniones de análisis de caso con el equipo y gestionar los acuerdos y resoluciones adoptadas.
- Planificar y ejecutar las reuniones de trabajo con los profesionales relativos al proceso de intervención.
- Ejecutar las demás tareas que le sean encomendadas en el ámbito de su competencia.

d) Delegado de Libertad Condicional

Es un funcionario/a de Gendarmería de Chile, que cuenta con los siguientes requisitos mínimos de formación académica y experiencia profesional para ser designado como delegado de libertad condicional:

- Poseer título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración en el área de las ciencias sociales, otorgado por una universidad o institución de educación superior, reconocida por el Estado o validado por la autoridad competente en caso de tratarse de una institución de educación superior extranjera.
- Experiencia profesional en el área de la intervención psicosocial con población infractora de ley mínima de un año.

Serán funciones del delegado de libertad condicional:

- Evaluar, cuando corresponda, el riesgo de reincidencia y las necesidades de intervención de los casos que le sean asignados, así como los factores protectores y motivacionales que puedan facilitar el proceso de reinserción social.
- Elaborar un plan de intervención individual dentro de los siguientes cuarenta y cinco días hábiles, desde que se le asigne la persona con libertad condicional para dar inicio a la supervisión establecida en el presente reglamento.
- Efectuar actividades de intervención especializada y de derivación asistida, tendientes a la reinserción social.

- Supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el plan de intervención individual de las personas y hacer seguimiento de todas aquellas situaciones que pudiesen afectar su cumplimiento, en particular, cuando aquellas pudieran configurarse en causal de revocación del beneficio.
- Informar de manera oportuna al Consejo Técnico de cualquier situación que diga relación con las funciones de éste.
- Mantener un registro de todas las actuaciones realizadas en la supervisión de caso, consignando las actividades, entrevistas, visitas en terreno y demás acciones relevantes para la evaluación de los avances en el cumplimiento de los planes de intervención individual.
- Evacuar los informes que le sean requeridos en virtud de su función.

1.3. Unidades Técnicas Regionales

Las Direcciones Regionales de Gendarmería cuentan con Unidades Técnicas, que dependerán administrativamente de la jefatura de la Dirección Regional y técnicamente de la Subdirección de Reinserción Social.

Se encargarán de supervisar y evaluar los programas y acciones de reinserción social que se lleven a cabo en los sistemas cerrado, semiabierto, abierto y postpenitenciario de la región, de conformidad a las normas y orientaciones técnicas impartidas por la Subdirección de Reinserción Social.

a) Jefatura Técnica Regional

Profesional responsable de verificar el cumplimiento de las actividades que competen a las Unidades Técnicas Regionales y de evaluar el desempeño del personal de su dependencia. Sin perjuicio de las tareas específicas que se le asignan en el ámbito de los programas y acciones de reinserción social, en el marco de la norma técnica de libertad condicional deberán realizar la designación de un profesional competente de su personal para realizar la supervisión técnica de los casos, cuando el CAIS no disponga de supervisores técnicos.

2. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Justicia y su División de Reinserción Social, es la institución encargada de proponer los lineamientos técnicos en el campo de la prevención del delito y del tratamiento de las personas condenadas, evaluando sus resultados e impartiendo las instrucciones que sean necesarias para su cumplimiento.

En el ámbito específico de la Libertad Condicional le corresponderá:

- Dictar las normas técnicas que sean necesarias relativas al sistema de supervisión de la libertad condicional, evaluando periódicamente su cumplimiento y sus resultados.
- Fiscalizar el sistema, a través de la División de Reinserción Social, pudiendo en el ejercicio de este cometido efectuar las visitas y controles que estime pertinente.

Referencias

- Andrews, D. A. y Bonta, J. (2010). The psychology of criminal conduct, 5th ed. New Providence, NJ: LexisNexis/Matthew Bender.
- Baker, K. (2017). Professional decision-making and risk assessment. Work Product of the 164th International Training Course "Effective Measures for Treatment, Rehabilitation and Social Reintegration of Juvenile Offenders". Resource material series no. 101. Tokyo, Japan.

- Baker, K. y Wilkinson, B. (2011). Professional Risk-Taking and Defensible Decisions in H. Kemshall and B. Wilkinson (Eds.) Good Practice in Assessing Risk, London: Jessica Kingslëy.
- Bonta, J. y Andrews, D. (2007) Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilitation. 2007- 06. Public Safety Canada.
- Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (2016). Estudio diagnóstico y diseño de intervención para población penal adulta. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- de Vries Robbé, M., Mann, R. E., Maruna, S., & Thornton, D. (2015). An exploration of protective factors supporting desistance from sexual offending. *Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment*, 27(1), 16–33.
- Fazel, S., Singh, J. P., Doll, H., & Grann, M. (2012). Use of risk assessment instruments to predict violence and antisocial behaviour in 73 samples involving 24,827 people: Systematic review and meta-analysis. *BMJ: British Medical Journal*, 345(7868), 1–12.
- Hanson, R. K., & Harris, A. J. R. (2013). Criminogenic needs of sexual offenders on community supervision. In L. Craig, L. Dixon, & T. Gannon (Eds.). *What works in offender rehabilitation: An evidence based approach to assessment and treatment* (pp. 421-435). Chichester, UK: Wiley-Blackwell.
- Heilbrun, K., Dvoskin, J., Hart, S. D., & McNeil, D. (1999). Violence risk communication: Implications for research, policy, and practice. *Health, Risk & Society*, 1, 91–106.
- Hilton, Z., Carter, A., Harris, G. & Sharpe, A. (2008). Does Using Nonnumerical Terms to Describe Risk Aid Violence Risk Communication?: Clinician Agreement and Decision Making. *Journal of interpersonal violence*. 23. 171-88.
- Krauss, D.; Cook, G. & Klapatch, L. (2018). Risk assessment communication difficulties: An empirical examination of the effects of categorical versus probabilistic risk communication in sexually violent predator decisions. *Behavioral Sciences & the Law*.
- Maruna, S. (2001). *Making good. How ex-convicts reform and rebuild their lives*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Instituto de Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile (2016). Estudio Antecedentes para la Implementación de Programas de Intervención Especializados en Reinserción Social para Población Penal Adulta. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- McNeill, F. y Weaver, B. (2010) *Changing Lives? Desistance Research and Offender Management*. SCCJR Project Report; No.03/2010.
- Miller, W. y Rollnick, S. (2013). *Motivational Interviewing. Helping People to Change*. Third Edition. New York: The Guilford Press.
- Negredo, L. y Pérez. M. (2019). *Intervención y tratamiento de delincuentes en prisión y medidas alternativas*. 1era. Ed. Madrid: Síntesis.
- Porporino, F.J. (2010). Bringing sense and sensitivity to corrections: from programmes to 'fix' offenders to services to support desistance. In *What else works? Creative work with offenders*, Jo Brayford, Francis Cowe, and John Deering (eds.).
- Serin, R.C., & Lloyd, C.D. (2017). *Understanding the Risk, Need, and Responsivity (RNR) model and crime desistance perspective and integrating them into correctional practice*. Washington, DC: National Institute of Corrections.
- Serin, R. y Lowenkamp, C. (2015). Selecting and using risk and need assessments. *Drug Court Practitioner Fact Sheet*, 10(1), 1-22.

- Suhr, J. (2015). Psychological assessment: a problem-solving approach. New York, NY: Guilford Publications.
- Taxman, F.; Shepardson, E.; Byrne, J. with Gelb, A. and Gornik, M. (2004) Tools of the Trade. A guide to incorporating science in practice. National Institute of Corrections, U.S. Department of Justice; Maryland Department to Public Safety and Correctional Services.
- Trotter, c. (2013). Effective Supervision of Young Offenders. In P. Ugwu-dike and P. Raynor (Eds.) What works in offender compliance. International Perspectives and Evidence-Based Practice. Hampshire, UK: Palgrave Macmillan (pp. 227-241).
- Viljoen, Jodi & McLachlan, Kaitlyn & Vincent, Gina. (2010). Assessing Violence Risk and Psychopathy in Juvenile and Adult Offenders: A Survey of Clinical Practices. Assessment. 17. 377-95.
- Ward, T. y Maruna, S. (2007). Rehabilitation. Beyond the risk paradigm. New York: Routledge
- Willis, G. y Grace, R. (2009) Assessment of Community Reintegration Planning for Sex Offenders. Poor Planning Predicts Recidivism. Criminal Justice and Behavior, Vol. 36, N° 5, 494-512."

2.- INSTRUYASE al personal de Gendarmería de Chile, respecto de la aplicación obligatoria del contenido de las normas técnicas aplicables al beneficio de la libertad condicional, que en este acto administrativo se aprueban.

3.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad a lo establecido en el artículo 27 del Decreto N° 338, de 2019, evaluará periódicamente el cumplimiento de estas normas técnicas y sus resultados. Por su parte, Gendarmería de Chile deberá remitir los informes que se le soliciten, dentro de los plazos que se establezcan.

4.- PUBLIQUESE el presente acto administrativo en la sección "Actos con efectos sobre terceros" del Portal de Transparencia Activa de la Subsecretaría de Justicia.

Anótese, Comuníquese y Archívese.


JUAN LARRAÍN FERNÁNDEZ
 Ministro de Justicia y Derechos Humanos



Distribución:

- Dirección Nacional de Gendarmería de Chile;
- Subdirección de Reinserción Social de Gendarmería de Chile;
- Departamento Reinserción Social Sistema Cerrado Gendarmería de Chile;
- Departamento Postpenitenciario Gendarmería de Chile;
- Gabinete Ministro de Justicia y Derechos Humanos;
- Gabinete Subsecretario de Justicia;
- División Reinserción Social;
- Unidad de Fiscalía, Subsecretaría de Justicia;
- Sección Partes, Archivo y Transcripciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.
 La saluda atentamente:


MONICA NARANJO L.
 SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (S)

